

Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas  
Escuela de Estudios de Posgrado

---

**ESPECIALIZACION EN HISTORIA ECONÓMICA Y  
DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS**

---

**TESINA DE ESPECIALIZACION**

---

Corporaciones agropecuarias y actores políticos  
entrerrianos en el inicio del conflicto agrario (2008)

---

**AUTOR: CRISTIAN JORGE SALVADOR WILSON**

**DIRECTOR: DRA. MARÍA CECILIA MÍGUEZ**

**CODIRECTOR: DR. MAXIMILIANO CAMARDA**

**OCTUBRE, 2020**

---

## Resumen

El presente trabajo indaga acerca del conflicto suscitado a partir de la Resolución No 125/08 adoptada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el mes de marzo de 2008, en el caso particular de la provincia de Entre Ríos.

El objetivo general es comprender el comportamiento de los dirigentes de las corporaciones agrarias entrerrianas (FAA, Sociedad Rural, FARER, FEDECO) y de dirigentes políticos de las fuerzas políticas más representativas de esta provincia, PJ y UCR, en los inicios del conflicto, atendiendo a las características estructurales del agro entrerriano que condicionaron dicho comportamiento.

Se analizan los impactos socioeconómicos y territoriales del proceso de agriculturización y sojización en Argentina y en Entre Ríos. Se destaca la presencia de los productores familiares capitalizados expandidos que, junto a otros nuevos actores del agro entrerriano, conformaron la base social y territorial que sostuvo la protesta.

Además, se explora la percepción del sector agropecuario entrerriano respecto de las retenciones y de las políticas de los gobiernos nacional y provincial en los meses anteriores a marzo de 2008.

Esta provincia se convirtió en uno de los epicentros del conflicto por el grado de beligerancia de la protesta sostenida por la unidad de las entidades rurales entrerrianas y los productores autoconvocados. Los cortes de rutas, concentrados en tres puntos estratégicos de la provincia (Paraná, Gualguaychú y Victoria) mantuvieron “aislado” el territorio y complicaron uno de los ejes de tránsito del Mercosur.

En el marco del conflicto abierto por la Resolución 125/2008 ME de retenciones móviles del 10/3/2008, se investiga acerca de las movilizaciones rurales y la conformación de los “autoconvocados” y su relación con los dirigentes de las entidades agrarias.

Se relevaron hechos y declaraciones de los actores económicos y políticos de los periódicos locales: *El Diario de Paraná* y *Diario Uno de Entre Ríos*, además del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, en el período octubre de 2007-marzo de 2008. Se elaboró un marco de referencia de los hechos y posicionamientos de los actores y se construyó una periodización para examinar las particularidades que tuvo Entre Ríos en el contexto nacional, utilizando también fuentes secundarias, examinando la bibliografía especializada.

## Índice

Lista de Cuadros.....	4
Siglas utilizadas.....	5
Introducción.....	6
Capítulo 1: El conflicto por la Resolución No 125/08 ME a nivel nacional y su modo de abordaje.....	11
1.1 Las aproximaciones económico-estructurales.....	11
1.2 Análisis desde la dimensión política.....	17
1.3 Los abordajes discursivos y culturales.....	22
1.4 Otras perspectivas.....	24
1.5 Los estudios sobre el conflicto de 2008 en Entre Ríos.....	25
Capítulo 2: Sector agropecuario, corporaciones agrarias y Estado.....	28
2.1 El “nuevo agro” argentino.....	28
2.2 Los derechos de exportación en Argentina.....	35
2.3 Gobiernos nacionales, retenciones y entidades agropecuarias (2002-2007).....	40
2.4 Inicio del segundo gobierno kirchnerista y retenciones.....	42
Capítulo 3: El contexto económico y político de la provincia de Entre Ríos.....	48
3.1 La provincia de Entre Ríos, contexto económico e importancia de la producción agrícola.....	48
3.2 Las transformaciones en la estructura económica del agro entrerriano.....	50
3.3 Cambios en la estructura social del agro entrerriano.....	55
3.4 El lugar de los nuevos actores en el agro entrerriano.....	59
3.5 Caracterización del escenario político entrerriano.....	63
3.6 Relación gobierno-corporaciones agropecuarias.....	65
3.7 El gobierno de Sergio Urribarri, fuerzas políticas y retenciones.....	73
Capítulo 4: El impacto de la Resolución No 125/08 ME en Entre Ríos: las movilizaciones.....	82
4.1 Primera etapa: Conflicto (11 de marzo – 2 de abril).....	82

4.2 Las primeras acciones de protesta.....	87
4.3 Enfrentamientos en las rutas y nueva estrategia de la MEA en el conflicto.....	98
Conclusiones.....	108
Anexos.....	114
Bibliografía.....	118

## **Lista de Cuadros**

Cuadro 1: Nivel de afiliación a corporaciones agrarias.....	39
Cuadro 2: Evolución de la producción de soja en Entre Ríos.....	52
Cuadro 3: Campañas de soja en Argentina (2005 a 2008).....	52
Cuadro 4: Campañas de soja 2005 a 2008 en Santa Fe.....	53
Cuadro 5: Estratificación de las EAPs según tamaño. Entre Ríos, CNA (2002).....	56
Cuadro 6: Estratificación de las EAPs según tamaño. Entre Ríos, CNA (2008).....	56
Cuadro 7: Actores de la producción agrícola entrerriana y superficie ocupada 2012....	60
Cuadro 8: Distribución de los nuevos actores del agro por Departamentos por superficie.....	61
Cuadro 9: Piquetes y cortes totales por provincia.....	88
Cuadro 10: Acciones ruralistas en el mes de marzo 2008 en Entre Ríos.....	89

## **Siglas utilizadas**

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BOLSACER: Bolsa de Cereales de Entre Ríos

CARBAP: Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

CGT: Confederación General de Trabajadores

CNA: Censo Nacional Agropecuario

CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria

CRA: Confederaciones Rurales Argentina

CTA: Central de Trabajadores de la Argentina

EAPs: Explotaciones Agropecuarias Productivas

FAA: Federación Agraria Argentina

FARER: Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

FEDECO: Federación Entrerriana de Cooperativas

FETAC: Federación Entrerriana del Transporte de Cargas

FPV: Frente para la Victoria

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INTA CRER: INTA Centro Regional Entre Ríos

ME: Ministerio de Economía de la Nación

MEA: Mesa de Enlace Agropecuaria

PJ: Partido Justicialista

PBG: Producto Bruto Geográfico

PBI: Producto Bruto Interno

SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación

SRA: Sociedad Rural Argentina

UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

UCR: Unión Cívica Radical

UIA: Unión Industrial Argentina

## **Introducción**

El tema de este trabajo final es el conflicto suscitado a partir de la Resolución No 125/08 adoptada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el mes de marzo de 2008, en el caso particular de la provincia de Entre Ríos. Dicho conflicto trascendió erróneamente como “campo” vs “gobierno” y consistió en un enfrentamiento político, económico y simbólico entre las entidades agropecuarias nacionales/productores autoconvocados y el gobierno nacional.

Este conflicto tuvo gran repercusión social y política en Argentina y ha sido ampliamente abordado por la bibliografía de las ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, como sucede en muchas áreas del conocimiento, la mirada suele estar centralizada en Buenos Aires y los actores nacionales, descuidando la dinámica particular de las provincias protagonistas, como en este caso, Entre Ríos. Por eso es preciso analizar los antecedentes del conflicto, pero incorporando un análisis de dicha situación particular.

La Resolución No 125/08 del Ministerio de Economía nacional del 10 de marzo de 2008 fijó que la fórmula de la alícuota de derecho de exportación se compondría en función del precio FOB de los granos de manera móvil, teniendo cada grano una alícuota que hacía que si el valor internacional de ese grano se incrementaba, lo mismo sucedía con la retención que se debía pagar al Estado en concepto de derecho de exportación. Así, la alícuota para el girasol y la soja se elevarían entre 7 y 9 puntos, mientras que habría una rebaja para el trigo y el maíz de 1 punto. Con los valores de ese momento, la soja pasaría a pagar del 35% al 44% de retenciones y el girasol del 32% al 39%.

La reacción inmediata fue la formación de la Mesa de Enlace Agropecuaria (MEA) el día 12 de marzo, constituida por las organizaciones corporativas del sector agropecuario: Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). Ésta respondió con un paro agropecuario por 48 horas, en un contexto en el que se estaban produciendo cortes de ruta en varias provincias, con asambleas de productores controlando la circulación en las rutas.

Como se anticipaba, el conflicto, motivado por el rechazo de los productores rurales, entidades agrarias y autoconvocados a dicha Resolución, abrió un escenario de confrontación nacional, con centro en la región pampeana, y se convirtió en uno de los

mayores conflictos agrarios de la historia argentina. Fue el conflicto más extendido durante los años de los gobiernos kirchneristas desde 2003.

Asimismo fue uno de los acontecimientos más trascendentes para la historia de Entre Ríos, dado que hay que remontarse al siglo XIX para encontrar a esta provincia en los primeros planos de la política nacional.

Expresa Hora (2010) que una movilización tan masiva y extendida geográficamente no puede comprenderse sin atender a las circunstancias específicas de cada provincia y cada localidad. El abordaje desde una perspectiva territorial de un proceso de alcance nacional nos permitiría comprender la red territorial y social conformada en rechazo a la medida, así como los movimientos de los actores políticos locales en torno al apoyo o disenso en las protestas.

Esta provincia ha sido considerada uno de los epicentros de la protesta de los ruralistas, ya que se produjeron cortes de rutas entre los meses de marzo a julio de 2008, los que tuvieron gran atención por parte de los medios nacionales. Los cortes de la ruta nacional 14 en el kilómetro 53 en el acceso a Gualaguaychú, el corte del acceso al Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis del lado de Paraná, y el corte en el acceso de Victoria hacia el puente Victoria-Rosario, mantuvieron a la provincia aislada del resto del país.

El conflicto, inicialmente ligado al sector agropecuario, comprendía los cortes de rutas de los ruralistas en rechazo a las medidas del gobierno nacional, pero luego se combinaron con manifestaciones y movilizaciones hacia la Casa de Gobierno provincial, o municipios o plazas de las distintas ciudades entrerrianas, adoptando una variada gama de repertorios de protesta que incluyeron tractorazos, mateadas, sentadas, entre otras, exigiendo el apoyo político del gobernador y de otros funcionarios.

Los cortes de rutas generaron una caída de la actividad económica y produjeron desabastecimientos de algunos productos, dada la metodología de obstaculizar el paso de granos y carnes, cuando éstos se combinaron con los cortes de transportistas de cargas ligados a los gremios de ese sector o autoconvocados, produjeron consecuencias como desabastecimientos de productos básicos en las ciudades, faltante de combustibles, cortes de servicios de transporte de corta, media y larga distancia, dificultades financieras en los sectores turístico, gastronómico y de servicios, además de problemas de recaudación fiscal en municipios y en las propias arcas provinciales.

De este modo, el conflicto se extendió a la sociedad e involucró a otros sectores económicos y sociales, además interpeló fuertemente a lo político y a las instituciones

del estado democrático, a partidos políticos y a dirigentes, quienes se posicionaron en apoyo de las entidades rurales, en defensa del gobierno nacional o adoptaron una postura particular, dadas las características de la economía y la política entrerrianas.

Ahora bien, ¿por qué Entre Ríos fue uno de los epicentros del conflicto por las retenciones móviles de las entidades agrarias con el gobierno nacional? Y, ¿cuáles fueron los posicionamientos y comportamientos políticos que asumieron ante el conflicto “del campo” del 2008 las entidades empresarias del agro y las fuerzas políticas entrerrianas?

En búsqueda de respuestas a estas preguntas iniciales, en esta investigación se analizarán las transformaciones en el sector agropecuario y la estructura social del agro nacional y entrerriano que posibilitaron el surgimiento de nuevos actores en el agro entrerriano, conformando la base social de los movilizados en contra de la Resolución No 125, como también la dinámica política de los inicios del conflicto agrario de 2008 en la provincia de Entre Ríos. El estudio de los factores que llevaron al alto grado de movilización de los ruralistas entrerrianos, en articulación con las entidades gremiales del agro nacional, y el posicionamiento político de otros actores empresarios y políticos, dada la escasez de estudios desde esta escala, sería un importante aporte teórico y empírico sobre la historia económica y política del pasado reciente en Entre Ríos.

El objetivo general será comprender el comportamiento de los sectores empresarios del agro (Sociedad Rural de Entre Ríos, FAA, FARER, CONINAGRO y productores/autoconvocados) y dirigentes políticos en los inicios del conflicto, atendiendo a las características estructurales del agro entrerriano que condicionaron dicho comportamiento.

Como mencionamos, se analizará el comportamiento político de las fuerzas políticas más representativas de Entre Ríos en el inicio del conflicto: el Partido Justicialista de Entre Ríos, parte del FPV, la fuerza más votada en las elecciones nacionales y provinciales en el 2007, con mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos y en los legisladores nacionales por la provincia; la UCR provincial, segunda fuerza en Entre Ríos en cuanto a composición de las cámaras legislativas provinciales y a legisladores nacionales.

Las principales fuentes utilizadas fueron los periódicos locales: *El Diario de Paraná*, *Diario Uno de Entre Ríos* y *Semanario Análisis de la Actualidad*, complementariamente los diarios nacionales *Página/12*, *Clarín* y *La Nación*, además de publicaciones en línea de sitios oficiales de las entidades agropecuarias. Se elaboró un

corpus periodístico que incluye el período que va de octubre de 2007 hasta julio de 2008, y a partir de un abordaje cualitativo se analizaron las declaraciones de los empresarios y dirigentes del agro en acciones colectivas de protesta (como marchas, asambleas y cortes de rutas), las declaraciones de dirigentes políticos y de legisladores de los partidos políticos entrerrianos, debates parlamentarios y mensajes del gobernador de publicación oficial, como también comunicados o solicitadas de diversos actores económicos, políticos y sociales.

Fueron consultados los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y los Proyectos de Resolución emitidos, de los cuales se relevaron hechos y declaraciones públicas de los diferentes actores políticos.

Además, se utilizaron numerosas fuentes secundarias, como bibliografía específica sobre la temática, artículos académicos, tesis y otras investigaciones. También se consultaron los censos agropecuarios nacionales de 2002 y 2008, publicaciones de la BOLSACER, estadísticas electorales nacionales y provinciales. El entrecruzamiento de estas fuentes permitió elaborar conclusiones.

La tesis se organiza en cuatro capítulos y las conclusiones.

El capítulo 1 desarrolla un amplio estado del arte, atendiendo afluentes de distintas perspectivas y disciplinas, y se da cuenta de las diferentes explicaciones académicas sobre el conflicto de 2008.

En el capítulo 2 se incluye una referencia a la historia de los derechos de exportación en Argentina, el proceso de agriculturización comenzado en la década de 1970 y los cambios operados en el sector agropecuario nacional en los años 90 y sus consecuencias sobre la estructura productiva y social. Se analiza la política económica de los gobiernos nacionales posteriores a la crisis de 2001, particularmente la política agropecuaria y la relación de las entidades agropecuarias con la gestión gubernamental kirchnerista desde 2003.

El capítulo 3 aborda el contexto económico y político de la provincia de Entre Ríos, deteniéndose en las transformaciones del agro desde la década de 1970 y los impactos productivos, territoriales y sociales de la expansión de la agricultura (y particularmente de la soja) hacia la segunda mitad de la década de 1990, para luego realizar una caracterización de la estructura económica provincial en la década de 2000, así como también del sistema político y las fuerzas políticas entrerrianas presentes hacia el año 2008.

El capítulo 4 analiza el impacto de la Resolución No 125/08 ME en la provincia de Entre Ríos desde los posicionamientos y comportamientos políticos de los empresarios y dirigentes de las principales entidades del agro entrerriano, contemplando los antecedentes a partir de octubre de 2007. Se construye una periodización del conflicto de 2008 en cuatro fases del desarrollo nacional del conflicto y se analiza la primera etapa desde las particularidades que asumió el mismo en Entre Ríos.

Las conclusiones abordan los objetivos y el recorrido metodológico seguido, aportando una mirada analítica a la problemática. Se dejan planteadas líneas posibles para el abordaje de las restantes etapas del conflicto en futuras investigaciones.

## **Capítulo 1**

### **El conflicto por la Resolución No 125/08 ME a nivel nacional y su modo de abordaje**

En este capítulo hacemos una revisión de los principales aportes académicos respecto del estudio del conflicto por las retenciones móviles de 2008. A partir de una lectura exhaustiva de la bibliografía existente, hemos realizado una clasificación, para poder clarificar qué aspectos abordan mayoritariamente cada uno de esos trabajos. Presentaremos entonces en distintos apartados: los que buscan la explicación en las transformaciones estructurales del agro argentino; los que indagan mayormente en la dinámica política e ideológica desplegada; los que incorporan análisis de tipo cultural, discursivo y mediático. Por último, haremos referencia a los escasos estudios específicos que analizan los cambios en la estructura social agropecuaria de la provincia y los que profundizan el análisis sobre las organizaciones de asambleas en ese contexto.

#### **1.1 Las aproximaciones económico-estructurales**

Entre los autores que se focalizan en los cambios estructurales del agro argentino de las últimas décadas, Arceo y Basualdo (2009) intentan encontrar respuestas al conflicto en las continuidades y transformaciones más relevantes en el agro pampeano de las últimas décadas, que condujeron a las alianzas que impulsaron el veto a la política pública del gobierno kirchnerista, en un período de transición luego del agotamiento del patrón de acumulación de valorización financiera en 2001. Al respecto, señalan que la expansión agrícola desde mediados de los años '90, producto de los altos precios internacionales y la renovación tecnológica, potenció las economías de escala y permitió que las rentabilidades agrarias superaran a las colocaciones financieras y que se incorporasen al negocio agrario empresas de naturaleza financiera, tales como los fondos de inversión y los pools de siembra.

Para Arceo y Basualdo (2009) los grandes propietarios pampeanos, según el análisis de la estructura de la propiedad de la tierra que realizan sobre la provincia de Buenos Aires, siguen detentando el papel central por ser los mayores terratenientes, a la vez que una tradicional “oligarquía diversificada”. La principal novedad del conflicto, según expresan, no fue la unidad entre las corporaciones agrarias, sino la subordinación de la FAA hacia la conducción ejercida por las corporaciones que expresaban a los grandes terratenientes.

Barsky y Dávila (2009) analizan los factores económicos estructurales e históricos a nivel mundial y nacional que posibilitaron la expansión agrícola desde la década de 1960 en Argentina y centralmente en el agro pampeano, modificando a partir de los cambios productivos y tecnológicos una expansión de la frontera agraria o agriculturización, desplazando a la actividad ganadera tradicional, lo cual generó cambios en la estructura agraria, con la aparición de nuevos actores agrarios. La demonización de la soja y de los pooles de siembra realizada por el gobierno nacional no alcanzó a explicar el alto grado de movilización de pequeños y medianos productores y la prolongación del conflicto. La conformación del complejo sojero habría generado una densa red productiva y social en numerosos pueblos y ciudades que dependían del ingreso proporcionado por esta producción, incluidos miles de productores agropecuarios sojeros, con lo cual, según afirman, el diagnóstico realizado en la Resolución No 125/08 ME por el gobierno nacional para la implementación de las retenciones móviles fue equivocado, por ser la quita de las rentabilidades esperadas elevadas y exageradas. Su respuesta ante el impuesto fue una rebelión social.

Sartelli (2008) caracteriza al conflicto de 2008 como un enfrentamiento interburgués. Esta ruptura en el bloque burgués expresado por el gobierno kirchnerista, que hizo que se produjeran dos fracciones que se disputasen el plusvalor social: las fracciones agrarias (burguesas y terratenientes) y las fracciones industriales, éstas beneficiadas por el Estado nacional por la apropiación de la renta diferencial y su distribución vía subsidios a empresas de transporte y energía e industrias manufactureras, por lo que “lo que aparece como una disputa con el Estado es una disputa contra la fracción burguesa beneficiada por la política estatal” (p. 225). El autor, para quien las movilizaciones implicaron una “rebelión fiscal”, desarrolla los principales acontecimientos a partir de una periodización, pero previamente historiza el agro pampeano desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la sojización, que sitúa a comienzos de la década del 70 y su expansión en los 90, destacando las bases tecnológicas de la misma, la expansión de la frontera agrícola y el retroceso de la ganadería y el sector tambero, para luego realizar una caracterización de la estructura social en la región pampeana actual.

Según Sartelli (2008), los actores del agro son: a) una cúpula externa compuesta por cerealeras, aceiteras y proveedoras de insumos; b) una cúpula interna de grandes pools y empresas agrarias; c) medianos productores; d) productores propietarios que hacen servicios de contratismo; y e) rentistas (expulsados que arriendan parcelas a

vecinos favorecidos). Esta estructura explicaría por qué actuaron las cuatro entidades en conjunto, ya que, además de su pertenencia a la misma clase, todas se dedican al mismo negocio: la producción sojera, de alta rentabilidad. Reconoce que, si bien las retenciones afectan a todos, incluso a los grandes, para aquellos que deben compensar una menor productividad con una cuota de renta, las retenciones son la forma en la cual la expropiación toca a sus puertas (p. 103), su demanda por la rebaja de las retenciones esconde la demanda por la rebaja de los arrendamientos, porque les impide toda expansión (agrandar su escala de producción), en su competencia con los capitales más concentrados.

Por su parte, Aronskind (2010) hace un análisis histórico estructural, analizando al sector agropecuario en los diferentes regímenes de acumulación de la historia económica y social argentina. Allí es donde reconoce que el régimen agroexportador dejó huellas, no sólo en los terratenientes y clases dirigentes, sino en la sociedad toda, en tanto producir en función de las necesidades de la potencia próspera. Con la recuperación económica, industrial y agropecuaria desde finales del 2002 aumentaron las presiones sociales para incrementar el gasto público, debido a las carencias acumuladas en el período económico anterior, por lo que la conflictividad social fue atendida por el estado mediante un conjunto de transferencias y subsidios que tuvieron impacto sobre su estructura, pero también se incrementaron las presiones inflacionarias como resistencia empresaria a la pérdida de rentabilidad. En el marco de la transformación del agro argentino los productores siguieron percibiendo como una intrusión la pretensión estatal de captar parte de la renta extraordinaria generada por los precios muy elevados en el mercado mundial.

Pero, señala Aronskind (2010), el gobierno kirchnerista carecía de un programa económico general y de un programa específico para el sector agropecuario, aquél priorizó el mantenimiento de una serie de precios locales directamente vinculados al consumo popular, como alimentos, energía y transporte, sin trazar una estrategia que ayudara a compatibilizar esos objetivos con la ampliación de la capacidad productiva en las áreas reguladas (p. 332). Los sectores propietarios nunca aceptaron de buen grado su tendencia hacia la autonomía estatal y el bloqueo a la resolución 125 fue también una ocasión para enfrentar, no sólo una medida específica, sino una forma más general de acción en la política económica, de alguna forma “inconsulta” con las diversas fracciones del poder económico (p. 335).

Giarraca, Teubal y Palmisano (2010) se proponen comprender por qué uno de los periódicos paros agrarios de la Argentina se convirtió en un conflicto político que mantuvo en vilo el país extendiéndose como nunca antes en la historia. Caracterizan al conflicto como “corporativo”, ya que las demandas de las corporaciones agrarias, de ser respondidas, favorecen a un sector social y no necesariamente al conjunto social. Históricamente la renta agraria generada en la región pampeana se la apropiaron los actores con mayor poder económico y, en este caso, el modelo del agronegocio está en manos de nuevos actores económicos ligados con el negocio agrario mundial: empresas semilleras, grandes exportadores y fondos de inversión, mientras que los viejos actores agrarios entraron como socios subalternos en dicho modelo.

El Estado impulsó el agronegocio, según la perspectiva de Giarraca, Teubal y Palmisano (2010), ya que la exportación primaria arrojaba saldos positivos de la balanza comercial y fiscal, lo que era necesario para pagar los servicios de la deuda pública y para cubrir necesidades presupuestarias, con lo cual, con el establecimiento de las retenciones, los gobiernos se transformaron en “socios” de determinados sectores agropecuarios, en particular de los grandes exportadores. Pero los actores a los que el Gobierno afectó con la resolución No 125 eran productores capitalistas que jugaban un papel subordinado dentro de la cadena agroindustrial sojera, mientras que la apelación de “oligarquía” asestada por el gobierno nacional a la SRA no tuvo efecto, ya que los dirigentes de esta entidad, a diferencia de los años '60 y '70, aparecen como capitalistas preocupados por sus producciones y por el país, con razonables discursos y sin aquellos deslizamientos antidemocráticos de otras décadas.

Kejsefman (2016) aborda el conflicto por las retenciones móviles a partir de las consecuencias distributivas de las nuevas correlaciones de fuerzas entre las clases y fracciones de clases desplegadas por el modelo de posconvertibilidad desde el 2002, focalizando en explicar el posicionamiento de la UIA ante el mismo. Según su interpretación, el conflicto de 2008 se explica por el conflicto distributivo y fue la expresión de la “esfera superior” (capitalistas industriales y agrarios exportadores, generadores de divisas) para frenar el derrame de recursos hacia la “esfera inferior” (capitalistas mercadointernistas y sectores de trabajadores) en el marco de las políticas de transferencia de ingresos desde el 2005 vía subsidios estatales, que beneficiaba a ésta última esfera. Por lo tanto, la “esfera superior”, productora de manufacturas de origen agropecuario (rol clave desde la devaluación), fue erosionando el consenso de posconvertibilidad “desde arriba”.

La UIA, afirma Kejsesman (2016), si bien está integrada por sectores heterogéneos, su conducción acompañó las políticas del gobierno nacional, aunque ponía reparos en los aumentos salariales en tanto erosionaban la tasa de ganancia, y, frente al estallido del conflicto, sostuvo una posición distante respecto de la Mesa de Enlace. Pero su comportamiento fue ambiguo, una vez avanzado el conflicto, que afectó al conjunto de las cadenas productivas cuyos eslabones iniciales se encuentran en el agro, la UIA realizó comunicados de prensa y solicitudes requiriendo al gobierno nacional el diálogo y remarcando el “incuestionable rol del campo” en el desarrollo nacional.

Teubal y Palmisano (2010) afirman que lo que permaneció oculto durante el conflicto fue el modelo sojero, en tanto modelo de agronegocios, a la vez que los actores concentradores del agro: multinacionales, exportadoras, aceiteras, pooles de siembra, además de las consecuencias económicas, sociales y ambientales del mismo. Tanto al gobierno como al “campo” no les convenía cuestionar sus elementos esenciales, ya que al primero le permitía lograr superávits de la balanza comercial y fiscal, necesarios para hacer frente al pago de los servicios de la deuda externa, mientras que al “campo” le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable debido al alza continua de los precios de los commodities en el mercado internacional. Y señalan que a lo largo del conflicto no participaron en forma directa ni el sector campesino, ni las comunidades indígenas, ni una parte importante de la agricultura familiar, y que la posición más incómoda le cupo a la FAA, en su alianza dentro de la MEA, explicada en parte por la desaparición de miles de pequeños productores de menos de 200 hectáreas, que hizo que se redujera significativamente tanto su número como su influencia en la entidad, por lo que la dirección de FAA optó por privilegiar los acuerdos con las demás corporaciones de la MEA favoreciendo a la mediana y gran empresa agropecuaria, en detrimento de la defensa de los medianos y pequeños productores familiares, tanto del agro pampeano como del resto del país.

Asiaín (2008) se propone conocer a los actores movilizados y comprender las causas profundas del conflicto. Plantea que, además de su aporte a la recaudación, las retenciones tienen un impacto sobre las rentabilidades sectoriales, la distribución del ingreso y la inflación, siendo esenciales para el modelo económico kirchnerista, de crecimiento con un tipo de cambio devaluado y superávit fiscal y comercial. Las exportaciones de la Argentina se conforman básicamente de mercancías cuyo precio se fija en el mercado internacional: 10 commodities dan cuenta del 42% de las

exportaciones de 2007, siendo el 24 % total productos relacionados a la soja. El precio que recibe el exportador está determinado por el precio internacional en dólares y el nivel del tipo de cambio (relativamente independientes del esfuerzo de los empresarios del sector agropecuario), además de la tasa efectiva de retenciones. El mantenimiento del tipo de cambio relativamente elevado a partir de la salida de la convertibilidad condujo a un incremento del precio en pesos de nuestra producción exportable, mientras que el alza internacional de los commodities tuvo como base estructural el crecimiento de China e India, la utilización de biocombustibles y la demanda especulativa. Las retenciones operarían en el sentido de modificar las señales de los mercados internacionales en tanto herramienta de soberanía monetaria y económica.

El actual esquema económico requiere que algún sector ceda en términos de rentabilidad internacional, argumenta Asiaín (2008). Las retenciones son una de las tantas herramientas que contribuyen a evitar una caída mayor de los salarios reales, junto con el congelamiento de tarifas, los subsidios y acuerdos de precios. Para no “importar” inflación el gobierno decidió no apreciar el peso y optó por incrementarlas para los productos que registran los aumentos de precios. Respecto de qué actor es el que en definitiva paga las retenciones, el autor indaga acerca de la teoría neoclásica de la renta a la luz de la situación del sector agropecuario argentino actual, en el marco de la expansión de la frontera agraria, y concluye que el efecto de la retención es amortiguar el incremento de las rentas y aumentar la participación de las ganancias en el producto, y que reconociendo la heterogeneidad de capitales de los actores el costo es repartido en forma inversa al poder de negociación que tienen, aunque probablemente el pequeño productor sea quien se vea obligado a resignar una mayor cuota de rentabilidad (p. 25).

Balsa y López Castro (2011) analizan las transformaciones productivas y sociales del agro pampeano para poder explicar: a) por qué la mayoría de los pequeños y medianos productores (muchos de ellos referenciados en la FAA) adhirieron a la MEA; b) por qué el gobierno no planteó una alternativa al modelo sojero y; c) por qué los ruralistas se mostraron ante la opinión pública como los representantes de los intereses del interior (p. 141). A partir de dichos cambios aparecieron en escena nuevos actores sociales reemplazando a los tradicionales: desde los años '60 y '70 los productores familiares más capitalizados habían comenzado un proceso de “aburguesamiento”, trasladándose a centros urbanos, dejando a un lado la producción para autoconsumo, la austeridad en los gastos y se adaptaron a las pautas de consumo de

las clases medias y medias altas de las ciudades, con lo cual se modificó el modo en que los productores se vieron a sí mismos y la forma de gestión de sus tareas, identificándose como empresarios rurales (p. 146).

Según estos autores, la expansión de tierras hizo revalorizar los campos y los precios de arrendamiento subieron, aumentando la renta del suelo para los propietarios por sobre las ganancias capitalistas, lo que explicaría el activismo de pequeños y medianos propietarios pampeanos (muchos rentistas “puros”) contra las retenciones móviles, a los que no les interesó ninguna propuesta de segmentación del gobierno. Estos ruralistas tuvieron una identidad “distorsionada” que les impidió sumarse a cualquier desarrollo alternativo al modelo productivo imperante, porque éste se había instalado como deseable y exitoso (p. 156), algo a lo que tanto la dirigencia de FAA en su discurso agrarista, como también el propio gobierno habrían contribuido con la débil estructura e institucionalidad estatal agraria (p. 158).

## **1.2 El análisis desde la dimensión política**

Otros autores abordaron el conflicto de 2008 desde la dinámica política e ideológica desplegada, o intentando articular los procesos económicos estructurales con la dimensión política e ideológica.

Varesi (2014) afirma que, para comprender el “conflicto del campo”, hay que analizar sus componentes específicamente políticos, en el plano de la construcción de hegemonía, pero articulando con las dinámicas de la acumulación que actúan como sustrato de aquéllos. Para ello examina sus características tanto a nivel del modelo de acumulación como del circuito productivo específico al que se vinculó el conflicto. La agriculturización se fue convirtiendo en sojización, siguiendo las lógicas del agronegocio, por lo que el desarrollo del circuito sojero es indisoluble de su relación con el modelo de acumulación, beneficiado con la devaluación del peso a partir de 2002. Este modelo generó una concentración productiva y empresarial modificando la estructura social agraria. El conflicto del “campo” se dio en un contexto de fuerte incremento del precio de la soja, del 118% en sólo un año, pero el planteo inicial contenía un conjunto de debilidades: no hacía diferenciaciones entre los distintos agentes, en relación a su tamaño y ubicación geográfica, lo que motivó una rápida respuesta de las patronales agrarias y el conjunto de actores vinculados al circuito sojero, que traspasó el grado gremial de la disputa hacia una dimensión específicamente

política, sobre la base de la constitución de dos polos beligerantes con sus respectivas construcciones identitarias.

El gobierno, afirma Varesi (2014), subestimó las fuerzas del adversario, y la acción colectiva proveniente de las entidades patronales apeló a la apropiación y la resignificación del acervo de protesta desplegado por los actores de las clases subalternas en su lucha contra el neoliberalismo: “piquetes”, asambleas, cacerolazos y escraches. El corte de ruta se constituyó en la principal medida, que mostró el carácter decisivo que tuvo en el conflicto la dimensión territorial, en tanto la propia organización y los tiempos del circuito productivo y la expansión de su frontera habilitaron la diseminación de numerosos “piquetes” en las múltiples provincias sojeras (p. 17).

Gras (2010) y (2011) analiza el rol de los “autoconvocados” en el conflicto de 2008, grupo que buscaba canalizar políticamente las demandas de representación. Para comprender a este nuevo actor agrario analiza el proceso de más largo plazo de transformación del agro argentino, a partir de analizar los cambios en la estructura social con la expansión del nuevo modelo productivo desde la década del '90, y particularmente con la expansión sojera, para entender la centralidad que ocuparon las capas empresariales, fundamentales en las protestas, y dilucidar cómo volcaron en lo político su peso económico, su capacidad de movilización y de convocatoria a otros sectores y grupos sociales. Este grupo tuvo participación activa durante el conflicto, surgidos en los años '90 a partir de la pérdida de representatividad de las corporaciones agropecuarias entre los productores, quienes no se alinearon completamente detrás de las entidades agrarias.

A partir de una investigación realizada en la provincia de Buenos Aires, sostiene Gras (2010) que sus integrantes, con estudios universitarios vinculados al agronegocio, se modernizaron adquiriendo tecnología de punta y reconvirtieron la empresa familiar a partir de campos heredados de mediana a gran propiedad de la tierra. Radicados en pueblos de ese interior y con fuerte vinculación con la comunidad, conciben que su aporte a la trama productiva local fuera fundamental para el desarrollo local y, a la vez, sirvió para apuntalar su propia rentabilidad. Eran actores que a partir de 2002 habían alejado el fantasma de la expulsión y comenzaban a incrementar su rentabilidad y ganancias significativamente, que buscaban traducir ese capital económico en capital político (Gras, 2011, p. 54).

Roy Hora (2010), en su ensayo, plantea que el conflicto de 2008 significó la movilización agraria más importante de la historia nacional y la primera derrota política

del kirchnerismo desde 2003. Interroga desde dos perspectivas posibles para el abordaje del conflicto de 2008: por un lado, la forma en que se desarrolló la movilización agraria, y por otro, la unidad de intereses lograda por el “campo” y la amplia adhesión urbana a su reclamo. En cuanto al primer aspecto, los productores rurales, cuyas entidades tenían dificultades organizativas, se apropiaron de los “piquetes”, una forma de protesta social comenzada en los años ’90, que tuvo la complacencia del gobierno nacional y, por lo tanto evitó su represión. En lo referente al segundo punto, el “campo” ganó la batalla por el control del espacio público en las rutas, el interior, la Capital Federal y las grandes ciudades, siendo eficaz para interpelar nuevos públicos, por lo que la movilización urbana en su apoyo se constituye en uno de los fenómenos políticos más originales y significativos de las últimas décadas.

Se pregunta Hora (2010): ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron su construcción como fuerza unificada con amplios apoyos urbanos? Y señala un elemento que es lo que esta tesis intenta dar cuenta, “una movilización tan masiva y extendida geográficamente no puede comprenderse sin atender a las circunstancias específicas de cada provincia y cada localidad” (p. 95). Y señala dos originalidades que tuvo el conflicto: la intensidad y extensión en el tiempo; y el amplio apoyo social dentro y fuera del sector rural. A las respuestas las encuentra en las transformaciones de largo y corto plazo que las hicieron posible: cerca de dos tercios de las actividades vinculadas con la producción agrícola son llevadas adelante por figuras ajenas a los propietarios del suelo (proveedores de servicios, contratistas, transportistas), lo que contribuye a explicar el eco que la protesta agraria encontró en pueblos y ciudades de los distritos agrícolas (p. 109). Y, por otro lado, su fuerza fue dada por la coyuntura de un gobierno confrontativo y por la libertad concedida en las rutas, ambos factores aglutinantes y revulsivos (p. 110), concluyendo que, para este sector con mayor capacidad de defensa y reacción que de organización e iniciativa, el conflicto produjo sus propios actores.

Pucciarelli (2017) caracteriza el conflicto como el momento fundacional de dos proyectos prehegemónicos, esto es un proyecto republicano, conservador, institucionalista, productivista y neoliberal; y otro nacional, popular, desarrollista, distribucionista y democrático, expresado por el kirchnerismo. Ambos lucharon por la supremacía en un nuevo régimen de hegemonía escindida, entre el movimiento nacional kirchnerista, en el Poder Ejecutivo, y una especie de nueva oposición, encabezada por un conglomerado social y político nucleado por una corporación agromediática en proceso de construcción (p. 352).

Utilizando el criterio cronológico, Pucciarelli (2017) periodiza el conflicto en cinco etapas: 1) delimitación del campo de disputa (11-25 de marzo); 2) la contraposición populismo versus republicanismo (26 de marzo-15 de mayo); 3) enfrentamiento entre la nueva interpretación oficial (poder político vs poder corporativo) y la renovada versión de la oposición (autonomía ciudadana vs heteronomía clientelar) 15-25 de mayo; 4) la oposición intensifica la lucha en el interior pampeano y el gobierno plantea una nueva contraposición entre legitimidad democrática y presión corporativa (26 de mayo-7 de junio); 5) la resolución del conflicto se traslada al Parlamento. Comienzan a confrontar dos proyectos prehegemónicos, en términos de composición social, modo de acción política, formas de apelación y estrategias de justificación (7 de junio-17 de julio). El autor concluye que el debate en el Senado sobre la oportunidad y características de “la 125” quedó opacado por la discusión sobre las atribuciones del Estado para intervenir en los procesos de circulación y apropiación del excedente económico, quedando delineados los proyectos prehegemónicos (p. 372).

Giarracca (2010) caracterizó al enfrentamiento “campo” - gobierno como un conflicto patronal por impuestos estatales que les influyen directamente en las condiciones de producción, las tasas de ganancia y las posibilidades de apropiación de renta, como los hubo en otras etapas históricas, pero que en el 2008 cobró una dimensión política por la respuesta desmesurada del Gobierno frente al paro y su escasa capacidad de negociación. Problematiza sobre la noción de “pools de siembra”, identificados por el gobierno nacional como los grandes productores, ganadores del modelo sojero, pero se remite a una investigación realizada sobre los colonos del sur de Santa Fe, los cuales la mayoría de los que estaban produciendo soja declaraban pertenecer a un “pool de siembra”, siendo pequeños agricultores, y el “pool” era una solución para superar la escala de producción que la soja les exigía, aunque reconoce la existencia de otro tipo de propietarios-arrendatarios de 2000 ha o más de tierra. Según su observación, el “paro” fue convertido en “conflicto” y caracterizado por el Gobierno como crucial e indispensable para cambiar de modelo, para “terminar con la polarización social, con la pobreza y la indigencia”, con lo cual disciplinando a los productores se estaría en condiciones para redistribuir los ingresos, esto es cambiar las reglas capitalistas modificando la estructura de clases, algo que la autora no advierte sobre lo sucedido.

Para de Anchorena (2017), el conflicto agropecuario de 2008 es un caso paradigmático que permite comprender cómo las capacidades estatales y el poder de las

corporaciones afectan la autonomía estatal en el marco más general de gobiernos post-neoliberales que promovieron procesos de desarrollo con objetivos de inclusión social. La autora aborda el tema no desde los cambios estructurales del agro ni desde la puja distributiva, sino desde las capacidades de los actores involucrados, y sitúa a éste como un conflicto del desarrollo, ya que la disputa sucede en un contexto de crecimiento económico, no de crisis, entre el Estado y un sector ampliamente beneficiado por las políticas públicas.

Para analizar la interacción entre Estado y empresarios, de Anchorena (2017) elabora una periodización respecto a la acción empresaria para influir en las políticas públicas y las capacidades estatales que se pusieron en juego, que abarca pre-conflicto (2002-2007), el conflicto de 2008 y el post-conflicto (2008-2011). Como debilidad estatal, señala que existió una falta de anticipación del conflicto y de dispositivos institucionales formales e informales para desactivarlo, aunque la fortaleza de la capacidad estatal estuvo en que el gobierno no cedió ante las presiones corporativas, manteniendo el rumbo del modelo de desarrollo. Aunque el conflicto construyó un nuevo actor político, que aglutinó a todo el arco opositor en un enfrentamiento con el gobierno kirchnerista recientemente asumido, posibilitando disputar algo más que las retenciones y las políticas públicas: la autonomía del Estado (p. 175).

Villulla (2009) analiza los comportamientos de diferentes actores económicos, sociales y políticos frente al conflicto de 2008, contextualiza a la Resolución No 125/08, que lo originara, como la consecución del gobierno de instrumentar un mecanismo extraordinario de recaudación fiscal, en el marco del contexto de crisis económica mundial, de especulación financiera con los precios de commodities como la soja, que habían alcanzado niveles récords y de un año de vencimientos de pago de deuda externa de Argentina. El gobierno nacional, al instrumentar una intervención como las retenciones uniformes a todos los productores, siendo que el 80% de la producción de soja estaba en manos de tan sólo el 20% de los productores de mayor envergadura, unificó a todo el arco agrario.

En cuanto a las alianzas conseguidas durante el conflicto, según Villulla (2009) el gobierno consiguió el apoyo de las dos centrales de trabajadores más grandes del país: CGT y CTA, alineadas contra la sojización (que había crecido durante el gobierno de Kirchner) y por la idea de la redistribución de la riqueza, así como la reedición de la vieja oposición entre peronismo vs oligarquía. Los movimientos de desocupados quedaron divididos en su apoyo al gobierno y al campo, intelectuales progresistas y

organismos de derechos humanos se alinearon con el gobierno ante la idea del “golpe destituyente”. A las corporaciones agropecuarias se les sumó el movimiento de autoconvocados, la UATRE que los apoyó y los afectados indirectamente por la medida, como los contratistas de servicios, los rentistas, los transportistas y todos aquellos que dependían de los ingresos de los productores en los pueblos del interior.

### **1.3 Los abordajes discursivos y culturales**

Entre los autores que se centraron en el análisis cultural, discursivo y mediático del conflicto, Yabkowski (2010) indaga acerca de la representación política y sus sentidos en el conflicto de 2008. Primero analiza los discursos de la presidenta Cristina Fernández y luego los discursos del “campo” y algunos medios de comunicación. El discurso de la presidenta, en un primer momento definió al conflicto como económico: se discutía la distribución del ingreso y el modelo de país; pero en un segundo momento, luego de los cacerolazos y al no lograr quebrar la unidad de la MEA, los discursos pasan a definirlo como político apropiándose de los significantes democracia, representación, voto popular y “todos”, de manera que los antónimos permanecieran en el campo contrario. El discurso del “campo” atacó a las retenciones por ser confiscatorias y al Estado en tanto “caja”. Para ello se basó en el eje de apelación a “las bases” (autoconvocados, no afiliados a ninguna organización) para construir y consolidar legitimidad, derivado de un estado de no corruptibilidad y con un accionar espontáneo y sin organización previa, lo que le permitió a la MEA no ser ni responsables ni promotores de la politización de las bases, precisamente porque la virtud de éstas residiría en su apoliticidad. En cuanto al discurso mediático se focaliza en el tratamiento diferencial que realizó Clarín de las movilizaciones del “campo” para dotadas de legitimidad, en oposición a las de apoyo al gobierno nacional.

Vommaro (2010) se ocupa de analizar lo que para él fueron dos “relativas novedades” que emergieron con el conflicto: la reaparición de las divisiones sociales como principio de la lucha política y el recurso a la movilización como forma de demostración y de objetivación de los apoyos. Hace un análisis sociológico a partir del tratamiento que le dieron al conflicto los diarios Clarín y La Nación, con referencias también a Página/12 y Crítica. Para el autor los dos primeros medios construyeron una mirada estigmatizante de la relación de los sectores populares con la política y el intento de parte del gobierno de presentar el conflicto como un enfrentamiento entre las “minorías poderosas” -el piquete de la abundancia- y el pueblo -en la figura de sus

representantes- chocó con la representación dominante de la política en términos de “caja” y del Estado como “expoliador” (p. 186).

Artese y otros (2013) analizan las representaciones construidas por el diario La Nación durante el conflicto agrario de 2008, en tanto medio productor de discursos que generó significados que influyeron en el mapa cambiante de alianzas sociales. Los autores contextualizan este trabajo en el marco de las transformaciones económicas y sociales del agro argentino de las últimas décadas y en el escenario político de la resolución de retenciones móviles, para estudiar un corpus discursivo de este medio gráfico compuesto por editoriales y noticias vinculadas al conflicto. A partir de esto, evalúan la cantidad de declaraciones que el medio les otorgó como espacio a las “personificaciones”, concluyendo que en primer lugar se encontraron los empresarios agrarios, en segundo lugar los dirigentes de partidos políticos opositores al gobierno nacional, en tercer lugar intelectuales, en cuarto lugar funcionarios y dirigentes oficialistas y por último sindicatos y movimientos sociales. Asimismo muestran que la distribución de declaraciones que iban dirigidas contra un actor específico, fueron en un 75% contra el actor “gobierno nacional y aliados”, siendo los nudos discursivos más importantes de los ruralistas las caracterizaciones y calificaciones por un lado, y las denuncias y acusaciones, con lo cual deducen que la principal estrategia de las corporaciones agrarias fue la confrontación, contrariamente a lo que se estableció desde el sentido común que era el gobierno el que tenía un estilo confrontativo. Mientras que las declaraciones producidas por los funcionarios de gobierno contienen en primer lugar caracterizaciones o calificaciones, seguidas por los reclamos y exigencias en segundo lugar, por lo que el principal objetivo del oficialismo fue cuestionar a los sectores sociales que impulsaron la protesta por haber pretendido un mayor lucro al que ya estaban obteniendo.

Rigotti (2014) plantea reconstruir las matrices culturales que posibilitaron las intervenciones en el espacio público durante el conflicto de 2008, a partir de testimonios de algunos protagonistas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Desde una perspectiva de análisis cultural, problematiza los abordajes de ciencias sociales centrados en la noción de clase y de estructura social, que permiten establecer el conflicto entre cada una de las posiciones de la estructura y su conformación, pero que no pueden explicar cómo distintas posiciones se “ponen de un mismo lado” y cómo conforman una identidad que no es inmediatamente la de la clase (p. 12). La matriz cultural, sedimento de discursos y prácticas, es la que permitió acercar posiciones

diferentes en la estructura social en el espacio público escindido entre los que defendían al Gobierno y quienes decían “ser” el Campo.

Centrándose en la matriz cultural que constituyó los procesos de identificación política de aquellos que se vieron a sí mismos como “el Campo”, las entrevistas realizadas a propietarios, arrendatarios, prestadores de servicios y trabajadores rurales de diferentes edades, permitió reconstruir el registro imaginario de anécdotas de infancia, reuniones familiares, aprendizaje de las labores del campo, entre otras, que remitían a los entrevistados a los caracteres de aquellos chacareros arrendatarios inmigrantes de las primeras décadas del siglo XX, cuyas labores involucraban a todo el grupo familiar y habían desarrollado prácticas de autoconsumo. Esta identificación “somos el campo” implicó a distintos actores sociales que pertenecían a diferentes posiciones sociales objetivas y, concluye Rigotti (2014) fue el sustrato sobre el que se desplegó el conflicto de 2008.

#### **1.4 Otras perspectivas**

Sáenz (2009), dirigente de una fuerza política de izquierda del país<sup>1</sup>, elaboró un ensayo en el que caracteriza la situación económica y política generada por la instauración de la Resolución No 125, además de argumentar contra los posicionamientos político-ideológicos de otras dos fuerzas políticas de izquierda que apoyaron la postura del “campo”: el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). El conflicto implicó una rebelión de todas las fracciones capitalistas vinculadas a la producción de soja frente a las fracciones burguesas expresadas por el gobierno, alrededor del reparto y apropiación de la renta agraria extraordinaria, provocada por el aumento de precios internacionales de los commodities (p. 7), además aceleró una crisis del modelo económico kirchnerista y puso en evidencia la estructura económico-social y el comportamiento de las clases sociales. El autor, tras analizar la transformación de la base material del agro pampeano en las últimas décadas, que condujo a la aparición y reformulación de los sectores propietarios y capitalistas, afirma que “el opulento movimiento social emergido con la rebelión sojera cuestionó al gobierno desde la derecha y una posición socioeconómica privilegiada, no desde los intereses de los explotados y oprimidos del país” (p. 26).

---

<sup>1</sup> Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo) que, según asevera, se mantuvo independiente durante el conflicto, frente a aquellos sectores de izquierda que apoyaron al gobierno o al campo.

Ante este acontecimiento, los partidos de izquierda se dividieron entre aquellos que se mantuvieron independientes, los que apoyaron al gobierno y al campo. Entre las fuerzas que defendieron la postura del campo, Sáenz (2009) critica la caracterización realizada por el PCR de la burguesía agraria como una clase oprimida y expoliada por propietarios terratenientes, dado que la concentración de la propiedad opera como impedimento al desarrollo capitalista en el agro, por lo cual los chacareros (no propietarios), que aportaron masividad a las protestas, debían recibir el apoyo de los trabajadores (urbanos y rurales) en el sentido de una “revolución democrático-popular”. Mientras que sobre la postura asumida por el MST, el autor la califica de “socialista liberal”, critica su apoyo a los pequeños productores expresados por la FAA frente a los grandes terratenientes y pools de siembra, sin plantear el quiebre de la unidad de la MEA y sin indagar en la naturaleza social de aquellos “productores”. Lo que tendrían en común ambos posicionamientos sería que no advirtieron que el programa real del paro agrario fue exigir libertad de comercio con el mercado mundial sin importar las consecuencias para la clase trabajadora y popular (p. 79).

Solanas (2009), diputado nacional por Entre Ríos, elaboró una obra testimonial en la que incorpora una serie de reflexiones, declaraciones personales y de otros protagonistas, junto con proyectos de ley y artículos que contribuyen a fundamentar su posición durante el conflicto de 2008 en favor de las retenciones móviles impulsadas por el gobierno nacional. Al respecto advierte que el gobierno, con su discurso, contribuyó a unificar a grandes y a pequeños productores, así como a intereses contrapuestos, entre un modelo sojero que había afianzado y que luego pretendió poner límites en su rentabilidad (p. 11), a la vez de la paradójica situación ética de que grandes propietarios de tierras, productores de soja, eran al mismo tiempo legisladores que tuvieron que decidir sobre la temática.

### **1.5 Estudios sobre el conflicto de 2008 en Entre Ríos**

Domínguez y Orsini (2009) enmarcan el conflicto en las transformaciones que experimentó el agro argentino en los últimos años, particularmente con la expansión agrícola y el cultivo de la soja, a partir del aumento de los precios internacionales que produjeron un incremento en la renta diferencial del suelo en este sector. Su explicación es de tipo estructural; analizando las transformaciones de la estructura agropecuaria de la provincia de Entre Ríos plantean que coexiste una fuerte subdivisión y, paradójicamente, una importante concentración en el uso del suelo, factores que

generaron que las protestas rurales desde principios de marzo de 2008 en la provincia se dieran de manera virulenta.

La expansión sojera generó las mismas consecuencias que lo ocurrido en el país desde mediados de los años '90, implicando el desplazamiento de la ganadería, la desaparición de miles de explotaciones agropecuarias y el aumento del tamaño medio de las explotaciones que sobrevivieron, aunque específicamente para el caso entrerriano el número de pequeñas explotaciones sea importante, ya que producto del proceso histórico de colonización se originó una fuerte subdivisión del suelo y “en 2002 existían en Entre Ríos alrededor de 12.572 explotaciones menores a 100 hectáreas, las que representan el 58,3% del total provincial pero ocupaban sólo el 8,3% de la superficie productiva censada” (p. 227), situación que probablemente provocó que muchos pequeños propietarios hayan cedido en alquiler sus tierras, debido a la escasez de capital y al creciente aumento de la escala productiva del cultivo de soja que hizo inviables las explotaciones pequeñas. Por el contrario, las medianas explotaciones familiares de 200 a 1.000 hectáreas con capacidad de capitalización incorporaron tecnología y escalas alquilando tierra.

El intento de aplicar retenciones móviles por parte del gobierno, afirman Domínguez y Orsini (2009), perjudicó en mayor medida la rentabilidad y perdurabilidad de los pequeños productores y no de los medianos y grandes, quienes por su tamaño poseen capacidad de acumulación, acceso al crédito y tecnología para afrontar ese arancel, por lo que acercó los intereses entre productores pequeños (menores de 200 hectáreas), medianos, medianos-grandes y grandes productores innovadores en defensa de la rentabilidad y en oposición al sistema de retenciones móviles (p. 232-233).

Serrano (2013) describe y analiza, a partir de entrevistas realizadas, las formas de organización de las asambleas de productores/autoconvocados (noción que incluía a una multiplicidad de actores, tanto afiliados a algunas de las entidades agropecuarias como a los propiamente “autoconvocados”) apostados en uno de los centros de protesta de la provincia de Entre Ríos, el Túnel Subfluvial, durante el transcurso del conflicto agropecuario, además intenta determinar el grado de autonomía de esta asamblea respecto de los posicionamientos públicos de la MEA a nivel nacional y el nivel de representación política de ésta con respecto a los asambleístas. Asimismo intenta dilucidar si existieron diferencias entre los representantes de las entidades y los autoconvocados. Afirma que uno de los principales factores que influyó en la importante participación de productores de Paraná y localidades cercanas, devenidos en

asambleístas, fue la ubicación geográfica del lugar, un centro de referencia de alto grado de impacto político y mediático.

El autor concluye que esta asamblea mantuvo una estrecha relación respecto a los posicionamientos públicos de la MEA, la que influyó en su grado de autonomía a la hora de determinar las acciones beligerantes desarrolladas, adhiriendo en gran medida a los posicionamientos de ésta, aunque se reservó un importante grado de autonomía a la hora de determinar las formas de organización que adquirió la asamblea (p. 94), cuya beligerancia estuvo dada por decisiones que respondían a situaciones particulares en que se iba desarrollando el conflicto. La relevancia del liderazgo del referente de la FAA local y la coordinación de las medidas de fuerza a nivel provincial con los referentes de las entidades agrarias de los otros centros de protesta provinciales, fueron factores claves para unificar posiciones comunes a la estrategia desplegada por la MEA nacional, así como también para contener acciones más extremas de las bases en momentos puntuales de algunas de las movilizaciones.

Teniendo en cuenta los diferentes análisis del conflicto de 2008 en el plano nacional a partir de distintos abordajes que pusieron énfasis en una de las dimensiones de lo social, o intentaron articularlas, procederemos a desarrollar el escenario de las transformaciones económicas y sociales globales y nacionales que impactaron en el sector agropecuario argentino o “nuevo agro”, sistematizando la bibliografía específica que aborda el tema.

## **Capítulo 2**

### **Sector agropecuario, corporaciones agrarias y Estado**

En este capítulo se describen las transformaciones económicas y productivas en el agro argentino, fundamentalmente en la región pampeana desde la década de 1960, así como también los cambios a partir de la instalación de los agronegocios que implicaron la expansión del cultivo de soja en los años 90. Se mencionan las consecuencias sociales y la conformación de una nueva estructura social en el agro argentino, con el objetivo de identificar cambios y continuidades que repercutieron sobre el agro entrerriano.

Asimismo, se indaga sobre los derechos de exportación en Argentina en diferentes regímenes de acumulación para contextualizar históricamente su evolución y analizar su rol. Se indaga acerca del restablecimiento de las retenciones a partir de 2002, el papel que le asignaron los gobiernos kirchneristas desde 2003 y los posicionamientos de las corporaciones agropecuarias para comprender el grado de apoyo o rechazo ante los diferentes aumentos.

#### **2.1 El “nuevo agro” argentino**

El capitalismo neoliberal globalizador, originado en Europa occidental y los Estados Unidos en la década de 1970 impulsó la necesidad de cambiar la dinámica de la acumulación capitalista a través de los procesos de ajuste estructural, que fueron modificando las funciones sociales del Estado de Bienestar, transformando el modelo productivo fordista y flexibilizando el mercado laboral. Junto con un proceso de revolución tecnológica, los países centrales impusieron un nuevo orden internacional basado en una nueva división internacional del trabajo de fuerte competitividad y economías abiertas, donde las áreas centrales se reservaron las actividades económicas más rentables, mientras que a las áreas periféricas les quedaron reservadas las actividades manufactureras de baja complejidad o la producción especializada de commodities, como es el caso de América Latina, y de Argentina en particular (Sili, 2005).

El importante crecimiento poblacional a nivel mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, generó una importante demanda internacional de alimentos y granos, provocando una “Segunda Revolución Agrícola en Occidente”, cuya expansión tecnológica en la producción agropecuaria lo tuvo a Estados Unidos como principal exponente (Barsky y Dávila, 2009). La sustitución de variedades agrícolas tradicionales

por otras de altos rendimientos, los impulsos en producción de maquinarias e implementos agrícolas, así como también la generalización del uso de semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, también contribuyeron a esta expansión.

Las transformaciones productivas y tecnológicas que comenzaron en Argentina en la década de 1960 devinieron en una modernización agrícola, la “agriculturización” de la región pampeana de las décadas siguientes, con lo cual se generó un desplazamiento de 5 millones de hectáreas (ha) de la ganadería a la agricultura y la consecuente expansión del cultivo de la soja. Si bien se generó un desplazamiento ganadero desde la región pampeana hacia las extrapampeanas, la producción de stock ganadero se ha mantenido estable por varias décadas, hecho al que también ha contribuido los sistemas intensivos de producción como los feed-lots y, en el caso de la producción lechera una notable expansión, aunque en el marco del cierre de tambos pequeños y la concentración productiva en manos de grandes empresas.

A partir de la década de 1990 se consolidó en Argentina este proceso de agriculturización o producción agrícola permanente en lugar de las rotaciones agrícola-ganaderas, que fueron la estrategia productiva principal en la Argentina hasta mediados de la década de 1970. Así, la agricultura se convirtió en la actividad de mayor crecimiento en el PBI total agropecuario y de mayor volumen de negocios en las áreas rurales, desplazando a la ganadería hacia áreas marginales. Las inversiones privilegiadas pasaron a ser las de corto plazo en agricultura, especialmente cereales y oleaginosos en la región pampeana, particularmente la producción de soja.

La relevancia adquirida por el cultivo de soja está expresada en estos números. La soja, en la campaña 1971/72, ocupó 79.800 has. En la campaña 1981/82 se ubicó entre los principales cultivos con 2.040.000 ha. Hacia 1986/87 el área sembrada de soja superó a la del maíz, y en la de 1991/92 a la del trigo, convirtiéndose así en el cultivo más importante del país. En la campaña 2007/08 el área sembrada con soja superó los 16 millones de ha, ocupando el 50% de la superficie cultivada del país, con una producción total de 47 millones de toneladas.

La soja es un cultivo oleaginoso originario de China. Su cultivo ha adquirido gran desarrollo en la actualidad, pues posee un elevado contenido de aceite, tanto comestible como industrial. Como alimento es rico en proteínas y también es una importante materia prima para diversas industrias, a la vez que alimento para el engorde de animales como el cerdo. Su cultivo en nuestro país registra intentos de

implementación anteriores a la década de 1970, pero es en esta década cuando se producen importantes avances en superficie sembrada y toneladas producidas. Desde entonces, se ha incrementado rápidamente el área sembrada y los volúmenes de producción, siendo la región pampeana la que concentra en un 90% su producción, en la que es el principal cultivo y en la “zona núcleo” desplazó al maíz y al girasol (Barsky y Dávila, 2009).

Debido al bajo consumo interno y a los intereses de los grupos económicos del complejo agroindustrial, su desarrollo se caracterizó por su exportación (especialmente productos con escasa elaboración industrial, como harinas y aceites en bruto). Se lo cultiva en zonas templadas, aunque tolera la escasez y el exceso de agua; la zona más apta es la Pampa Húmeda, aunque su cultivo se expandió hacia el Noreste y el Noroeste dada la implementación tecnológica, aunque con menores rindes que en la zona pampeana.

Cuando la soja es único cultivo en cierta tierra se denomina monocultivo. La soja de primera se siembra en octubre y se cosecha en marzo. Cuando en la misma tierra se hace trigo y soja en el mismo año mediante el sistema de siembra directa, se deja el rastrojo de trigo sobre el cual se siembran las semillas de soja, evitando la erosión del suelo y concentrando la humedad. Se llama soja de segunda a la soja sembrada en los meses de noviembre o diciembre.

Cabe aclarar que con el sistema de siembra directa a partir de la utilización de sembradoras especializadas difundidas en la década del '80, ésta tuvo una importante expansión, aunque a la vez permitió generar la expansión del cultivo del trigo, dadas las posibilidades de doble cultivo trigo-soja, permitiendo aprovechar los nutrientes. Según Barsky y Dávila (2008) los datos del CNA de 2002 mostraban la relevancia de la siembra directa, que abarcaba ya 15.100.000 ha con un 53,8% de la superficie cultivada total, de las cuales 8.670.000 ha eran de soja (el 66,8% de la soja de primera y el 100% de la soja de segunda), 3.150.000 ha de trigo (53,8% del trigo sembrado) y 1.723.000 ha de maíz (61,6% del maíz sembrado). Sin riesgos de monocultivo de soja, según estos autores, dado que la expansión también generó el crecimiento del trigo, a la vez que el paquete tecnológico permitió mejores rotaciones.

Este proceso de avance agrícola y sojero generó una expansión de la frontera agraria hacia el oeste y norte de la región pampeana, dado que las semillas modificadas genéticamente posibilitaron la adaptación de estos cultivos en regiones áridas y semiáridas, pero generó la destrucción de montes nativos. Todo esto ha modificado el

paisaje agrario, ya que esta agricultura extensiva ha generado la desaparición y/o el desplazamiento de la ganadería y los tambos, actividades que fueron perdiendo rentabilidad en relación a aquella. Entre Ríos no fue ajena a estos procesos y sus consecuencias. Así lo explica Sili (2005):

(Por este) fuerte proceso de agriculturización es que el creciente uso de insumos aumenta la dependencia de la agricultura, y del país en general, con respecto a las empresas abastecedoras, generalmente de origen transnacional. Los productores y el país en general, pierden así su capacidad de control y regulación de su producción debido a la dependencia de insumos que están patentados en otros países. Esto no sólo condiciona la autonomía del país en términos de producción de alimentos, sino que además ata a la agricultura nacional a los valores de los insumos de origen internacional que cotizan en dólares. (p. 25)

El “paquete tecnológico” difundido en la década del 90 está asociado, en el caso de la soja, a tres factores relevantes: la generalización de la siembra directa, la utilización de semillas modificadas genéticamente y el uso de agroquímicos. El herbicida glifosato para la soja RR (resistente al glifosato Round Up -marca más extendida por ser comercializada por Monsanto-) generó el auge asociado a un considerable aumento de los rindes por hectárea (aumento de la rentabilidad de la producción), así la productividad de la soja tuvo un gran crecimiento.

Los rendimientos pasan de un promedio de 20 qq/ha, en el período 1990-1997, a un promedio de 26 qq/ha entre 1997 y el 2006, llegando a los 32 qq/ha en las mejores tierras... al margen de la evolución del precio de la soja, que cae abruptamente a partir de 1997 y se recupera recién en el 2003. (Sartelli, 2008, p.48)

La expansión de las oleaginosas se aceleró, por el continuo incremento de la superficie cultivada, que creció un 52,8% entre 1990/1 y 2006/7, además del constante incremento de los rendimientos en promedio: en la década del '80: 35 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, mientras en los años '90: 64,3 millones de toneladas, y en la década de 2000: 96 millones de toneladas. Un motor de esta expansión fue la soja, casi inexistente en los años '70, en la campaña 2006/7 ocupó 16.141.337 de ha con 47 millones y medio de toneladas. De las 96 millones de toneladas totales, 48 millones de toneladas fueron de soja, es decir la mitad, el maíz significó un 21,8% y el trigo un 16%, los cuales crecieron aunque por debajo que la soja, mientras que el girasol cayó desde 2000/1 (Barsky y Gelman, 2009).

Luego de la crisis política y económica de 2001, el proceso devaluatorio del peso iniciado en 2002 permitió a los productores de bienes primarios de exportación obtener una alta rentabilidad, sumado a la pesificación de sus deudas, con lo cual

muchos productores pudieron licuarlas, a lo que se sumó el beneficio por el mejoramiento de los precios internacionales de los commodities. Así, se beneficiaron muchos productores agropecuarios en el corto plazo, aunque también aquellos propietarios rentistas, que pudieron mantenerse en los pueblos y ciudades regionales en condiciones económicas más holgadas, proceso exclusivo de las zonas agrícolas por excelencia: la región pampeana, incluida Entre Ríos.

Esta expansión agrícola incidió en una fuerte valorización de las tierras. Este proceso se dio de manera contradictoria, un “boom agropecuario conviviendo con una profunda crisis rural, esto es, los agronegocios funcionan bien, pero el mundo rural funciona cada vez peor” (Sili, 2005, p. 18), ya que se acentuaron las divisiones sociales y aumentó la pobreza en las pequeñas y medianas ciudades vinculadas a la actividad agropecuaria.

Según Barsky y Dávila (2009), no es la soja la causante del desempleo, la pobreza y las migraciones, y, si bien la mecanización reduce fuerza de trabajo, el complejo sojero, al ser una cadena agroindustrial, ha generado empleo directa e indirectamente, posibilitando que pueblos, ciudades y zonas rurales dependan de los ingresos que ésta genera, por el encadenamiento laboral de venta de maquinarias e insumos agropecuarios, servicios técnicos y profesionales y tareas de comercialización.

Si bien reconocen el papel dinámico y revitalizador para los pueblos y ciudades del interior estrechamente ligadas al complejo sojero, en la investigación sobre tres ciudades santafesinas, Gras y Hernández (2010) reconocen que el aumento de la rentabilidad generada por los altos precios internacionales de los granos y la devaluación del tipo de cambio desde 2002, si bien permitió que los productores incrementaran sus ingresos de modo significativo, esto ocurrió a la par del aumento de población desocupada, con inestabilidad laboral y que depende de planes sociales, esto es, la conformación de sociedades locales más desiguales con una clara diferencia entre sus clases sociales.

Este modelo agrario concentrado reorganizó la tenencia y explotación de la tierra, ya que actores externos y urbanos iniciaron un proceso de compra de tierras para la producción a gran escala (grandes empresas y pools de siembra), a los que se sumaron otros actores que compraron tierras para resguardo de sus capitales y ahorros, como “médicos, ingenieros, comerciantes, abogados y, en innumerables casos, por políticos locales a los productores endeudados o en quiebra” (Sili: 2005, p. 28), generándose así un negocio inmobiliario rural.

En ese contexto adquiere relevancia un nuevo actor agrario, los contratistas de maquinaria agrícola, antiguos productores capitalizados que dejaron de trabajar directamente sus campos para pasar a ser intermediarios de la explotación y organización de la fuerza de trabajo, dejando de ser organizadores integrales de una empresa agropecuaria para especializarse en la organización de una etapa parcial del proceso productivo al servicio de un negocio ajeno, pero este cambio de productor a contratista de servicios no comportó un descenso en términos de clase (Villulla y Amarilla, 2011).

En el marco de este proceso de concentración en el agro casi 90.000 explotaciones agropecuarias desaparecieron, según la comparación entre los CNA 1988 y 2002, por lo cual muchos de los pequeños y medianos productores quebraron y vendieron en manos de aquellos productores capitalizados que lograron expandirse, de pooles de siembra o grandes propietarios que absorbieron sus tierras, o hubo quienes las conservaron y se convirtieron en rentistas. Por otro lado, se generó un aumento de la superficie promedio de las unidades productivas, por la necesidad de mayor escala del modelo agrícola. Esto causó la desarticulación de las empresas rurales familiares, la pérdida de empleo rural y originó un éxodo poblacional desde las áreas rurales hacia los grandes centros urbanos.

Pero este proceso operó una reconfiguración en la estructura social agraria. Los chacareros o productores debieron readecuar su organización y gestión productiva. En el modelo tradicional, los chacareros eran propietarios de una parte importante de la tierra en la que trabajaban y residían él y su familia, además de las maquinarias. Balsa (2006) señala los cambios en los hábitos familiares, patrones de residencia y estilos de vida de estos actores en las últimas décadas, mientras que Gras y Bidaseca (2010) señalan que ese territorio se vio violentamente transformado en los años '90 con el nuevo modelo productivo, por la pérdida de tierras, soporte material y simbólico y herencia familiar reconfigurada por el capitalismo. Lo que provocó mutaciones importantes tanto en la organización familiar como en la innovación en la gestión, la adquisición de herramientas tecnológicas, financieras y jurídicas.

Los productores que persistieron en la actividad readecuaron su organización, han externalizado partes del proceso productivo de siembra, mantenimiento y cosecha, surgiendo así con fuerza un nuevo actor: los contratistas de servicios agropecuarios, que ya mencionáramos. Aquéllos han tenido que dedicarse a las tareas gerenciales, administrativas y comerciales, que requirieron actualización profesional constante, lo

que también reorganizó hacia el interior de las familias la división del trabajo, por ejemplo la función clave de los ingenieros agrónomos y administradores de empresas, profesiones de sumo interés para los hijos de productores.

La línea demarcatoria del agro tradicional dividía claramente entre propietarios de las tierras y arrendatarios productores, muchos colonos inmigrantes que se fueron estableciendo en la región pampeana a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que alquilaban las parcelas a sus dueños, a las cuales pudieron acceder en propiedad con el tiempo al comprarlas y por políticas específicas que la estimularon, con lo cual por herencia y sucesivas subdivisiones se fue configurando un mapa heterogéneo de actores pequeños y medianos productores hacia la década de 1970.

A partir de los cambios en el nuevo agro argentino, los propietarios se convirtieron también en arrendatarios que fueron por mayor escala de producción para ser competitivos, y a su vez los arrendatarios adquirieron tierras en propiedad por la misma razón, todo en un marco de puja por acceder a las tierras más productivas, de mayores rindes por hectárea. Los que entraron a la producción no precisaron ser propietarios (alquilaron) y muchos de los que salieron de la producción conservaron la propiedad (rentistas).

Según el CNA de 2002 la cantidad de tierras en arriendo había aumentado en un 52% y, en ese contexto, surgió la figura de los rentistas como nuevo actor rural, bajo una forma de contrato predominante que es la de alquileres pactados a partir de quintales fijos de granos, ya no a precio en dólares o pesos fijos o a porcentaje de producción, lo que suponía que el productor asumía los riesgos. Ahora, el logro de mayor productividad beneficiaba al productor arrendatario al obtener mayores rindes, y al propietario arrendador lo favorecía al subir su precio de alquiler, aunque la literatura especializada sugiere que las prácticas inadecuadas terminan perjudicando la capacidad productiva del suelo, hecho que podría afectarlos.

Los productores de los cuatro cultivos más importantes: soja, trigo, maíz y girasol cubrían el 66% del suelo cultivado, siendo el 40% de las explotaciones agropecuarias, peso importante en volumen de producción, exportaciones y consumo interno. En cuanto a relevancia de la producción de soja en relación a pequeños productores que se vieron afectados por el establecimiento de las retenciones móviles, generando una activa movilización en el conflicto, Barsky y Dávila (2009) sostienen, según su análisis del CNA de 2002, que las explotaciones de menos de 100 ha que realizaron soja le dedicaron un 70% de la tierra disponible, en comparación con el 27%

de las de menos de 1000 ha. Los de menos de 100 ha representaban un 67% del total (49.308 productores) y hasta 250 ha (60.425 productores) llegaban a un 82,2% del total. Esta situación se replica para el caso entrerriano, dado el peso importante de los productores familiares capitalizados y no capitalizados en la estructura agraria.

A partir de las consecuencias que generó el proceso de agriculturización y sojización en el sector agropecuario argentino, particularmente en la región pampeana, podemos indagar en la historia de los derechos de exportación en el país, utilizando algunas fuentes bibliográficas que abordaron la temática.

## **2.2 Los derechos de exportación en Argentina.**

El sector agropecuario, fundamentalmente pampeano, ha tenido un “triple rol estratégico” (Lattuada, 2006; también en: Barsky y Dávila, 2009) en la historia argentina: como generador de divisas, proveedor de alimentos para el consumo interno de los sectores populares y de recursos fiscales.

Los derechos de exportación, comúnmente denominados “retenciones” son un impuesto aduanero que impone y cobra el Estado nacional por exportaciones de ciertos bienes. Éstos tienen una larga historia en Argentina.

La imposición de los derechos de exportación se remontan a la década de 1810, luego de la ruptura con el gobierno colonial español, el gobierno central con sede en la ciudad de Buenos Aires se quedó sin la fuente monetaria que proveía la plata potosina y precisó de nuevas fuentes de recursos, encontrando dicha fuente en la Aduana antes que en la contribución directa de propietarios urbanos y rurales (Barsky y Dávila, 2009).

Pero fue también el origen de las pujas entre saladeristas y los gobiernos, como señala Giberti (1985), de no obtener su eliminación o una fuerte rebaja en los mismos corría peligro el abastecimiento interno de tasajo o, sencillamente, aquéllos no los abonaban y exportaban libremente. Una histórica tensión entre gobiernos nacionales que obtenían por ellos una fuente segura de recursos fiscales y saladeristas bonaerenses poco propensos a que “sus dineros” se extendieran por todo el país (p. 103, entrecomillado mío).

La Constitución Nacional establecida en el país en 1853 y las sucesivas reformas constitucionales instauraron que es atributo del gobierno nacional la imposición de derechos aduaneros de importación y exportación, mientras que los gobiernos provinciales se reservaron la potestad para imponer impuestos directos e indirectos.

Fue objeto de debate entre juristas durante el desarrollo del conflicto por las retenciones, si su imposición es atributo del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Según la Ley de Código Aduanero No 22415 de 1981, el artículo 755 establece las facultades de modificarlas, mientras que el Decreto 2752/91 lo delegó en el ME nacional. Pero según el artículo 75 de la Constitución Nacional se establece que es el Congreso nacional el que debe legislar en materia aduanera, estableciendo los derechos de exportación e importación.

Durante el régimen de acumulación agroexportador (1860-1930), en la Argentina las retenciones o derechos de exportación significaban una fuente para que el Estado pudiera proveerse de divisas e ingresos fiscales, aunque la principal fuente de recursos para el Estado provenía de los impuestos a las importaciones de bienes de consumo durables y no durables, insumos y combustibles (Rapoport, 2010).

Durante el régimen ISI (1930-1975), los derechos de exportación adquirieron centralidad, fundamentalmente en los gobiernos peronistas (1946-1955, 1973-1976) como factor importante para desacoplar los precios internacionales de los precios internos de los alimentos de consumo para los sectores populares, además de incentivar con apoyo estatal la producción industrial, menos competitiva internacionalmente que el sector agropecuario. Durante los gobiernos dictatoriales del período las retenciones fueron concebidas para compensar las devaluaciones del tipo de cambio, hecho que favorecía ampliamente a los productores y exportadores de granos y carnes.

O' Donnell (1977) advertía sobre los riesgos que implicaba subordinar al sector agropecuario en un régimen de acumulación industrial sustitutivo de importaciones (ISI) cuando afirmaba que:

La crisis mundial de 1930 deprimió exógenamente los precios de los bienes pampeanos. Algo después el gobierno peronista (1946-1955) fue un primer esbozo de problemas que más tarde harían plena eclosión. Primero (1946-1950) el Estado se apropió de parte sustancial del producido de las exportaciones pampeanas, mantuvo deprimidos sus precios internos y con ello aumentó el nivel de ingreso del sector popular y amplió la demanda efectiva de otros bienes, sobre todo industriales. Pero esto no tardó en generar problemas de balanza de pagos, debidos al efecto conjunto del "desaliento" de la producción pampeana y del aumento del consumo interno de exportables. (p. 532)

En el régimen de acumulación ISI y desarrollista (1930-1975) se desplazó al sector agropecuario por el industrial como motor de la economía argentina (su aporte al PBI bajó al 15%), pero conservando ese "triple rol estratégico", según Lattuada (2006), de proveedor de divisas (las exportaciones de origen agrario oscilaron entre el 75 al

90% del total), la provisión de bienes-salarios (abasteció prácticamente la totalidad de la demanda alimentaria influyendo significativamente en el costo de la mano de obra y en los índices inflacionarios) y en el aporte de ingresos al fisco (fuente rápida y segura de financiamiento para el Estado a través de tipos de cambio diferenciales o retenciones a las exportaciones).

Ante el establecimiento de retenciones a las exportaciones, tipo de cambio diferencial o establecimiento de impuestos al agro (como por ejemplo a la renta potencial de la tierra en 1974) el sector unificaba sus intereses ejerciendo un rol defensivo ante el Estado.

En la política fiscal las entidades han coincidido en que la presión tributaria que ejercía el Estado debía ser entre moderada y baja, pero han disentido en definir cómo debía afectar a los tipos de productores. La FAA históricamente se volcó hacia el establecimiento de impuestos progresivos y personalizados, para que contribuyeran más los mayores propietarios, mientras que SRA y CRA han rechazado esta posición afirmando que éstos sean parejos para todos los productores y no sobrecargar con mayores recursos, aunque FAA y CONINAGRO están condicionados por bases sociales a las que nunca les resultó atractivo el pago de impuestos, como lo demostraron las movilizaciones conjuntas de la etapa 1973-1976 (Lattuada, 2006).

Con política de apertura económica al exterior, iniciada por la dictadura cívico-militar de 1976, el sector agropecuario se benefició con una devaluación, créditos y eliminación de retenciones, que generó grandes ganancias e inversiones, incrementándose la producción de trigo, maíz, lino y soja, hasta 1978, en que se estableció una paridad cambiaria, provocándose un retraso cambiario que lo perjudicó.

El año 1984, ya con el gobierno de Alfonsín, el sector agropecuario se benefició por los altos precios internacionales de los cereales y oleaginosas y las condiciones climáticas que permitieron una cosecha récord de casi 45 millones de toneladas, pero la baja de precios internacionales en los años siguientes, las retenciones que se mantuvieron y la hiperinflación de la segunda mitad de los '80 provocaron la caída de la producción pampeana.

Con el gobierno menemista a partir de 1989, que implicó reformas institucionales de ajuste fiscal y eliminación de las regulaciones estatales sobre los sectores productivos, comenzó un plan de eliminación paulatina de las retenciones. Con la ley de convertibilidad instaurada a partir de 1991 (política de no emisión monetaria, por la cual el circulante de pesos estaba en función de las reservas del Banco Central,

fijado en 1 peso igual a 1 dólar) para frenar la inflación, comenzó a generarse un retraso cambiario que afectó a la rentabilidad de los productores, pese a la liberalización del comercio exterior y la eliminación de las retenciones, sumado al encarecimiento de los costos de combustibles.

Pero este sector se vio beneficiado por políticas de créditos a partir de bancos públicos y privados, situación aprovechada por los productores para la incorporación de maquinaria e insumos, aunque esta situación devino en el crecimiento del número de productores endeudados que no pudieron hacer frente a los vencimientos de los pagos. Según Barsky y Gelman (2009) la crisis de la agricultura pampeana hacia fines de los '90 se produjo por tres factores: una caída de los precios internacionales; las subas de las tasas de interés; y, la suba del costo de vida, por lo que resultó en una concentración productiva y endeudamiento de productores (en el año 1996 se requería de 150 ha para mantener una familia rural, mientras que en 1999 hacían falta 400 ha).

Según Lattuada (2006), el régimen de acumulación de convertibilidad menemista de la década de los '90, generó un proceso de apertura económica, desregulación estatal de los mercados y cambios institucionales que fueron la condición necesaria para que las entidades agropecuarias transformaran sus estructuras organizativas, discursos y estrategias, redefiniendo también su representación de intereses y su interacción con el estado y otros actores, lo que implicó una menor capacidad de conflicto, menor status de interlocutor reconocido por el Estado y bajas posibilidades de influencia en las políticas públicas.

Con el marco histórico de las retenciones, y su eliminación durante los años '90, veremos a continuación el escenario hacia fines de 2001 y comienzos de 2002, en el que el “Grupo Productivo” (Basualdo, 2011), expresado políticamente en la figura de Eduardo Duhalde se impone e instala la necesidad de dar por fin al modelo de convertibilidad, en el cual las retenciones volverían a ser necesarias en tanto política pública. Veremos cómo fue la relación entre el gobierno nacional y las corporaciones agropecuarias a la luz de la evolución de las retenciones a partir de 2002, desde el análisis de los autores especializados en el tema y de artículos periodísticos indagados.

### **2.3 Gobiernos nacionales, retenciones y entidades agropecuarias (2002-2007).**

Las corporaciones agropecuarias atravesaron una crisis de representatividad en el sector agropecuario y una caída en el nivel de afiliación, evidenciados en la década de 1990. En cuanto a la afiliación de productores a entidades corporativas agrarias hacia el

año 2002 (ver cuadro 1), notamos que, en general, era bastante baja (26,29% de explotaciones asociadas respecto del total) y el porcentaje de afiliados de Entre Ríos a nivel nacional ocupaba en porcentaje el quinto lugar (17,11%) respecto de las provincias que componen la región pampeana, un número significativamente menor en relación a Santa Fe, que posee el mayor porcentaje (42,26%), Buenos Aires (24,77%), Córdoba (22,18%) y La Pampa (17,94%).

### **Cuadro 1**

*Nivel de afiliación a corporaciones agrarias*

<b>Provincia</b>	<b>Explotaciones</b>	<b>Expl. Asociadas</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Buenos Aires</b>	51.116	12.661	24,77
<b>Córdoba</b>	26.226	5.816	22,18
<b>Santa Fe</b>	28.103	11.877	42,26
<b>Entre Ríos</b>	21.577	3.692	17,11
<b>La Pampa</b>	7.775	1.395	17,94
<b>Total</b>	134.797	35.441	26,29

Fuente: Sartelli (2008) en base a CNA 2002. INDEC.

Estos cambios operados en el agro pampeano y en las organizaciones corporativas produjeron una tendencia hacia la dispersión y pluralidad de actores del heterogéneo nuevo agro argentino, a la vez que generó otra tendencia hacia la concentración y la unidad, cohesionando posiciones y acciones ante el estado, derivado de un “síndrome de marginalidad” (Lattuada, 2006) o reacción defensiva y unitaria del sector ante la pérdida de importancia estratégica de la agricultura (frente al sector financiero y de servicios) y a la disminución de poder e influencia de sus elites en los centros políticos.

La crisis económica, social y política de 2001 terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa y, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde en 2002, generó políticas económicas que beneficiaron a los sectores productivos ligados a la exportación. La devaluación del peso triplicó su valor (3 pesos igual a 1 dólar) y significó una gran transferencia de recursos hacia los sectores vinculados a la exportación, entre ellos los agropecuarios.

Esto fue compensado con las retenciones a las exportaciones, impuestas por el Decreto 310/02 el 4 de marzo de 2002 y anunciadas por el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov: 13,5% para soja y girasol, 10% para otros productos primarios y 5% para carnes, lácteos, harinas y aceites de soja y girasol. El ministro las justificó porque aportarían 1400 millones de dólares y servirían para financiar planes sociales y de obra pública, aliviando el cronograma de futuros vencimientos de deuda<sup>2</sup>.

El 5 de abril del mismo año el gobierno las reajustó, llevando soja y girasol al 23,5%, para los productos primarios al 20% y la leche al 15%, persiguiendo como objetivos moderar el aumento del tipo de cambio en los precios internos y mejorar la situación de las finanzas públicas para sostener y ampliar los programas de carácter social, generando un incremento de 1000 millones de dólares en la recaudación fiscal<sup>3</sup>. La Sociedad Rural de Jesús María, afiliada a CRA, ya proponía un paro nacional en contra de las retenciones.

Las retenciones significaron un aporte de ingresos importante para las obligaciones fiscales de un Estado quebrado y endeudado, no sólo financieramente por la deuda externa, sino internamente con grandes capas sociales sumergidas en la pobreza, la indigencia y la desocupación. Al respecto, afirman Barsky y Gelman (2009):

El proceso inflacionario causado por la devaluación tuvo un impacto más alto en los alimentos atados al precio dolarizado de las materias primas. Así, la inflación fue mucho más importante en la canasta básica alimentaria, lo que hizo subir en gran medida los niveles de pobreza e indigencia. (p. 484)

Ya con la salida de la crisis y la recomposición de la economía argentina, en un contexto internacional de aumento de precios de cereales y oleaginosas a partir de 2002, favorable para las exportaciones agropecuarias de la Argentina, estimuladas a su vez por un tipo de cambio devaluado, se fue generando una autopercepción en el sector agropecuario por haber contribuido significativamente a superarla a través de las retenciones. La aceptación de su reinstauración luego de su eliminación durante el gobierno de Menem en 2001 fue atendiendo a la grave crisis social que por esos años atravesaba el país (Gras: 2010).

Para la Mesa de Enlace de Entre Ríos, éstas fueron “una fuente de recursos que nunca debió haber existido, las retenciones se acordaron con el presidente Duhalde

---

<sup>2</sup> “El nuevo paquete económico: lanzan créditos para Pyme y exportadores. El Gobierno reimplantó las retenciones” (5/3/2002), *La Nación*. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-reimplanto-las-retenciones-nid378602/>

<sup>3</sup> Dellatorre, Raúl “El Gobierno le pasó la cuenta al campo” (6/4/2002), *Página/12*. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-3668-2002-04-06.html>

cuando se incendiaba el País, para asistencia social, solo del 10% y de carácter transitorio”<sup>4</sup>. Las palabras “carácter transitorio” habían sido utilizadas por el ministro Remes Lenicov para justificarlas.

Mientras, las deudas de los productores se licuaron con la pesificación. Con las cosechas pagaron las deudas y el sector continuó con un proceso de capitalización, aunque no todos los productores lograron la tecnificación.

La gran relevancia que adquirieron las retenciones a partir de la devaluación las convirtieron en un instrumento central de la política económica durante el gobierno kirchnerista que, según Barsky y Dávila (2009), con la suba de los precios internacionales “explican por sí solos el superávit fiscal” (p. 144), siendo de cobro inmediato y automático, claves para coyunturas de ahogo fiscal.

Si bien la imposición de retenciones fue fuente importante de malestar para diferentes sectores del agro, a partir de 2005 comenzaron tensiones entre este sector y el gobierno en relación a políticas sobre carnes, trigo y leche. En cuanto a carnes los motivos de rechazo de las entidades agrarias fue orientada a la gestión del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, por la política del gobierno de prohibición y fijación de cupos de exportación y de control de precios máximos para cortes de consumo popular. En lo referente a trigo y leche la disputa giró en torno a los precios recibidos por los productores, menores a lo que los vendían los molinos harineros a las exportadoras, al igual que las industrias lácteas. Como consecuencia de esto, en los años 2006 y 2007 hubo una puja distributiva expresada en un proceso inflacionario, en la que el gobierno presionaba a los productores por mayor oferta y precios máximos que permitieran abastecer el consumo interno, mientras que los productores presionaban contra las restricciones a la exportación a través de medidas que disminuían la oferta.

Basualdo y Arceo (2009) interpretan que la reactivación económica del país desde el 2002 se produjo en un contexto de bajos salarios para los sectores de trabajadores, habiendo comenzado en 2006 y 2007 una creciente reivindicación de incrementos salariales, además de políticas estatales que trataban de recomponer el mercado de trabajo, y que comienzan así crecientes presiones inflacionarias que las neutralizan, a pesar de que el costo salarial evolucionaba muy por debajo del salario real, conformando el escenario en el cual, en marzo de 2008, el agro pampeano se

---

<sup>4</sup> “Nota de opinión: El fondo de la soja, debates e hipocresías” (21/8/2018), *FARER Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos*. Disponible en: <http://farer.com.ar/nota-de-opinion-el-fondo-de-la-soja-debates-e-hipocresias>.

introduce en la disputa por la distribución del ingreso para subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital.

Otro incremento en los derechos de exportación se impuso en el gobierno de Néstor Kirchner el 11 de enero de 2007, por medio de la Resolución No 10/07 del Ministerio de Economía y Producción a cargo de Felisa Miceli, en un contexto de suba de los precios internacionales, cuando fueron llevadas las retenciones a la soja al 27,5% y al 24% para sus subproductos. Con la misma, también se anunció una reasignación de recursos a través de los cuales se subsidiaría a las industrias elaboradoras de productos de la canasta de bienes básicos, preservando así el salario de los argentinos y el valor de esos bienes<sup>5</sup>.

FAA rechazó en un comunicado el aumento considerándolo una “provocación” y argumentó estar en defensa de los bienes básicos, pero que se podía realizar sin nuevas retenciones, además de manifestar que al entrar en vigencia cuatro días después del anuncio, lo que daría tiempo a las multinacionales exportadoras para realizar operaciones sin incluir el 4% de aumento<sup>6</sup>.

A continuación se analizará el contexto nacional de los meses previos al conflicto iniciado en marzo de 2008 por la implementación de las retenciones móviles, teniendo como base fuentes bibliográficas y oficiales de información, periodísticas y testimoniales de algunos de los protagonistas.

#### **2.4 Inicio del segundo gobierno kirchnerista y retenciones.**

El 7 de noviembre de 2007, a pocos días del triunfo en las elecciones del 29 de octubre de la fórmula presidencial Cristina Fernández-Julio Cobos, una alianza entre el FPV y un sector del radicalismo alineado que apoyaba a la gestión kirchnerista, el Ministerio de Economía nacional a cargo de Miguel Peirano anunció una suba en las retenciones en algunos granos. Los argumentos de la medida daban cuenta que traerían estabilidad de precios, crecimiento de las inversiones, mantenimiento de un equilibrio entre mercado externo e interno y fortaleza de la economía en su conjunto.

Se establecieron retenciones a la soja del 35%, girasol el 32%, trigo el 28%, maíz el 25%, harinas, aceites y pellets de soja el 32% y las de girasol el 30%. La

---

<sup>5</sup> “El gobierno aumentó las retenciones a la soja” (11/01/2007), *Infocampo.com.ar*. Disponible en: <https://www.infocampo.com.ar/el-gobierno-aumento-las-retenciones-a-la-soja/>

<sup>6</sup> “Rechazo de Federación Agraria a la suba de retenciones” (11/01/2007), *Infocampo.com.ar*. Disponible en: <https://www.infocampo.com.ar/rechazo-de-federacion-agraria-a-la-suba-de-retenciones/>

decisión del nuevo incremento de las retenciones quedaba así asociada al gobierno saliente.

Pese al descontento de las entidades agropecuarias y de los productores, más allá de algunas declaraciones e intentos de protesta, no hubo paros agropecuarios ni movilizaciones contra la nueva medida. Los precios internacionales siguieron subiendo vertiginosamente: la soja a 305 dólares de junio de 2007 a 411 en noviembre, en marzo de 2008 llegó a 590 dólares (Barsky y Gelman, 2009, p. 514).

¿Por qué no estalló el conflicto campo-gobierno en noviembre de 2007 y sí ocurrió en marzo de 2008? Una parte importante de ciudades y pueblos ligados al sector agropecuario, beneficiados por el contexto internacional y nacional que permitió una expansión productiva y exportadora, habían apoyado con votos a la nueva gestión gubernamental (Barsky y Gelman, 2009; Sartelli, 2008) y ahora se encontraban con el nuevo aumento en las retenciones.

El constante y elevado incremento de los precios internacionales parecía aquietar el malestar. El contexto de crecimiento económico a nivel nacional servía para diluir el rechazo que históricamente habían realizado los productores de diferentes tamaños ante la política de retenciones. Comenta Solanas (2009) que en el año 2005, estando en campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre, fue invitado por De Ángeli, presidente de la FAA de Entre Ríos, a un encuentro con productores en la cooperativa arrocera de Villa Elisa, departamento Colón, luego de dialogar sobre control de los pools de siembra, deudas con el Banco Nación, entre otros problemas que aquejaban a ese sector, les preguntó qué pensaban sobre las retenciones y le manifestaron que “no hay problemas con las retenciones y entendemos que es necesaria su existencia” (p. 75).

Los meses anteriores a marzo de 2008 fueron de relativa calma. Las entidades agropecuarias estaban concentradas en la prohibición establecida por el gobierno nacional de exportación de algunos cortes de carnes y por los precios mínimos. La FAA reclamaba por cobrar el precio pleno del trigo y protestaba contra las grandes empresas comercializadoras que se quedaban con una parte de su precio.

En el plano nacional la FAA analizaba por esos primeros días de marzo un paro nacional para el martes 11 de marzo, pero contra las cerealeras exportadoras<sup>7</sup>. FAA cuestionaba la política oficial sobre carnes y granos, considerando que los precios

---

<sup>7</sup> “El campo anunciaría un paro para este mes” (7/3/2008). *El Diario de Paraná*, p.9.

exportadoras por quedarse con esa diferencia. El reclamo se haría frente a los puertos donde están localizadas algunas de las principales cerealeras de Rosario como anticipo del paro nacional, esperando que CRA también se adhiriese al mismo. Para ese día la FAA planeaba una movilización en dichos puertos cerealeros santafesinos impidiendo el ingreso de camiones y carga de buques. La justificación del titular de FAA Eduardo Buzzi:

La medida no es ilegal. El Gobierno se aprovecha de las circunstancias al disponer, por ejemplo, la limitación de las exportaciones de carne con la excusa de abastecer al mercado interno... hoy sobra plata en el Estado argentino, y hay mecanismos que permitirían mantener a raya los precios internos y garantizar mejores precios a los productores.<sup>8</sup>

Las declaraciones de Buzzi identificaban como principal responsable al gobierno nacional por su política de granos y carnes, pero el blanco de este reclamo en soledad de la entidad y focalizado en Rosario no era directamente el gobierno sino las cerealeras. Buzzi hacía pocos meses había sido designado al frente de la entidad y se había manifestado conforme con la decisión del gobierno nacional de crear la Subsecretaría de Agricultura familiar, uno de los reclamos históricos de la FAA. No aparece mencionada la soja en su ejemplo y sí la carne, motivo de disputa por los precios que en las últimas semanas se habían disparado entre un 15 y un 20% y el gobierno estaba intentando la firma de un acuerdo con frigoríficos y productores, para bajar los precios y sostener una demanda interna que había crecido en los últimos años.

Esta situación tensa se daba, paradójicamente junto con la gran muestra agropecuaria de Expoagro que organizaban Clarín y La Nación, que refleja que el sector no estaba en crisis sino en una coyuntura de bonanza en un proceso de crecimiento que llevaba varios años<sup>9</sup>.

Este era el escenario nacional hacia la segunda semana de marzo de 2008. El Ministerio de Economía nacional publicó el 10 de marzo de 2008 la Resolución No 125/08, la misma en sus considerandos establecía:

Que los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual. Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente

---

<sup>8</sup> “Empiezan las protestas del agro por la ‘desastrosa política oficial’” (11/3/2008). *El Diario de Paraná*, 2da Sección Agropecuarias, p. 6.

<sup>9</sup> “Convocatoria y buenos negocios en Expoagro 2008” (10/3/2008). *El Diario de Paraná*, 2da Sección Agropecuarias, p. 6.

Allí se menciona que durante la megamuestra pasaron por Armstrong más de 200000 personas y se generaron operaciones por 170 millones de dólares, marcando ese año un nuevo récord.

incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario. Que la modificación propuesta del esquema de derechos de exportación aplicables a un subconjunto clave de cereales y oleaginosas constituye una herramienta apropiada para solucionar los problemas previamente mencionados<sup>10</sup>.

La fórmula con la que se aplicarían los derechos de exportación se expresó así:

$$d = \frac{VB + AM(FOB - VC)}{FOB} \times 100$$

La alícuota del derecho de exportación (d) se compondría de un Valor Básico (VB) más la Alícuota Marginal (AM) (compuesta a su vez por el precio FOB menos el Valor de Corte (VC)), al cual se le dividiría el precio FOB. Los valores expresados en la fórmula surgían a partir de una tabla para cada rango de precios oficiales. Por lo tanto, la fórmula de la alícuota de derecho de exportación se compondría en función del precio FOB (free on board)<sup>11</sup> de los granos de manera móvil, teniendo cada grano una alícuota que implicaba que si el valor internacional de ese grano se incrementaba lo mismo sucedía con la retención que se debía pagar al Estado en concepto de derecho de exportación. Así, la alícuota para el girasol y la soja se elevarían entre 7 y 9 puntos, mientras que habría una rebaja para el trigo y el maíz de 1 punto; con los valores de ese momento, la soja pasaría a pagar del 35% el 44% de retenciones y el girasol de 32% al 39%.

La reacción inmediata fue la formación de la “Mesa de Enlace” (ME) el día 12, conformada por las organizaciones corporativas del sector agropecuario: Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la cual respondió con un paro agropecuario por 48 horas.

Una de las mayores debilidades de la resolución 125 fue la de no haber distinguido entre productores grandes, medianos y pequeños, así como tampoco entre la zona núcleo de la Pampa Húmeda (donde se concentran los mayores niveles de productividad por hectárea cultivada) respecto de aquellas zonas marginales o extrapampeanas con menores rindes promedio que la pampeana. Es decir, el gobierno

---

<sup>10</sup> InfoLEG Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación (10/3/2008). Información disponible en:

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138567/norma.htm>

<sup>11</sup> El precio FOB (free on board por su sigla en inglés) significa Libre A Bordo, es una cláusula de comercio internacional utilizada para operaciones de compra-venta realizadas por barco, en el que el vendedor entrega la mercadería en el puerto de embarque convenido, con sus costos y responsabilidad, punto a partir del cual corren por cuenta del comprador hasta su llegada a destino.

no tuvo en cuenta las heterogeneidades productivas de la estructura agropecuaria argentina. Asimismo, De Anchorena (2017) señala:

Una de las flaquezas de la Resolución 125 lo constituye el carácter técnicamente débil de su formulación: netamente racionalista, con un diagnóstico equivocado y errores en sus proyecciones. Porque la formulación de la Resolución 125, diseñada desde los “escritorios” del Ministerio de Economía, sin la participación de la Secretaría de Agricultura, planteó una propuesta de tipo ideal, sobre la que no se consultó a los actores sectoriales ni políticos. No se previó el potencial conflicto y por lo tanto no se desplegaron las alianzas o medidas para contenerlo. (p. 93)

Ante esto surgieron las críticas de las entidades agropecuarias por haber sido una medida “inconsulta”. En relación a la génesis de “la 125” los periodistas Jafelle Fraga y Baistrocchi (2011) relatan en detalle una reunión privada entre Martín Lousteau, Eduardo Buzzi y Pedro Peretti (presidente de la Federación Agraria de Máximo Paz, en Santa Fe) en la localidad de Las Cañitas el 9 de abril, por iniciativa del ministro de gobierno Alberto Fernández y que incluyó una logística para evitar que se hiciera pública. Según su relato:

El joven ministro les contó a los ruralistas que, a pedido de Néstor Kirchner, había tenido que buscar un mecanismo para aumentar la recaudación fiscal. También les informó que la propuesta de Guillermo Moreno había sido la de imponer el 60% de las retenciones fijas a las exportaciones de soja y que la Resolución 125, de su autoría, había sido el mal menor. (Jafelle Fraga y Baistrocchi, 2017, p. 99)

Haciendo referencia a dicha resolución, Cristina Fernández hizo mención a una reunión que tuvo con Alberto Fernández y Martín Lousteau, quien les presentó lo que iba a ser el proyecto de la 125. Luego que Lousteau les explicara que había rumores sobre una burbuja financiera (la crisis de las subprime) y que había que prepararse adoptando medidas contracíclicas, y de ensayar la posibilidad de aumentar las tarifas de energía para zonas residenciales, la presidenta respondió que se opuso siendo lo lógico que esas personas paguen más por impuesto inmobiliario o bienes personales, entonces explica que:

Poco después vino Lousteau con Gastón Rossi, su asesor, a explicarnos el tema de las retenciones móviles que se basaban en el criterio de la renta extraordinaria. No me pareció mal, porque es un criterio que comparto. Me acuerdo como si fuera hoy de aquella reunión. Estábamos los tres. Alberto Fernández, Lousteau y yo. El Jefe de Gabinete le pregunta: ‘¿Estás seguro que no habrá problemas con eso?’ Y Lousteau, muy seguro de lo que decía, contestó: ‘No, a ellos la soja no les interesa’. Increíble, ¿no? Juro por la vida de mis tres nietos y mis dos hijos, que es lo que más quiero en el mundo, que dijo eso. Y agregó que a las patronales

agropecuarias sólo les importaban las retenciones al trigo y al maíz. (Fernández de Kirchner, 2019, 209)

Sea la búsqueda del “mal menor” de un funcionario eminentemente técnico (no político) como Martín Lousteau ante la alternativa “dura” de un funcionario enemistado con el sector agropecuario como el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por su rol de contralor, o la perspectiva que ofrece Cristina Fernández acerca de la minimización ante un impacto como podía tener una medida como la que se tomó, ninguno de los funcionarios hizo un diagnóstico acerca de las relaciones de fuerza de los sectores rurales ni de las fuerzas propias, ni una evaluación del costo político que podría haber aparejado sobrellevar un conflicto prolongado. Plantea Varesi (2014) que, además de los errores técnicos y comunicacionales de la 125, el gobierno subestimó las fuerzas de su adversario y que recién comenzó a abordar públicamente el tema casi dos semanas después.

Por otro lado, como vimos, en noviembre del 2007 ya se habían aumentado las retenciones y las relaciones del gobierno con el sector agropecuario estaban tensas. El nuevo aumento a partir de las retenciones móviles se producía justo en el contexto de inicio de los meses de cosecha (de marzo a mayo, para los cultivos de girasol y soja), por lo que el momento en que fue planteado fue muy cuestionado, a la vez que implicaba un constante cambio de reglas de juego para los productores: siembra de soja en octubre de 2007 con retenciones de un 27,5%, cosecha con retenciones del 35% por el aumento de noviembre, pero con el nuevo cambio establecido por el gobierno la iban a vender con retenciones móviles que en marzo de 2008 eran del 44% y se estimaba que por el continuo incremento de los precios internacionales la alícuota sería mayor en los meses siguientes, por lo que el cálculo de cuánto perdían o dejaban de ganar se asoció directamente a la “pérdida de rentabilidad”. Con relación a las rentabilidades esperadas, plantea de Anchorena (2017):

El precio de la soja por tonelada en octubre del 2007 era de U\$ 372; de U\$404 en noviembre y de U\$438 en diciembre. En marzo del 2008, cuando se define la Resolución 125, el precio por tonelada era de U\$514 y en julio 2008 fue de U\$548 en promedio, con picos de U\$608. Sin embargo, con estos precios, la rentabilidad final continuaba siendo muy buena aunque las retenciones fueran mayores. (p. 99)

En el siguiente capítulo se analizan las particularidades del contexto económico-social y político de Entre Ríos de las últimas dos décadas a partir de la bibliografía especializada que abordó el tema y del análisis de los CNA 1988, 2002 y 2008.

## **Capítulo 3**

### **El contexto económico y político de la provincia de Entre Ríos**

En este capítulo se aborda el contexto económico-social y político de Entre Ríos hacia el año 2008, prestando atención a los cambios ocurridos en la estructura económica del agro entrerriano para identificar qué elementos conservaron similitudes con las tendencias observadas en el plano nacional respecto a la agriculturización, los agronegocios y la sojización, a partir de bibliografía especializada que abordó el tema y del análisis de los CNA 1988, 2002 y 2008, así como los cambios en la estructura social, para precisar cuáles fueron los actores movilizados durante el conflicto por las retenciones móviles.

Por otro lado, se analiza el escenario político entrerriano y la conformación de las fuerzas políticas más representativas de la provincia, además se indaga en el programa político y económico del nuevo gobierno hacia finales de 2007. Asimismo se investiga acerca de la percepción de empresarios y dirigentes del agro entrerriano respecto de los gobiernos nacional y provincial y, en particular, sobre los derechos de exportación que marcaron su posicionamiento ante los últimos aumentos de éstos.

#### **3.1 La provincia de Entre Ríos, contexto económico e importancia de la producción agrícola**

La provincia de Entre Ríos representa un 3% del territorio nacional, ubicada en el límite noreste de la región pampeana, posee 7.654.600 ha totales (con una superficie de 78.781 km<sup>2</sup> siendo su relieve una llanura ondulada), de las cuales 6.211.400 ha pertenecen a tierra firme, con dos grandes ríos que la limitan: el Uruguay y el Paraná, posee tierras aptas para la agricultura y la ganadería. Las provincias que la limitan son: al norte con Corrientes, al sur con Buenos Aires y al oeste con Santa Fe, mientras que al este limita con la República Oriental del Uruguay, siendo un importante canal de comunicación con los centros de producción y consumo del país y del Mercosur.

En sus aspectos demográficos representaba según el censo nacional de 2001 el 3% de la población argentina, siendo la población urbana del 82%, muy superior a la rural, con el 18%.

Esta provincia aportaba aproximadamente el 2% del PBI nacional. Según el Consejo Empresario de Entre Ríos entre 2000 y 2006 la expansión del PBG fue del 23,9%, el de mayor promedio de la región pampeana, lo que muestra el incremento en su participación nacional, aunque en el PBG per cápita se mantuvo por debajo de las

otras provincias pampeanas. “...el PBG entrerriano también comenzó a expandirse desde 2002 en adelante... el crecimiento total acumulado en el período 2002-2006 fue de 34,7%... sin embargo el crecimiento experimentado se vio acompañado de un alza sostenida de los precios internos” (Arredondo, 2009, p. 37).

En ese estudio, cuando analiza el PBG de Entre Ríos desagregado por actividades se divide en dos grupos: las productoras de bienes (categoría A: agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 15% en 2006 y categoría D: industrias manufactureras: un 11,3% mismo año del PGB), siendo que entre 2002 y 2006 el valor agregado en términos reales se incrementó entre ambas el 46%. Mientras que en las productoras de servicios en 2006: comercio mayorista y minorista 15,7%, sector inmobiliario 10,9% y transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,59%, siendo la expansión total del 31,6%. Se observa así una estructura productiva con fuerte base agropecuaria y agroindustrial, ya que el 98% de los productos primarios y el 78% de los agroindustriales son de origen alimentario.

El crecimiento de servicios fue menos significativo que el de los productores de bienes. “Esta situación plantea, en términos comparativos con la década del ’90 una marcada diferencia estructural, ya que los sectores más dinámicos de ésta se concentraron en actividades abocadas a las prestaciones de servicios” (p. 39). En este párrafo se puede observar el impacto de las políticas macroeconómicas nacionales a partir del cambio en el régimen de acumulación desde 2002: un patrón productivo a nivel nacional, donde Entre Ríos acompañó las tendencias generales del nuevo régimen. La disminución de la pobreza entre 2003-2007 en el Gran Paraná fue del 59% al 23%, y en el Gran Concordia del 78% al 33% (Arredondo, 2009, p. 35).

Entre Ríos se ubica en la cuarta posición en área sembrada de soja a nivel nacional, cuarta en existencias vacunas, primera en producción de lino, de carne aviar y en área cultivada con naranjas y mandarinas, siendo muy importante la actividad arrocera y forestal. El 70% de las exportaciones de esta provincia corresponden al sector primario.

Con suelos que desde el punto de vista agro-ecológico poseen una mayor aptitud ganadera que agrícola, sin embargo las experiencias de colonización agrícola con las colonias de Villa Urquiza (en la costa del Paraná) y San José (en la costa del Uruguay) a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y la llegada de inmigrantes europeos (principalmente alemanes, vascos, suizos y franceses) dedicados a la agricultura, hicieron que ésta adquiriera relevancia.

La evolución histórica de la agricultura entrerriana (Montero, 2006), dividida en períodos, muestra entre la campaña agrícola de 1884 y la de 1914 un incremento en la superficie cultivada multiplicada por 11 (de 98.923 ha a 1.069.729 ha), siendo la superficie dedicada a lino del 37%, el 30% a trigo y el 20% a alfalfa (éste último siguiendo la tendencia general de los contratos de arrendamiento, que obligaban a los arrendatarios dejar sembrado el campo con alfalfa para los propietarios ganaderos). La población dedicada a esta actividad creció de 457 agricultores en 1869 a 29.911 en 1914 (siendo el 7,03% de la población total según el censo nacional de ese año, que era de 425.373 habitantes –ver Población de Entre Ríos en el Anexo), con una equiparación entre la cantidad total de propietarios y arrendatarios-medieros. Éstos últimos eran en 1895 dos tercios de los agricultores.

Entre los factores de esta expansión están la colonización mediante venta de tierras fiscales, la subdivisión de la propiedad de la tierra y la construcción de 1500 km de vías férreas, que permitieron trasladar la producción a ciudades y puertos, mediante ferrocarril a Corrientes y por ferry boat a Buenos Aires (por el Ibicuy) y a Asunción del Paraguay (por Encarnación).

Siguiendo el análisis de Montero (2006), si se comparan las superficies sembradas entre 1914 y 1941, éstas aumentaron de 1.193.500 ha a 1.257.913 ha, es decir, un leve crecimiento en la época ubicada entre las dos guerras mundiales y la crisis del sistema capitalista, acontecimientos que influyeron en el país y la provincia. El lino con el 36% y el trigo con el 33% siguieron en los primeros lugares, el maíz que con el 18% desplazó a la alfalfa, constituyeron los cultivos predominantes en ese período.

Las campañas agrícolas, en cuanto a superficie sembrada muestran que en 1947/8 fueron 785.038 ha, en 1954/55 de 765.950 ha y en 1959/60 de 690.600 ha, lo que evidencia una merma histórica en las superficies sembradas en la provincia respecto a los datos de las campañas de 1914 y de 1941. Recién en la campaña agrícola de 1961/62 la superficie sembrada con 1.176.500 ha retoma niveles similares a las anteriores, siendo el lino el 38%, el maíz el 32%, el trigo el 25%, muy por encima del girasol (2%) y del arroz (1,5%) (Montero, 2006).

### **3.2 Las transformaciones en la estructura económica del agro entrerriano**

La particularidad de las movilizaciones de productores rurales en Entre Ríos obedece en gran medida a razones de orden económico. Las transformaciones agrarias provocadas por los cambios modernizadores en el agro argentino a partir de la década

del '70 del siglo XX, que se profundizaron en la década del '90 con el Agronegocio y la agriculturización, tuvieron gran impacto en Entre Ríos, especialmente con la expansión de la soja, a partir de la devaluación del peso en 2002 y el aumento en los precios internacionales de los commodities.

El impacto de la sojización experimentada a partir de la segunda mitad de los '90 se hizo sentir en Entre Ríos: la mayor cantidad de hectáreas cultivadas se destinó a oleaginosas (casi el 70%, siendo la soja la que explica gran parte del porcentaje) y a cereales (el 30%). Si bien la participación en la producción de soja a nivel nacional ha sido del 7,16% promedio entre 2000/2001 y 2006/2007, ésta fue una de las provincias que ha vivido con más fuerza las transformaciones estructurales en el medio rural en las últimas dos décadas (Villanueva, 2014).

La provincia de Entre Ríos, a partir de la implantación del paquete tecnológico (soja RR resistente al glifosato, uso de agroquímicos y siembra directa) desde mediados de la década de 1990, ha incrementado su participación en la producción nacional, pero a la vez produjo una mayor selección de los productores y de los establecimientos agropecuarios, los productores más dinámicos, innovadores y con mayores recursos financieros pudieron permanecer en el sistema productivo, pero los productores más endeudados y con escasa capitalización debieron abandonar la producción (CRER INTA, 2012).

Analizar su evolución desde comienzos del nuevo milenio resulta fundamental, ya que la exportación de los porotos de soja y sus derivados constituyen fuentes generadoras de divisas para el país.

El cultivo de la soja cobró impulso a partir de fines de los años '90 en esta provincia. La utilización del sistema de siembra directa y la introducción del paquete tecnológico (fertilizantes, herbicidas y semillas RR resistentes al herbicida Round Up), provocaron esta expansión de la frontera agrícola hacia tierras menos aptas, desplazando a la ganadería hacia zonas insulares (Engler, Vicente y Cancio, 2007).

La evolución de la superficie sembrada y la producción en toneladas de soja (Cuadro 2) experimentó un gran crecimiento entre la campaña agrícola 2000/2001 y la de 2007/2008. La superficie sembrada aumentó un 120% entre ambas campañas, mientras que en cuanto a producción la cantidad de toneladas de soja cosechadas se incrementó en un 96% entre dichas campañas. El rinde promedio para todo ese período en Entre Ríos fue de 2293,75 kg/ha, un rendimiento por debajo del promedio de la provincia de Buenos Aires y de las otras provincias de la región Centro, argumento que

las entidades agrarias entrerrianas utilizaron durante el conflicto para demostrar la necesidad de excluir a esta provincia de la región Pampeana.

## Cuadro 2

*Evolución de la producción de soja en Entre Ríos*

<b>Campañas Agrícolas</b>	<b>Sup. Sembrada (ha)</b>	<b>Producción (tn)</b>	<b>Rendimiento promedio (kg/ha)</b>
<b>2000/01</b>	593.500	1.519.037	2.555
<b>2001/02</b>	810.800	1.858.838	2.330
<b>2002/03</b>	1.026.500	2.395.340	2.354
<b>2003/04</b>	1.141.200	2.190.806	1.927
<b>2004/05</b>	1.200.250	2.825.198	2.376
<b>2005/06</b>	1.281.998	2.478.509	1.933
<b>2006/07</b>	1.285.000	3.316.792	2.587
<b>2007/08</b>	1.307.998	2.979.275	2.288

Fuente: elaboración propia en base a Informe Bolsacer

En el cuadro 3 se puede observar la evolución de la superficie sembrada y cosechada de soja en Argentina en esas últimas tres campañas, la mayor producción de la campaña 2006/07 respecto de la 2005/06 se explica por el incremento de rendimiento. Tomando la campaña agrícola 2007/08 vemos que la superficie sembrada (en ha) de Entre Ríos respecto a la nacional es de un 7,87%, en cuanto a producción (tn) es de un 6,44%, mientras que en rendimiento Entre Ríos está 533 kg/ha por abajo del nacional y, tomando el promedio de las tres campañas, el rendimiento promedio de Entre Ríos respecto del nacional es de 535 kg/ha menos. Este aspecto era considerado como fundamental en el reclamo de los productores agrarios entrerrianos.

## Cuadro 3

*Campañas de soja en Argentina (2005 a 2008)*

<b>Campaña</b>	<b>Sup sembrada (ha)</b>	<b>Sup cosechada (ha)</b>	<b>Producción (tn)</b>	<b>Rendimiento (kg/ha)</b>
2005/06	15.393.474	15.130.038	40.537.363	2.679
2006/07	16.141.337	15.981.264	47.482.786	2.971
2007/08	16.608.935	16.389.509	46.238.893	2.821

Fuente: Ybran y Lacelli (2016)

Si tomamos un promedio de las tres últimas campañas agrícolas de Entre Ríos y las comparamos con las de la provincia de Santa Fe (cuadro 4), tercera en producción de soja detrás de Buenos Aires y Córdoba, concluimos que la superficie sembrada (ha) de Entre Ríos es en promedio un 36% de la de Santa Fe, mientras que la producción (tn) es de un 26% promedio respecto a la santafesina. En lo referente al promedio del rendimiento (kg/ha) observamos una notable diferencia: 3185 kg/ha en Santa Fe contra 2269 kg/ha de Entre Ríos, evidenciándose así los menores rindes de soja del agro entrerriano respecto a la provincia vecina.

#### **Cuadro 4**

##### *Campañas de soja 2005 a 2008 en Santa Fe*

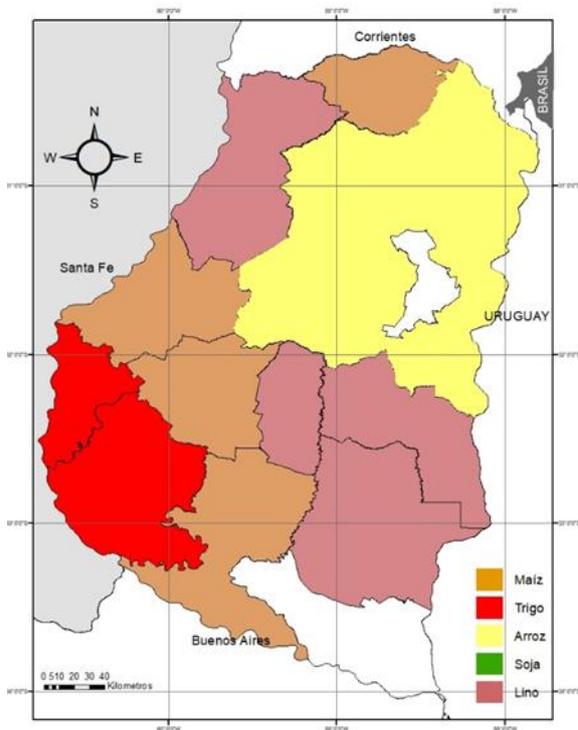
<b>Campaña</b>	<b>Sup sembrada (ha)</b>	<b>Sup cosechada (ha)</b>	<b>Producción (tn)</b>	<b>Rendimiento (kg/ha)</b>
2005/06	3.553.290	3.524.318	10.275.415	2.916
2006/07	3.474.600	3.433.555	11.295.735	3.290
2007/08	3.492.200	3.427.400	11.480.000	3.349

Fuente: Ybran y Lacelli (2016)

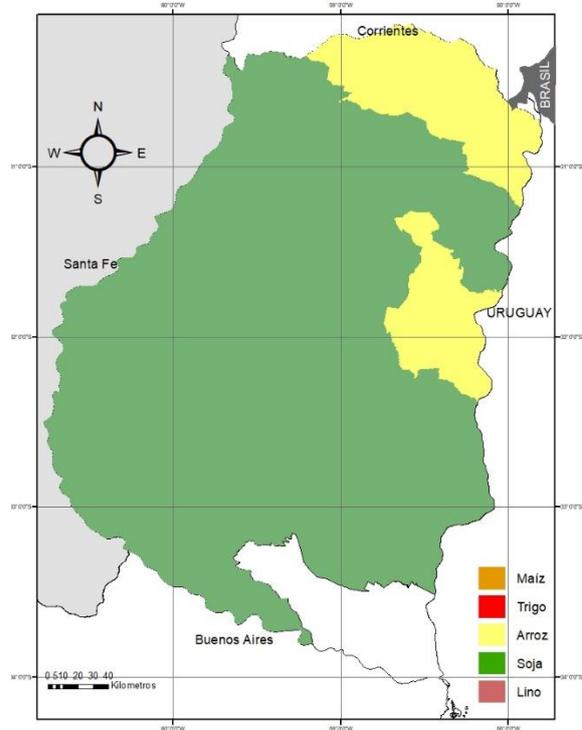
El período de mayor heterogeneidad productiva había sido entre 1980 y 1989 (Mapa 1), con una agricultura basada en una diversificación de cultivos, dependiendo de los departamentos: maíz, arroz, trigo y lino, vemos que no aparecía la soja como cultivo predominante en ninguno de los departamentos. Hasta la década de los años '90 los productores entrerrianos seguían a la estructura (el mercado interno y su demanda). Luego, en el período 1990-1999 la hegemonía la tuvieron el maíz y el arroz, sin aparecer aún la soja como importante en ningún departamento. Pero ya en el período 2000-2009 (Mapa 2) el cultivo de la soja “tiñó de verde” toda la provincia, excepto en los departamentos de San Salvador (esencialmente arrocero), Federación y Feliciano, manifestando una tendencia en la cual los productores siguieron una estrategia de tipo coyuntural: la suba de los precios internacionales, esto es, el mercado externo y su demanda (Mateo y Camarda: 2020).

La comparación entre ambos mapas demuestra la transformación productiva generada por el nuevo “modelo sojero”, en tanto cultivo predominante en la provincia de Entre Ríos en un lapso de dos décadas.

Mapa 1 (período 1980-89)



Mapa 2 período (2000-2009)



Fuente: Mateo y Camarda (2020).

La delimitación por zonas productivas reagrupando departamentos, a partir de la investigación del CRER INTA (2012 –ver Mapa en Anexo-) también demuestra la transformación productiva de la provincia, en la que el cultivo de soja pasó a ser la actividad productiva predominante, modificando las históricas producciones. La zona 1 Noroeste (departamentos La Paz, Feliciano y Federal) es una zona tradicionalmente ganadera, donde la actividad arrocerá es importante, pero la agricultura creció con la soja desde la década de los 90 y fue potenciada en los años 2000. La zona 2 Centro-sur-oeste (departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualguay) es la zona agrícola histórica de la provincia (también es importante la ganadería), con los suelos de mayor productividad, en la que el incremento de superficie de soja y otros cultivos también se observa desde los años '90, potenciados a partir del 2000.

Mientras que en la zona 3 Noreste (departamentos Federación, Concordia y Colón) el arroz venía creciendo con algunos altibajos, pero es la soja la que se incrementó exponencialmente a partir del año 2000; y la zona 4 Sureste (Uruguay,

Villaguay, Tala, San Salvador y Gualeguaychú) es la zona que más avance tuvo de la agricultura, con suelos pesados pero que con la incorporación de tecnología (siembra directa) cambió su uso (Centro Regional Entre Ríos INTA, 2012).

### **3.3 Cambios en la estructura social del agro entrerriano**

Partiendo del análisis de la estructura económica del agro entrerriano tenemos que indagar ahora acerca de su estructura social para poder aproximarnos a intentar responder: ¿quiénes fueron los productores movilizados durante los meses de conflicto entre el gobierno y el “campo” en Entre Ríos?

Los cambios que se experimentaron en el agro argentino presentaron algunas particularidades en la provincia de Entre Ríos. En el período que abarca entre los censos agropecuarios de 1988 y 2002, desaparecieron 5.245 EAPs menores de 200 hectáreas y 522 EAPs medianas de 200 a 500 hectáreas. Por otro lado ya se había experimentado una fuerte subdivisión de la tierra, debido a esto el peso relativo del número de pequeñas explotaciones era todavía importante en Entre Ríos, según el CNA 2002. Alrededor de 12.572 explotaciones poseen 100 hectáreas o menos, representan el 58,3% del total provincial y ocupaban sólo el 8,4% de la superficie productiva censada, mientras que las explotaciones medianas y grandes de más de 1.000 hectáreas, representaban el 6,1% y utilizaban el 55% de la superficie total (cuadro 5).

Por otro lado, el tamaño medio de las explotaciones agropecuarias de la región más sojera de Entre Ríos ZAH1 (Departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá y Victoria) creció el 52%, pasando de 161 hectáreas en el año 1988 a 245 hectáreas por explotación en el año 2002; mientras que para la totalidad de la provincia, el tamaño medio aumentó un 29% en igual período, por lo que uno de los efectos indirectos del crecimiento de la producción de soja, fue la aceleración del proceso de concentración de la propiedad y de la gestión.

Respecto de esta importante heterogeneidad de los actores agrarios entrerrianos que se observa en el cuadro anterior, Domínguez y Orsini (2009) señalan que, por otro lado, el modelo hegemónico productivo basado en la soja homogeneizó los intereses económicos entre los pequeños, medianos y grandes productores, sean estos propietarios puros, propietarios arrendatarios o arrendatarios puros, heterogéneos a su vez en cuanto a propiedad del suelo y del capital.

## Cuadro 5

*Estratificación de las EAPs según tamaño. Entre Ríos, CNA (2002)*

Estratos (en ha)	No de EAPs	Participación relativa	Superficie (en ha)	Participación en la superficie total censada
Menores de 100	12.572	58,30%	525.845	8,30%
100,1 a 500	6.338	29,40%	1.413.218	22,20%
500,1 a 1000	1.333	6,20%	936.672	14,70%
1000,1 a 5000	1.207	5,60%	2.395.411	37,70%
5000,1 a 10000	102	0,40%	668.494	10,50%
Más de 10000,1	25	0,10%	411.837	6,60%
Totales	21.577	100,00%	6.351.477	100,00%

Fuente: Domínguez y Orsini, 2009 en base a CNA 2002

El CNA 2008 tuvo un período de referencia comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, abarcando parte del período del conflicto. Se utiliza aquí para comparar con el CNA 2002 en base a los mismos criterios utilizados en Domínguez y Orsini (2009), para verificar si esas tendencias continuaban (cuadro 6).

## Cuadro 6

*Estratificación de las EAPs según tamaño. Entre Ríos, CNA (2008)*

Estratos (en ha)	No de EAPs	Part. relativa	Sup. (en ha)	Part. en la sup. total censada
Menores de 100	10.263	56,13%	432.583	7,26%
100,1 a 500	5.528	30,23%	1.228.878	20,64%
500,1 a 1000	1.186	6,48%	843.093	14,16%
1000,1 a 5000	1.173	6,41%	2.354.856	39,57%
5000,1 a 10000	80	4,3%	538.748	9,05%
Más de 10000,1	31	1,6%	552.876	9,29%
Totales	18.282	100,00%	5.951.034	100,00%

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2008 y Domínguez y Orsini (2009).

A partir de esta comparación entre el CNA 2008 y el CNA 2002 se puede observar una disminución de 3295 EAPs, la gran mayoría de las cuales correspondieron a las EAPs menores de 100 ha (2309 EAPs menos y una pérdida de 93.262 ha de superficie) y las de entre 100 y 500 ha (810 EAPs menos y una pérdida de 184.340 ha de superficie), de todos modos los pequeños productores y medianos de hasta 500 ha continuaban teniendo relevancia en el número total de EAPs (15.791, con un 86,36% del total y un 27,9% de participación en la superficie total). Asimismo se percibe una

reducción de EAPs y de hectáreas en las tres siguientes categorías (entre 500 y 1000, entre 1000 y 5000, y entre 5000 y 10000) aunque no tan significativa como en las dos primeras, pero en el caso de las EAPs de más de 10000 ha se produce un fenómeno inverso, que es el incremento en 6 nuevas EAPs y en 141.039 ha de superficie incorporadas.

Con esto podemos inferir que las tendencias perfiladas continuaron profundizándose en los años anteriores al conflicto de 2008, esto es la desaparición de las EAPs menores a 100 ha y las de entre 100 y 500 ha, por un lado, mientras que por otro lado se manifestaba la concentración, sobre todo en las EAPs mayores a 10000 ha, y la necesidad creciente de escala para la producción de soja, particularmente a partir de las 1000 ha. Reagrupando las tres últimas categorías podemos afirmar que las EAPs que explotaban cantidades superiores a las 1000 ha eran un 12,31% del total, pero que explotaban un 57,91% de la superficie total (un 3,11% más respecto al CNA 2002).

La investigación de campo del INTA (Centro Regional Entre Ríos: 2012 y Villanueva: 2014), profundiza en la categorización de los nuevos actores del agro entrerriano de las últimas décadas. Los define a partir de ocho categorías: 1) Pool típico base extra-local; 2) Pool de siembra de base local; 3) Proveedor de servicios e insumos; 4) Gran propiedad (+2000 ha); 5) Productor familiar expandido (diferenciando el de menos de 1.000 ha y el de más de 1.000 ha); 6) Productor de origen extra-provincial; 7) Cooperativa; 8) Profesional del sector. Los criterios de análisis utilizados por los autores fueron la dimensión territorial (localización y origen del actor), propiedad y uso de la tierra, tipo de producción, destino y tecnología, tipo de gestión, dimensión financiera, forma jurídica e impacto territorial (destino de la renta).

A continuación se sintetiza la descripción de los nuevos actores del agro entrerriano en base a INTA Centro Regional Entre Ríos (2012) y Villanueva (2014). El pool de siembra típico de base extra-local es una mega-empresa (SA, fideicomiso o fondo de inversión) que no es actor de la provincia, gestiona activos para la producción agrícola, maneja economías de escala, con pocos costos fijos y una rentabilidad a corto plazo, alquilan tierras, compran y venden fuera de la provincia, sin agregar valor, más asociados a la exportación.

El pool de siembra de base local son actores de la zona, productores vecinos que deciden juntar activos, organizando una red que apoya actores con recursos limitados y que desean gestionar mejor sus recursos (tierras, maquinaria, tareas agrícolas), captan recursos financieros por su familia o actores económicos locales (clase media a alta) que

viven en la ciudad, toman tierras y contratan las labores agrícolas siempre en la zona, compran y venden en la zona, hasta a veces agregan valor en origen, localizando la renta en la provincia y adoptando una lógica empresarial en vías de management.

El proveedor de servicios e insumos ofrece servicios de transporte, aplicaciones químicas, asistencia técnica y/o acopio, son de la zona o pueden ser sucursales de actores de otras provincias, manejan recursos financieros propios o con aportes locales, financian la campaña agrícola, compran y venden en la zona porque tienen buen manejo de la información de mercado, técnica y comercial, localizando la renta en la provincia.

La gran propiedad son propietarios de grandes superficies (más de 2.000 ha), son de la zona o han venido de otras provincias, en general trabajan sus propias tierras y pueden expandirse desde la lógica empresarial, buscando escala de producción y crecimiento de sus actividades.

El productor familiar expandido son productores familiares y capitalizados que poseen equipamiento propio y gran capacidad para siembra, cosecha y acopio, en sus propias tierras y que se expanden, la mayoría arrendando, contratan en la zona y pueden prestar servicios a terceros. Se pueden reconocer dos sub-categorías: a) los productores de menos de 1.000 has tienden a transformarse en prestadores de servicios, algunos diversifican e incursionan en otros eslabones agregando valor u otras actividades (transporte, acopio, trabajo a parte); b) los productores de más de 1.000 has, trabajan con tecnología de punta, manejan recursos financieros propios o por endeudamiento bancario y/o comercial hacen el movimiento comercial en la zona y localizan la renta en la provincia, con un muy fuerte compromiso local, su lógica patrimonial se transforma en una lógica empresarial, subrayando que los productores de menos de 1.000 has pueden encontrarse en un equilibrio bastante frágil y hasta inestable.

El productor extra provincial son productores de otras provincias que llegaron a Entre Ríos gracias a los valores más bajos de la tierra, administran tierras propias y arrendadas, suelen ser también propietarios en otras provincias (distribuyendo riesgos), como no tienen contactos locales numerosos (excepto el contratista y el asesor técnico), el compromiso local es muy limitado. En general, compran y venden parcialmente en la zona pues por lo general deslocalizan la renta hacia sus localidades de origen (Santa Fe y Buenos Aires especialmente), con una lógica empresarial.

Algunas cooperativas arriendan tierras en la provincia o en otras, siendo muchas de ellas tierras de sus asociados, los cuales trabajan las mismas mientras la cooperativa brinda insumos, esto se constituye en una nueva forma de sostenimiento del pequeño y

mediano productor. Movilizan recursos financieros propios y de terceros, y, en general, realizan compra y venta en la zona, dado el compromiso local muy fuerte, la renta está localizada en la provincia, pero con una lógica organizacional de tipo empresarial.

El profesional del sector, organizado en sociedad de hecho o empresa unipersonal, decide producir mientras sigue con su actividad de asesoramiento, administra tierras arrendadas en la provincia y/o también pequeñas superficies heredadas, compran y venden en la zona, con aptitud para manejar herramientas de mercado, a veces se asocia con productores u otros profesionales, o participa en sociedades comerciales.

Resta saber el peso de estos nuevos actores en el agro entrerriano.

### **3.4 El lugar de los nuevos actores en el agro entrerriano**

Del total de 2.033.991 ha sembradas en 2012 con los diferentes cultivos (según INTA CRER 2012 en base a datos de la BOLSACER 2012): 1,2 millones (62%) son ocupadas por estos nuevos actores, en tanto que los productores tradicionales ocuparon menos de 800.000 has. (38%) de la superficie agrícola provincial (INTA CRER, 2012). Es para destacar la relevancia que ha adquirido un actor: los productores agropecuarios familiares capitalizados (expandidos), que ocupan el mayor porcentaje de las tierras destinadas a la producción agrícola (27,33%).

El mundo rural entrerriano mantiene así un modelo dual (Villanueva: 2014): una agricultura más tradicional (anclada a la tierra, con una mirada patrimonial y de fuerte carácter territorial, responsable del mantenimiento del tejido social rural) y una agricultura empresarial (altamente competitiva, con capacidad de deslocalizar sus procesos productivos y la renta, que sólo ancla la renta en los lugares con condiciones estructurales favorables). En el cuadro 7 se puede comprender la importancia de estos actores en el desarrollo agrícola provincial.

## Cuadro 7

*Actores de la producción agrícola entrerriana y superficie ocupada 2012*

Categoría de actores	Actores		Sup. ocupada		Sup. promedio
	N°	%	ha	%	
Pools de base extra local	19	1,90	50.765	4,06	2.672
<b>Pools de base local</b>	10	1,00	45.067	3,60	4.507
Proveedores de servicios e insumos	27	2,70	26.245	2,10	972
<b>Grandes propiedades</b>	161	16,15	428.943	34,29	2.607
Total productores familiares (expandidos)	574	57,50	555.948	44,44	969
<b>Productores extra provinciales</b>	165	16,55	117.569	9,40	690
Cooperativas	6	0,60	10.151	0,81	1.692
<b>Profesionales del sector</b>	36	3,60	16.316	1,30	453
Sub-Total “Nuevos actores”	998	100,00	1.251.004	100,00	1.247
<b>Total superficie agrícola</b>			2.033.991	100,00	
Actores “tradicionales” en relación a Nuevos Actores			782.987	38,50	
<b>Productores Expandidos</b>			555.948	27,33	
“Nuevos actores”			1.251.004	61,50	

Fuente: Villanueva (2014) en base al relevamiento de campo para INTA CRER (2012) con datos de BOLSACER.

Del análisis del cuadro 7 se puede apreciar que son 998 nuevos actores agrarios. La mayoría son productores familiares expandidos, de casi 1000 ha. (el 57,5%), que ocupan casi el 45% de la superficie agrícola, seguido por los productores extra provinciales (16,55%) que ocupan un porcentaje menor de superficie (el 9,40%) y por las grandes propiedades (16,15%), que ocupan el 34,29% de la superficie (con un promedio de superficie ocupada de 2500 ha). Los pools de base extra local (1,90% con 4,06% de superficie) y los pools locales (1% con 3,60% de superficie) administran grandes superficies en promedio (más de 2500 y 4500) pero son poco significativos en cantidad en relación al total de actores y en cuanto a superficies sembradas. Esto mismo pasa con los profesionales del sector (3,6% con el 1,3% de ha) y, más aún, con los proveedores de servicios (el 2,7% ocupando el 2,1% de ha) y las cooperativas, que son muy pocas (0,6%), ocupando poca superficie (0,81% de ha).

## Cuadro 8

*Distribución de los nuevos actores del agro por Departamentos por superficie.*

Departamentos	Pool extra-local	Pool local	Proveedor de serv. e insumos	Gran propiedad	Prod. menos de 1.000 ha	Prod. de más de 1.000 ha	Total prod. expandidos	Prod. Extra prov.	Cooperativa	Prof. del sector
Feliciano	0	0	0	15630	5.738	7.800	13.538	1.820	0	0
La Paz	0	10600	2400	55150	13150	38000	51150	18950	300	950
Federal	3000	7972	4710	18150			14884	0	0	800
Nogoyá	0	0	1810	2797	16816	4618	21434	10707	980	990
Diamante	0	0	1760	0	14000	11256	25256	0	444	1499
Paraná	0	2079	1587	2497			48414	6396	0	438
Victoria	400	0	1315	4659	53400	55800	109200	2977	0	625
Gua- le- guay	17672	3160	4469	54940			52267	13531	1081	3340
Federa- ción	0	1200	1800	14700	0	5520	5520	0	0	0
Concordia	0	0	0	12100	6546	3600	10146	1200	0	0
Colón	0	0	2174	9087	1825	3116	4941	4826	420	0
San Salvador	1000	0	180	8600	11000	7800	18800	8000	0	1200
Villaguay	7000	900	400	75000	33650	20850	54500	14100	500	1750
R. del Tala	2893	0	1630	8243			24215	3914	0	238
Uruguay	18800	4036	2010	58396			47539	23316	2250	517
Gua- le- guaychú	0	15120	0	92160			54144	4032	4176	3969
Total	50765	45067	26245	432743	156125	158360	555948	113769	10151	16316

Categorías: 1) Pool típico base extra-local; 2) Pool de siembra de base local; 3) Proveedor de servicios e insumos; 4) Gran propiedad; 5) Productor expandido de menos de 1.000 ha; 6) Productor expandido de más de 1.000 ha); 7) Productor de origen extra-provincial; 8) Cooperativa; 9) Profesional del sector.

Fuente: INTA CRER (2012).

A partir del cuadro 8, que discrimina los nuevos actores del agro entrerriano por departamento en cuanto a superficie ocupada, podemos observar que la mayoría de los pools de base extra local están localizados en Gualeguay y Uruguay, mientras que los de base local están en Gualeguaychú y La Paz. Los proveedores de servicios están repartidos en casi todos los departamentos. Las grandes propiedades ocupan la mayor superficie de Gualeguaychú, Villaguay, Uruguay Gualeguay y La Paz. Los productores expandidos ocupan gran superficie en Victoria, aunque menos pero siendo importante en Villaguay, La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay y Paraná, variando entre los mayores y menores a 1000 ha. Los productores extra provinciales ocupan superficie en Uruguay, La Paz y Villaguay, y menos en otros departamentos. Las cooperativas que ocupan superficie son importantes en Gualeguaychú, Uruguay y Gualeguay, menos en otros e

inexistentes en el resto de departamentos. Los profesionales ocupan en mayor medida superficies en Gualeguaychú, Gualeguay, Villaguay, Diamante y San Salvador.

Villanueva (2014), centrándose en los productores familiares expandidos, a partir de un estudio de casos de una muestra de éstos, nativos de la provincia, dedicados a la agricultura y con una importante expansión productiva realizada principalmente en la década de 2000, concluye que éstos, dadas las transformaciones estructurales en el agro argentino y entrerriano vieron amenazada su actividad productiva, debieron adaptarse y resignificar su forma de gestión e identidad. Éstos reafirmaron su presencia tomando tierras e intensificando la utilización del capital fijo, donde el conocimiento profesional se transformó en un factor fundamental para la gestión de las explotaciones. Crecieron y se capitalizaron en su lugar de origen, gracias a la trama de relaciones sociales que mantuvieron por ser locales y conocer la sociedad y el territorio, “haciendo del ‘ser del lugar’, ‘tener una trayectoria en el mismo’ y haber generado ‘confianza’ en su zona, una ventaja competitiva al momento de crecer, manteniendo un anclaje social con el medio donde se desenvuelven” (p. 99).

Serrano (2013) indaga acerca de los productores movilizados en el corte del Túnel Subfluvial, que incluía como “productor y/o autoconvocado” a una multiplicidad de actores, afiliados a una entidad o no, que estaban estrechamente relacionados con un tipo de producción agrícola-ganadera de la ciudad de Paraná y de Paraná Campaña (localidades del departamento homónimo): empresarios rurales de distintos tamaños, contratistas de maquinarias y otros servicios. Según su investigación,

Integran un arco heterogéneo de productores en lo que refiere al tamaño de sus explotaciones (la mayoría de nuestros entrevistados trabajan superficies entre 500 y 2500 hectáreas, si bien algunos pocos operan explotaciones mayores); las actividades que realizan (si bien todos dedican parte de su explotación al cultivo de soja y trigo, algunos combinan con la producción ganadera y en menor medida, con la actividad tambera); o las formas de control de la tierra (casi todos combinan la propiedad de la tierra con contratos accidentales para el cultivo de cereales, y en menor medida arrendamiento)... productores que están a cargo de la gestión económica y productiva de sus explotaciones, y que emplean a uno o dos trabajadores permanentes, contratando buena parte de las tareas productivas a empresas de maquinaria. (Serrano, 2013, p. 77)

Pero además de propietarios, productores directos y a la vez tomadores de tierras para lograr escala productiva, dentro de la categoría de “autoconvocados” se referenciaron también

Contratistas de maquinaria que a su vez toman tierras; profesionales urbanos -el caso típico son los abogados o médicos, pero también ingenieros agrónomos, con alguna capacidad de ahorro

que han invertido en el sector agropecuario-, sea alquilando tierra y contratando todos los servicios, sea asociándose con algún productor y/o contratistas. (Serrano, 2013, p. 77)

A continuación se realizará una descripción del escenario político entrerriano de los últimos años, además de analizar las elecciones de 2007 para gobernador y legisladores para determinar la conformación de las fuerzas políticas provinciales. Se utilizaron fuentes oficiales y artículos periodísticos locales.

### **3.5 Caracterización del escenario político entrerriano**

En lo que sigue analizaremos la composición política de la gobernación y de las cámaras legislativas entrerrianas que asumieron a partir del 10 de diciembre de 2007. Para los datos de las elecciones tomamos como fuente los datos del Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, de las Elecciones Provinciales de Entre Ríos del 18 de Marzo de 2007 en su escrutinio definitivo<sup>12</sup>.

Los resultados de las elecciones del 18 de marzo de 2007 en Entre Ríos dieron como electo gobernador a Sergio Urribarri y como vicegobernador a Eduardo Lauritto, candidatos del Frente Justicialista para la Victoria con 294.407 votos (47,00%). El segundo lugar lo obtuvo la fórmula de la Unión Cívica Radical: Gustavo Cusinato-Alba Allende de López, que obtuvo 124.601 votos (19,89%). En tercer lugar quedaron los candidatos del Frente para la Victoria y la Justicia Social, Julio Solanas-Enrique Cresto con 117.968 votos (18,83%). El cuarto lugar fue para Emilio Martínez Garbino-Eduardo Solari de la Concertación Entrerriana, que consiguió 53.328 votos (8,51%).

La candidatura del intendente de Paraná en ese momento, Julio Solanas, por fuera del PJ entrerriano (por primera vez en elecciones provinciales el peronismo iba dividido), acompañado de otros dirigentes peronistas, implicó una fractura interna en el partido y una disputa a la conducción hegemónica bustista sobre el peronismo entrerriano desde 1987, cuando Busti accedió a su primera gobernación. El adelantamiento de octubre a marzo para las elecciones de la provincia de 2007 le restó tiempo de armado electoral al por ese entonces intendente de Paraná, Julio Solanas, y, al desdoblarse las elecciones de esta provincia respecto de las nacionales en octubre, impidió el respaldo del presidente Néstor Kirchner en la boleta de Julio Solanas.

Jorge Busti, gobernador por tercera vez entre 2003-2007, no pudiendo modificar la Constitución entrerriana que lo habilitara a un cuarto mandato, designó como

---

<sup>12</sup> Wayback Machine (2/9/2011). Disponible en: [https://web.archive.org/web/20110902193904/http://www.elecciones.gov.ar/estadistica/archivos/2007\\_NO\\_SIMULTANEAS/EntreRios\\_18%20Mar\\_07.pdf](https://web.archive.org/web/20110902193904/http://www.elecciones.gov.ar/estadistica/archivos/2007_NO_SIMULTANEAS/EntreRios_18%20Mar_07.pdf)

candidato sucesor a Sergio Urribarri, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Gobierno, sin internas partidarias que fijaran postulaciones. Cabe aclarar que el nombre del frente electoral con el cual compitió, el “Frente Justicialista para la Victoria” fue una “jugada política” del bustismo para hacer un guiño al kirchnerismo nacional (FPV: Frente para la Victoria), pero a su vez dejar marcada la impronta del PJ entrerriano y la relativa autonomía con la cual Busti dirigió al PJ en los años anteriores.

La lógica política del bustismo durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) no fue diferente a la de sus anteriores mandatos (1987-1991 y 1995-1999). Su relación con el presidente justicialista Carlos Menem (1989-1999) fue la de un acompañamiento de las políticas nacionales sin confrontaciones. Durante el gobierno de Kirchner entre 2003-2007 la posición del gobernador Busti fue la de apoyar al modelo económico nacional y de acompañamiento de las políticas implementadas, pese a las diferencias en cuanto a que Menem privilegió un modelo de convertibilidad, financiero y de servicios, mientras que Kirchner apuntaló un modelo basado en la devaluación, el eje productivo-exportador a la vez que el paulatino fortalecimiento del mercado interno, de la mano del incremento del empleo y de la recuperación del poder adquisitivo de los asalariados.

En las elecciones a Senadores los resultados arrojaron la obtención de 14 senadores para el Frente Justicialista para la Victoria, habiendo ganado 14 departamentos sobre un total de 17 (en total obtuvo 285.368 votos, el 46,25%), seguido por el FPV y la Justicia Social que obtuvo dos senadores en el departamento Tala y en San Salvador (en total provincial 113.843 votos, el 18,45%) y por la UCR que obtuvo sólo uno por haber triunfado en el departamento Federación (en total provincial 127.198 votos, 20,62%). La Concertación entrerriana no obtuvo bancas. El peronismo obtenía así una abrumadora mayoría en la cámara con 16 senadores (si contamos a los dos senadores del FPV y la Justicia Social) y uno sólo por la minoría radical.

En las elecciones a Diputados, el Frente Justicialista para la Victoria obtuvo 288.650 votos (47,24%) y alzándose con 15 diputados sobre un total de 28. La Unión Cívica Radical 125.091 votos (20,47%), obteniendo 6 bancas. En tercer lugar quedó el Frente para la Victoria y la Justicia Social con 113.588 votos (18,59), obteniendo 5 bancas, y la Concertación Entrerriana obtuvo 47.688 votos (7,80%), con sólo 2 diputados. Nuevamente en esta cámara se observa que el peronismo (sumando al FPV y la Justicia Social) obtenía 20 escaños, teniendo así una mayoría automática bajo la presidencia del cuerpo de Jorge Busti. Él mismo favoreció una “amnistía” a todos los

dirigentes del justicialismo entrerriano, incluido Julio Solanas, que habían competido en las elecciones provinciales de marzo por fuera del PJ<sup>13</sup>. Con esto se cerraban las diferencias al interior del partido y Jorge Busti se aseguraba la continuidad de la dirección partidaria, de la cual era el presidente (PJ provincial).

En el apartado siguiente se analizará el comportamiento de las entidades agropecuarias entrerrianas en los meses previos al conflicto iniciado en marzo de 2008, a partir de un relevamiento realizado entre los meses de noviembre de 2007 y marzo de 2008 sobre los periódicos locales.

### **3.6 Relación gobierno - corporaciones agropecuarias**

La relación entre el gobierno nacional y las entidades agropecuarias a nivel nacional venía siendo tensa desde 2005, mayormente basada en las diferencias en las políticas agropecuarias nacionales sobre carnes, trigo y lácteos.

El día 7 de noviembre de 2007, diez días después de las elecciones nacionales que la consagraran como presidenta a Cristina Fernández de Kirchner, como ya vimos, el Gobierno nacional decidió aumentar entre 5 y 8 puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de maíz, trigo, soja y derivados. Esta suba era una medida que se rumoreaba los días anteriores y que tuvo cierta cobertura mediática. En los inicios de la siembra de soja para la campaña 2007-2008, las entidades nacionales del agro inmediatamente manifestaron rechazo a las medidas y evaluaron tomar acciones en su contra.

En Entre Ríos, al día siguiente, aparecieron las primeras declaraciones públicas de los dirigentes agrarios. Alfredo de Ángeli, presidente delegado de la Federación Agraria Delegación Entre Ríos manifestó su “total repudio” a la decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a los granos y algunos subproductos y cuestionó que:

El dinero que comprometieron para disciplinar a intendentes y gobernadores en las elecciones ahora lo tiene que pagar el sector agropecuario”, y que el gobierno obtendrá “más concentración de riqueza para manejar el dinero a su discreción, sacarle fondos al interior para manejarlo en Capital Federal, y como consecuencia traer más pobreza” y “usarán el dinero para arreglar lo que han malgastado en las elecciones<sup>14</sup>.

Como surge de estas primeras declaraciones de Alfredo de Ángeli aparecen argumentos que se repetirían una vez iniciado el conflicto de 2008, en esta oportunidad

---

<sup>13</sup> Bizai, Pablo. “La reconciliación entre dos históricos aliados” (9/3/2008), *El Diario de Paraná*, p. 4.

<sup>14</sup> “Total repudio al aumento de retenciones” (9/11/2007), *El Diario de Paraná*.

apunta al carácter fiscalista y recaudatorio de la medida, vinculada al centralismo del manejo por el gobierno nacional, pero con un destino como la utilización de los fondos de las retenciones, que el campo provee, para cubrir los costos de la campaña a elecciones nacionales del 29 de octubre de 2007, con los cuales el oficialismo habría cooptado financieramente a intendentes y a gobernadores.

Por otro lado, y en la misma nota, se mencionan fragmentos de un comunicado emitido por la FEDECO, alineada nacionalmente a CONINAGRO, aquélla consideraba que la medida fue “una nueva decisión inconsulta”, ya que “no participamos como sector directamente perjudicado”, y que se perjudicaba “aún más a nuestra gente” y se impedía “el crecimiento y el desarrollo de los pueblos del interior”, porque “el sector poco y nada recibe a pesar de su inmenso aporte” y que “el hombre de campo apuesta día a día a mejorar la performance de su actividad pero los argumentos válidos, fundamentos ciertos son menoscabados y en muchos casos anulados por medidas que desmoralizan y preocupan”<sup>15</sup>.

El cooperativismo agropecuario también evidenciaba molestias por las retenciones a las exportaciones, en este caso haciendo hincapié en el aporte que hacen los productores del interior, que trabajan en cooperativas, “al crecimiento de los pueblos del interior”. Por otro lado pone el foco en otro aspecto, como el de la elaboración y formulación de las políticas públicas, en este caso “inconsulta”, a diferencia de las retenciones establecidas en 2002 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde y del ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, en donde las entidades agropecuarias participaron y avalaron la decisión del gobierno nacional de establecer retenciones a las exportaciones de granos por la situación de crisis económica y social que atravesaba el país.

Los días siguientes los periódicos relevados no daban cuenta de declaraciones de dirigentes agrarios entrerrianos, pero sí un medio periodístico local reproducía declaraciones de algunos dirigentes de entidades nacionales del agro. Luciano Miguens, presidente de SRA declaraba: “el argumento de que al campo le va bien no es la realidad. No todo es la Pampa Húmeda ni es la soja”<sup>16</sup>.

El planteo de la SRA, más afín a la actividad predominante dentro de sus afiliados, la ganadería, históricamente factor fundamental de sus reclamos (Panero, 2017), discutía el argumento nacional de coyuntura internacional favorable para el agro nacional y que la contribución al Estado tendría que provenir de ese sector, pero por

---

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> “Los productores irritados por el aumento de retenciones” (10/11/2007), *El Diario de Paraná*.

otro lado en el argumento de Miguens no había (aún) una postura férrea de tomar a la soja como motivo de lucha gremial. Mientras que CONINAGRO, en la misma nota planteaba: “nos desaniman en el esfuerzo por tecnificarnos para aumentar rendimientos y mejorar condiciones de comercialización. No lo pensamos solamente desde el productor. Lo declaramos desde la sociedad argentina en su conjunto”<sup>17</sup>.

Aquí el argumento dispara contra la quita de rentabilidad del sector, sobre todo para los pequeños y medianos productores cooperativizados, que tienen diferente capacidad de inversión o que hicieron el esfuerzo para tecnificarse, pero la cantidad de superficies sembradas o los rindes obtenidos no son como los de los grandes productores.

Pero el argumento más fuerte vertido por aquéllos días fue de Pedro Apaolaza, titular de CARBAP, entidad más combativa dentro del frente gremial rural de CRA, para el cual la medida era confiscatoria de la renta que obtiene el sector y advirtió que recurrirían a la justicia para frenar la resolución del gobierno: “es inédita la carga fiscal que debe enfrentar el sector agropecuario”. Su rechazo apuntaba así contra el Estado que toma medidas recaudatorias que provocan el “desaliento de la producción” (O’Donnell, 1977).

Y a continuación, un argumento que las entidades agrarias habían planteado en contextos de subas anteriores de las retenciones, en la voz del titular de CARBAP, Pedro Apaolaza: “el campo no es obsecuente, mientras que la industria vive a la sombra del aparato que armó el Estado nacional... si el gobierno nacional intenta sacar más, hay que lograr que el campo produzca más porque esta situación es inédita”.<sup>18</sup> Surge aquí la cuestión en torno a la redistribución de la riqueza de la renta agropecuaria y su destino, con lo cual critica el rol interventor del Estado sobre aquélla y el uso para financiar o subsidiar otras actividades económicas, como las industriales.

Esta situación de intervención estatal para la reasignación de recursos entre sectores económicos, para el caso entrerriano, tendrá su implicancia en lo que hace al sector agroindustrial.

La falta de unidad y coordinación de acciones de protesta por parte de las entidades más representativas del agro a nivel nacional hicieron que no se manifestara en la forma de conflicto con el gobierno nacional. Como señala de Anchorena (2017):

---

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> “Siguen las críticas por las retenciones” (12/11/2007), *El Diario de Paraná*.

El aumento de retenciones a la soja del 35% en noviembre del 2007 pasó casi inadvertido para la sociedad. El gobierno especulaba que el sector no sufriría por el aumento de las retenciones, o que, en cualquier caso, su capacidad de movilización era baja. (p. 64)

La misma situación se evidenció en el escenario entrerriano, donde no hubo acciones de reclamos por parte de las entidades, en un contexto en el cual algunas estaban reeligiendo a sus representantes, como el caso de Jorge Chemes en FARER. Pese a esto, manifestaban tener diálogo entre ellas.

A continuación se destacan declaraciones de empresarios del sector productivo entrerriano, relevadas en los periódicos locales, en torno a sus percepciones sobre las políticas económicas nacionales, así como sobre la situación económica provincial en la coyuntura de fines de 2007 y comienzos de 2008.

A partir del análisis de las declaraciones de empresarios entrerrianos ligados al sector agropecuario y agroindustrial evaluaremos cuál era la percepción de sí mismos y de los contextos nacional y provincial.

La actividad económica agropecuaria para la provincia de Entre Ríos es fundamental y, dentro de ésta, se destaca la producción agrícola. En un Informe Económico de *El Diario de Paraná* que analizaba el año 2007 se planteaba que:

La soja aportó 3,3 millones de toneladas, el maíz 1,1, el trigo 780000 y el arroz 470000. Estos números de producción llevados al mercado significaron para Entre Ríos ingresos cercanos a los 3000 millones de dólares. La cifra es más que elocuente y explica por sí misma por qué el sector agropecuario es el que sigue motorizando la economía en nuestra provincia y el país”. Buena parte de esa cifra quedó dentro de la región, como reinversión permanente que hacen los productores (otra buena tajada se fue a la nación en concepto de retenciones). El dinamismo de las ciudades y pueblos del interior están ligados directamente a estos resultados, y se nota claramente cuándo una campaña fue buena. El comercio ha trabajado en uno de sus mejores años y ya se habla de un 15% de incremento en sus ventas.<sup>19</sup>

El notable incremento de la producción de granos, especialmente de la soja, es reconocido como un factor clave para las ciudades medianas y pequeñas de la provincia, más vinculadas a la producción primaria, y en su relación con otros sectores ligados íntimamente a esta actividad, como son el comercio y los servicios.

En el mismo Anuario Económico se realizó un sondeo de opinión a empresarios y dirigentes de la producción entrerrianos que nos permite tener un panorama de la evaluación y expectativas de la burguesía provincial:

---

<sup>19</sup> “El campo sigue siendo el factor motorizador” (28/12/2007), *El Diario de Paraná. Anuario Económico. Suplemento especial*, p. 2.

Entre las principales preocupaciones para los empresarios se encuentra la inflación y el tema energético, la falta de escenarios claros como la lechería impiden la toma de decisiones para acelerar inversiones y aprovechar el contexto nacional, pero principalmente internacional, favorable a la Argentina... (Respecto a las expectativas sobre el gobierno provincial) la mayoría tiene esperanzas y destaca la inclusión de dirigentes y empresarios del sector privado para conformar un equipo interesante para la secretaría de la Producción<sup>20</sup>.

Notamos que, en general, para los empresarios entrerrianos entrevistados, hay un reconocimiento del contexto internacional favorable, con precios internacionales para los agroalimentos muy propicio, que la posicionaban a la provincia en un lugar muy relevante, como así también la producción para el mercado interno, dada la recomposición de éste durante los últimos años. Pero se observa la preocupación por la inflación, que se había comenzado a manifestar hacia fines de 2005 y las dificultades de oferta energética, estos factores ligados a un modelo económico nacional que se encontraba en el sendero de crecimiento con constante nivel de demanda y consumo interno y de requerimiento de energía para la producción industrial.

Respecto de las “esperanzas” sobre el gobierno provincial, señalan la expectativa generada para estos empresarios la designación al frente de la Secretaría de la Producción de un empresario avícola como Héctor Motta, cuyas empresas prosperaron y se expandieron desde la década del '90.

La heterogeneidad productiva entrerriana se evidencia en algunas de las declaraciones de estos entrevistados. Mientras que para Jorge Chemes, de la Cámara de Productores Lácteos y dirigente de FARER “(para) la producción lechera (el año fue) medianamente negativo y (la) perspectiva (es) incierta”, para Raúl Marsó, de la empresa avícola Las Camelias en San José fue “otro año positivo, con un mercado interno y externo en fuerte desarrollo. La empresa creció a un 12%... Inauguramos la planta de alimentos balanceados de Villaguay”<sup>21</sup>.

Según Domingo Veronessi, de la Unión Cerealera SRL de Gualaguaychú,

Ha sido un año bastante positivo en alimentos balanceados; el arroz ha logrado nuevos mercados; podría haber sido mejor por el contexto mundial (y) 2008 y los siguientes vienen con buenos precios para la agricultura, pero tenemos retenciones, incrementos desmedidos de precios en insumos, faltante de combustibles, agroquímicos, fertilizantes... el tren pasa y no sé cuántas oportunidades más tendremos.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> “Otro año de crecimiento” (28/12/2007), *El Diario de Paraná. Anuario Económico. Suplemento especial*, p. 3.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

Si bien para los productores cerealeros las retenciones los afectan, para los productores de alimentos balanceados las mayores retenciones implicaban una disminución de costos de producción.

Para Claudio Francou, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa,

En el sector arrocerero Urribarri conoce al sector y sus necesidades y el equipo de producción es interesante: apuesta al valor agregado y la industrialización y vamos en el mismo camino. Es la única manera de competir con los pooles de siembra.<sup>23</sup>

Mientras que para Javier Folmer de la empresa de venta de maquinaria agrícola y autos de Crespo: “fue un año muy bueno en venta de implementos y maquinarias agrícolas como de autos, nos mal acostumbramos a no esperar mucho de los funcionarios, sólo pedimos infraestructura”<sup>24</sup>.

Pese a las diferentes evaluaciones sobre el año transcurrido y dada la diversidad productiva entrerriana, el contexto de crecimiento económico sostenido a nivel nacional se replicaba para la situación provincial, con diferentes problemas dependiendo del sector.

A continuación se reproducen algunos fragmentos de la evaluación sobre el año 2007 realizada por algunos referentes del sector agropecuario y de los máximos dirigentes de las entidades.

Según la evaluación de Alfredo De Ángeli sobre el año 2007:

No han cambiado las condiciones generales en que se desarrollaron las actividades agropecuarias en nuestro país. Desde el gobierno nacional continuaron las políticas económicas negativas –suba de retenciones, cierre de registro de exportación, aumento en dólares de insumos, precios máximos, etc.- que significaron un desaliento para el productor, y la clara pérdida de una oportunidad histórica como consecuencia de condiciones extraordinarias en el mercado internacional, la matriz económica de la década del '90 se mantiene intacta, se sigue concentrando la economía, continúa el proceso de extranjerización de tierras y sigue la incursión de actores extrasector, los pequeños y medianos productores deben desarrollar sus actividades productivas cada vez más en peores condiciones, en desmedro del sistema cooperativo y con una enorme transferencia desde el interior del país hacia el gobierno central<sup>25</sup>.

El dirigente de la FAA entrerriana realizó una crítica a las políticas agropecuarias del gobierno nacional desde argumentos liberales, a partir de reclamos históricos comunes a otras entidades agrarias, como el rechazo a la suba de retenciones, el cierre de exportaciones y la fijación de precios máximo. Luego manifiesta

---

<sup>23</sup> *Ibidem.*

<sup>24</sup> *Ibidem.*

<sup>25</sup> “Se va 2007, otro año con luces y sombras para el campo” (29/12/2007). *El Diario de Paraná. 2da Sección. El Diario Rural.*

reivindicaciones históricas específicas de su entidad, tradicional defensora de los pequeños y medianos productores, como son la lucha contra la concentración de tierras, la extranjerización de las mismas y la situación del pequeño y mediano productor.

Para Gonzalo Álvarez Maldonado (FEDECO):

2007 fue positivo por lo realizado por nuestro sector cooperativo y a la vez de varios desencuentros con el gobierno nacional y el gran acompañamiento del gobierno provincial como en el tema del desabastecimiento de gasoil, el tema retenciones a la carne, cereales y lácteos ocupó gran parte de nuestra actividad gremial, el Estado tiene la imperiosa obligación de estimular al agro y jamás desalentarlo. Debe procurarle las motivaciones necesarias con el fin de hacerlo sentir más ligado al proceso de la vivencia argentina y no quitándole sus ingresos con impuestos arbitrarios y/o distorsivos... el campo y el productor no especulan, simplemente trabajan, arriesgan e invierten año tras año pese a las innumerables contingencias adversas, para sostener a nuestras familias rurales y la marcha económica de nuestro país<sup>26</sup>.

Para el dirigente paceño Enzo Cardozo, de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER):

2007 fue positivo para el sector y los productores aunque con muchos altibajos. Los mercados internacionales ayudaron con altos valores de los granos, pero la situación no se trasladó al mercado nacional por las medidas adoptadas por el gobierno, que descontrolaron la marcha de la producción a través de los controles de precios, las intervenciones y el aumento de las retenciones. Para que las cooperativas puedan trabajar hace falta mucha infraestructura, para 2008 las perspectivas no son malas, vemos que continuará la problemática de los controles, las altas retenciones y el cierre de las exportaciones. Los precios están muy inquietos, y el clima parece venir bien, aunque hacen falta más lluvias, estamos siempre alertas, buscando alternativas para los pequeños y medianos productores, y siempre manteniendo la preocupación por el avance de los pooles de siembra, el gobierno provincial saliente promovió una ley que puede paliar un poco esta situación pero consideramos que no es la solución definitiva al problema.<sup>27</sup>

Mientras que para Abel Sabotigh, de BOLSACER:

2007 fue positivo para el sector agropecuario, especialmente el agrícola, por los precios internacionales muy firmes. La demanda de alimentos y forrajes, y la aparición de un nuevo actor –los biocombustibles- hace que el panorama sea muy alentador. El Estado, sin embargo, lamentablemente sigue castigando a la producción con más retenciones, fijación de precios, cierre del registro de exportación, cuotificación, etc. Estas políticas lo único que producen es la distorsión de los mercados, creando mecanismos de compensaciones que no funcionan, o funcionan a medias, como en el caso del trigo, donde los valores internacionales permitirían que el productor reciba por el trigo 60 dólares más. En la Provincia nuestras expectativas están centradas en la creación del Ministerio de la Producción donde se podrán llevar adelante acciones por la autonomía que le da esa jerarquía y por el programa de gobierno que presenta

---

<sup>26</sup> *Ibidem.*

<sup>27</sup> *Ibidem.*

Motta y su equipo... necesita urgente solucionar temas postergados como son infraestructura – caminos, rutas, energía, transporte, puertos-, apuntalar a los pequeños productores y crear cadenas de valor.<sup>28</sup>

Lo común en estas tres últimas declaraciones de dirigentes del sector agropecuario es la referencia al 2007 como un año positivo, producto exclusivamente del contexto internacional (no así por las políticas agropecuarias o las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional) favorable para el sector agrícola entrerriano dado los altos precios internacionales de los productos primarios, a su vez plantean un recurrente reclamo por las retenciones a las exportaciones y una visión positiva del gobierno provincial en tanto ha acompañado con medidas al sector.

El rechazo hacia el rol interventor del Estado es exclusivamente hacia el Estado nacional, no así hacia el gobierno provincial. Además de su impugnación a las ya mencionadas retenciones, se apuntaba a la intervención estatal por su fijación de precios máximos para los productores y por las restricciones a las exportaciones, en pos de políticas que liberasen más los mercados, sin considerar aquellas que tendiesen a consolidar el mercado interno y la disminución de los precios internos.

En tal sentido se manifestó Rodolfo Gross, el jefe de la filial Paraná de Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA):

El buen año agrícola nada tiene que ver con la política agropecuaria nacional, por el contrario, cada vez que mejoraban los valores afuera (las autoridades nacionales) automáticamente pensaban ahí está nuestra solución y, lógicamente, actuaron en consecuencia y nos aumentaron las retenciones. Sobre los derechos de exportación... en su momento fuimos muy conscientes de que debíamos darle una mano al Estado, y a nuestro pueblo que necesitaba de los recursos por la gravedad de la situación en que nos encontrábamos, pero de ninguna manera aceptamos la permanencia en el tiempo de tal situación, que quita importantes ingresos al sector. (Y expresó su oposición a la coparticipación de las retenciones) porque si ello ocurriera, correremos el riesgo de que nunca más las saquen.<sup>29</sup>

Pese a que el reclamo por la “coparticipación de las retenciones” fue un argumento bastante difundido durante el conflicto de 2008, éste iba atado simbólicamente al reclamo por “mayor federalismo”, en contra del “centralismo”. Si las retenciones se institucionalizaban mediante una coparticipación “correrían el riesgo” de su permanencia en el tiempo, y su apuesta era a que las retenciones fueran pasajeras, por el contexto de crisis social. De todas maneras, las entidades no “pusieron sobre la mesa”

---

<sup>28</sup> *Ibíd.*

<sup>29</sup> “Granos 2007: fue bueno por el favorable escenario mundial” (5/1/2008). *El Diario de Paraná, 2da Sección, El Diario Rural*, p. 2.

este planteo de coparticipación ante el gobierno nacional una vez desplegado el conflicto, sino que la cuestión central fue la de “retrotraer la situación al 10 de marzo”, es decir, dejar sin efecto las retenciones móviles.

Las perspectivas de la FAA de Entre Ríos respecto al acompañamiento del empresario Héctor Motta en la Secretaría de la Producción eran muy positivas. Ya avanzado enero del año 2008 hubo una reunión en la que Alfredo De Ángeli evaluó:

Es la primera vez que el gobierno nos escuchó por dos horas... quedó comprometido a solucionar problemas como el endeudamiento del Banco Nación, las compensaciones del trigo, el tema ganadero y la parte vial que en lo provincial es un tema candente y una preocupación de hace mucho tiempo.<sup>30</sup>

Mientras que Héctor Motta planteó:

Creo que hemos escuchado durante dos horas, básicamente, todos los requerimientos y las peticiones y por qué no los sufrimientos y padecimientos del pequeño productor. (Y) quedamos en que acá hay que gestionar de manera conjunta desde el gobierno de la provincia, siendo la cabeza el gobernador, que se va a encargar de temas puntuales ante Nación, como el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, y de otros temas que iremos manejando con el Banco Nación y otros entes nacionales.<sup>31</sup>

Las declaraciones de Héctor Motta denotan cierta empatía con la organización ruralista (“los sufrimientos y padecimientos del pequeño productor”, “quedamos en que acá...”), en este nuevo rol de empresario-funcionario, haciéndose eco del reclamo de la FAA y colocando a la figura del gobernador al frente de demandas sectoriales que debían estar dirigidas hacia el gobierno nacional. Esta situación se volvería a repetir durante el conflicto, cuando los ruralistas exigieron posicionamiento público del secretario y del gobernador en favor de los reclamos del campo contra la Resolución 125.

En lo que sigue, y a partir de fuentes periodísticas locales donde relevamos las declaraciones y acciones de los funcionarios del nuevo gobierno provincial, se analizará la impronta política del gobierno de Sergio Urribarri en relación al modelo económico nacional y las particularidades de la inserción de la economía entrerriana en el mismo.

### **3.7 El gobierno de Sergio Urribarri, fuerzas políticas y retenciones**

El gobierno de Jorge Busti (2003-2007) dejó como saldo, entre otras cuestiones, un equilibrio en las cuentas fiscales y el desendeudamiento de la provincia, además de los pagos en tiempo y forma de los sueldos de los empleados públicos, cuestión muy

---

<sup>30</sup> “Reunión con la FAA” (23/1/2008). *El Diario de Paraná, 2da Sección Agropecuarias*.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

valorada por la ciudadanía entrerriana, dado los antecedentes negativos en esa materia de 2002 y 2003 durante el gobierno radical de Sergio Montiel. Esto se tradujo en una valoración positiva de la imagen de Busti en amplios sectores sociales.

Sergio Urribarri asumió la gobernación el 10 de diciembre de 2007. Ya en el acto de asunción emitió un discurso donde planteaba que:

Nunca antes como ahora el país tiene un horizonte de crecimiento económico sostenible en el tiempo... apuntalado a su vez por un gobierno sólido y de amplia base popular que busca introducir las reformas necesarias para que ese crecimiento se difunda en desarrollo humano. El orden de las cuentas provinciales, más una economía creciendo con vigor, más un gobierno nacional fuerte, más una economía mundial favorable al perfil del país y de la provincia dibujan un escenario de oportunidades extraordinarias para Entre Ríos<sup>32</sup>.

Así, Sergio Urribarri se presentaba como una continuidad del gobierno anterior (primer traspaso de mando sin que se echase culpas al anterior y sin que legisladores se vayan de sus bancadas) pero en el que buscaría dejar una impronta. La clave para ésta sería un alineamiento mucho más pronunciado hacia los máximos funcionarios del gobierno nacional en la búsqueda de políticas nacionales de apuntalamiento para reforzar un perfil productivo más orientado hacia la generación de valor agregado y el fortalecimiento de las agroindustrias entrerrianas, así como el diseño de estrategias de financiamiento para obras de infraestructura provincial para lograr superar el histórico aislamiento de Entre Ríos.

El gabinete de Cristina tiene un perfil inmejorable para Entre Ríos. Tengo con sus principales funcionarios una relación personal y además estamos pensando en la misma línea política y en la misma línea de construcción ciudadana... esta relación va a permitir que podamos formular un plan de infraestructura muy ambicioso que ponga a Entre Ríos en la pista de su despegue definitivo... desatar una sinergia entre el complejo productivo y el estado. Un complejo productivo bien diseñado y articulado con el Estado es el mejor mecanismo de distribución de ingresos y conocimiento, que es la base para conseguir una sociedad con oportunidades para todos. Apostamos mucho a esta construcción de política pública.<sup>33</sup>

La relación personal a la que aludía el nuevo gobernador era con el recientemente asumido ministro de Economía Martín Lousteau, con quien planeaba trabajar algunas políticas en el sentido anteriormente descrito. Dicho alineamiento implicaba para Sergio Urribarri reconocer el liderazgo de Néstor Kirchner:

Desde el infierno nos ha traído hasta acá en paz social... Y eso sólo sería ya suficiente para que pasara a la historia. Pero ha hecho mucho más que eso. Estamos mucho mejor en todos los

---

<sup>32</sup> Riani, Jorge “Las entrelíneas de un mensaje” (13/12/2007). *Semanario Análisis de la Actualidad*, p. 8.

<sup>33</sup> “Urribarri dijo que tendrá “la mejor relación” con Cristina” (10/12/2007). *Diario Uno de Entre Ríos*, p.4.

aspectos. Kirchner nos devolvió el futuro. Y lo hizo con valentía, pisando los callos que había que pisar.<sup>34</sup>

Por otro lado, Sergio Urribarri, en el escenario político interno, tendría sobre sí el peso de la figura de Jorge Busti, tres veces gobernador, presidente del PJ provincial y presidente de la Cámara de Diputados provincial; con un antecedente de sucesión peronista a su mandato como lo fue el gobierno de Mario Moine (que sucedió al de Busti entre 1991-1995) con una fuerte interna de su propio partido, que llevó a éste a alinearse al presidente Carlos Menem. Frente a este enorme poder político territorial del bustismo, la estrategia de Urribarri fue la del alineamiento con el kirchnerismo nacional.

A un mes de gobierno, Sergio Urribarri continuaba trabajando en su estrategia de reposicionar a Entre Ríos en el marco nacional a través de la alianza con el kirchnerismo. En una nota en la que planteaba los lineamientos de gobierno, en un pasaje de la entrevista, hablando de las estrategias prioritarias, dijo:

Por eso invertimos muchas horas en este primer mes en tratar de hacer entender a los funcionarios nacionales de Economía y de Infraestructura que hasta los años '70, por aquellas cuestiones de geopolítica que nos incluían en una potencial zona de conflicto en la que no valía la pena gastar dinero, Entre Ríos estuvo relegada en todos los vectores de inversión pública. Ni trenes, ni puentes, ni rutas, ni nada. Nos tienen que ayudar a recuperar el tiempo. Y los funcionarios lo han entendido. Estamos formulando un plan de desarrollo que, aprobado, será el mayor programa de inversión en infraestructura en la historia de la provincia.<sup>35</sup>

Según la visión del gobernador, compartida por otros actores provinciales, Entre Ríos estuvo relegada de los planes de infraestructura nacional en materia de desarrollo en cuanto a ejes de integración hacia otras provincias y hacia la capital durante gran parte del siglo XX, debido a la hipótesis de conflicto con Brasil, considerado un rival en términos geopolíticos y militares, que amenazaba la seguridad e integridad territorial del país, básicamente por el control de la Cuenca del Plata y el liderazgo en América del Sur, hasta mediados de los años '80 (Peixoto y Loza, 2006). La Argentina asumió una postura defensiva y, en esta perspectiva, Entre Ríos por su cercanía a Buenos Aires era a la vez ruta de paso de posibles tropas y armamentos, por lo que mantenerla aislada era condición necesaria, lo cual geográficamente por los ríos que la circundan era ya una situación determinada.

---

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> Urribarri, Sergio "Balance: un mes de gobierno con agenda ciudadana, provincial y estratégica" (12/1/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 7.

Meses después, Sergio Urribarri celebraría los planes de financiamiento a partir de un crédito del BID<sup>36</sup> (con prioridad para inversión en rutas, energía y puertos) y el plan de Reparación Histórica firmado con Nación, con lo cual se comenzarían a realizar algunas obras de infraestructura para la provincia.

Un hecho que respalda tanto la impronta productiva que intentaba para Entre Ríos como el alineamiento hacia el gobierno nacional fue la visita de la presidenta Cristina Fernández a Concepción del Uruguay el 2 de febrero de 2008, junto al ministro de Economía Martín Lousteau, al ministro del Interior Florencio Randazzo y al Secretario de Agricultura Javier de Urquiza. Visitó la planta de faena avícola de la empresa Tres Arroyos. Estuvieron también el gobernador Urribarri, funcionarios provinciales y empresarios avícolas de la región.

El primer mandatario entrerriano recibía así un importante apoyo político a su gestión. La presidenta decía:

Se trata de algo más que un lugar donde se faena la mayor cantidad de pollos del país que comen los argentinos y que exportamos. Es algo más que valor agregado o una importantísima fábrica. Es un modelo de vida, un modelo de organización social y política que hemos recuperado los argentinos en torno al trabajo y la producción. No todos los argentinos y las argentinas tienen la posibilidad de concretar sus sueños, y yo me crié en un país con grandes enfrentamientos en el que después de una tragedia vino otra... una época en que no sólo venían los pollos de afuera, sino que los argentinos se quedaban sin trabajo, y luego aquella en que se pretendía un modelo de país apenas de servicio.<sup>37</sup>

Cristina Fernández tomaba como ejemplo a la producción entrerriana, en este caso la avícola, de la que Entre Ríos era el principal productor de pollos a nivel nacional, pero aprovechaba para acumular capital político en la clásica diferenciación discursiva kirchnerista respecto al “modelo neoliberal” que privilegiara la actividad financiera y de servicios. En la apertura de las 126<sup>o</sup> sesiones legislativas del Congreso Nacional del 1 de marzo de 2008, a las que había asistido el gobernador Urribarri, la presidenta se refirió al desarrollo de un complejo agroalimentario que agregase valor a la producción primaria y elogió a la provincia: “hace unos días estuve en Entre Ríos y pude ver cómo el valor del maíz se multiplica por 15 dentro de un pollo que se vende trozado. Ese es el modelo que tenemos que seguir, con mucha gente trabajando”<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> “El BID financiará obras por 125 millones de dólares” (24/2/2008). *El Diario de Paraná*.

<sup>37</sup> “La Presidenta elogió ayer el modelo productivo entrerriano” (3/2/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 3.

<sup>38</sup> “Urribarri: ‘Nuestras prioridades coinciden con las de la Nación’” (2/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 3.

En una entrevista a un periódico local, el secretario de la Producción Héctor Motta fijaba las metas para el sector productivo, que colocaban el eje en la generación de valor a partir de la inyección de recursos desde la banca pública y privada, lo que permitiría triplicar el PBG de Entre Ríos durante la gestión de Urribarri.

Cuando llegamos sabíamos que el doctor Busti dejaba un gobierno con el presupuesto ordenado, avalado por la continuidad del ministro de Economía. De ese orden se puede pensar en el desarrollo, y para eso había que identificar las 16 cadenas de valor, de las cuales seleccionamos las que pueden dar respuesta rápidamente. Entonces marcamos nueve: la avicultura, los porcinos –con gran potencial–; el sector vacuno; lechería; metal-mecánica; arrocero; foresto-industrial y arándanos y frutas finas. Primero debemos sensibilizar a la comunidad, a los principales actores y en una segunda etapa sensibilizar al gobierno nacional y a los bancos acerca que somos una provincia con gran potencial de desarrollo económico, pero que para eso debemos traer dinero. Ubicadas estas variables decimos que si Entre Ríos está en un Producto de alrededor de 4 mil a 4,6 mil millones de pesos anuales, con 400 millones de pesos somos capaces de agregar unas nuevas 1500 unidades de negocios, a las 30 mil Pymes que ya hay, que van a generar, por lo menos, 20 mil nuevos puestos de trabajo, y facturarán 6 mil millones de pesos... Pasaríamos a 10 mil millones. Es decir, multiplicarlo por 2,2... y así vamos a seguir desarrollando contactos para difundir que Entre Ríos es captador de recursos, pero a tasas que permitan una inversión y un recupero.<sup>39</sup>

Pero estas metas ambiciosas para una provincia predominantemente basada en la producción agropecuaria y agroindustrial se insertaban en un escenario político complejo.

A continuación se analizan las declaraciones de dirigentes agropecuarios y de funcionarios políticos a partir del relevamiento de periódicos locales, así como también de la página web de la Cámara de Diputados provincial, en el contexto previo al 10 de marzo de 2008, donde se debatía la posibilidad de un nuevo incremento de las retenciones.

El día 15 de febrero de 2008 se produjo la primera referencia a un posible incremento de las retenciones en un medio periodístico local. Haciéndose eco de rumores de medios nacionales, el periodista Danilo Lima citaba un informe del martes 12 de la Bolsa de Comercio de Rosario que planteaba que se habían ofrecido precios bastante inferiores a los negociados el lunes 11, ante rumores sobre una presunta decisión oficial de elevar las retenciones agropecuarias, desmentidas por fuentes del Palacio de Hacienda.

---

<sup>39</sup> “La Provincia debe triplicar su Producto en cuatro años” (2/3/2008). *El Diario de Paraná*, 2da Sección, p. 6.

En ese artículo periodístico se mencionaba que se elevarían las retenciones del maíz (25%) y el trigo (28%) al mismo nivel que la soja (35%), ante ello aseguraba:

La posibilidad está latente, y para quien esto escribe un nuevo incremento llegará más temprano que tarde. En un escenario de retenciones eternas, entonces, es hora de que las provincias agrícolas, que aportan miles de millones de pesos –fruto del esfuerzo de los productores- al fisco nacional, se pongan los pantalones largos y peleen por la coparticipación de ese gravamen, en primera instancia, y por una auténtica ley federal de impuestos, después. Esa es la batalla que deben dar los gobernadores, legisladores, intendentes y demás funcionarios para que la Argentina, de una buena vez, tenga un sistema tributario justo y progresista. De lo contrario, deberán seguir, como hasta ahora, con el patético desfile por los pasillos de la Casa Rosada en busca de los dineros que las provincias mansamente le entregan a la Nación y del que sólo regresan unas pocas migajas.<sup>40</sup>

Esta postura crítica hacia las retenciones se completaba con un planteo en términos duros hacia el rol de los funcionarios políticos, a quienes interpelaba a ponerse al frente de las “provincias agrícolas” y confrontar con el Estado nacional en función de lograr que los recursos que se generan se localicen en dichas provincias. Este posicionamiento era compartido por la línea política del medio periodístico local (*El Diario de Paraná*), propiedad de la familia Etchevehere, una histórica familia de tradición radical de la ciudad de Paraná (Motura, 2017), poseedora de la estancia “Las Margaritas” y dedicada a la producción agropecuaria, como también de la consignataria “Etchevehere Rural”. Uno de los hermanos Etchevehere, Luis Miguel, era en ese momento delegado de la Sociedad Rural por el distrito Entre Ríos y tuvo protagonismo en el conflicto de 2008. Tiempo después fue presidente de la SRA entre 2012 y 2017, y ministro y secretario de Agroindustria durante el gobierno nacional de Mauricio Macri entre los años 2017 y 2019.

Tras los rumores de aumento de las retenciones se produjo una reunión entre los máximos dirigentes de las entidades agrarias entrerrianas. Gonzalo Álvarez Maldonado (FEDECO), Jorge Chemes (FARER) y Alfredo De Ángeli (FAA) se reunieron en la sede de FEDECO, en Paraná, para analizar los problemas que afectaban al sector productivo. En un comunicado conjunto que emitieron las tres entidades plantearon que:

Se resolvió retomar el trabajo conjunto con fin de aunar criterios en defensa de los intereses de los productores entrerrianos, en los próximos días se realizarán acciones en cada entidad de base con el fin de determinar los temas prioritarios y los pasos a seguir.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lima, Danilo (15/2/2008) “Otra vez hay rumores de aumento en retenciones”. *El Diario de Paraná*, p. 2.

<sup>41</sup> “Fedeco, Farer y la FAA acordaron acciones conjuntas” (16/2/2008). *El Diario de Paraná*, 2da Sección Agropecuarias.

Se dio así un primer paso a la unidad de intereses, cierta “Comisión de Enlace provincial” en estado de alerta ante los rumores que venían del ámbito nacional. No aparece mencionada la Sociedad Rural Distrito Entre Ríos, pero no tardaría en incorporarse a la acción conjunta de las tres entidades, replicando el modelo de la Comisión de Enlace de las entidades agropecuarias a nivel nacional, luego del rechazo a “la 125”.

En esos días el gobernador Sergio Urribarri y el secretario de la Producción Héctor Motta se encontraban en Buenos Aires gestionando apoyo ante la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, a quien le presentaron un programa para obtener financiamiento para las ocho principales cadenas productivas de la provincia, de las dieciséis con que cuenta, con el objetivo de lograr superar los 3.500 o 4.000 millones de pesos anuales que facturan y llegar a los 10 mil millones de pesos durante la actual gestión. Dijo Urribarri: “somos una de las primeras provincias que venimos con una propuesta concreta para la obtención de financiamiento... su proyecto se compatibiliza con el desafío de nuestro gobierno de convertir a Entre Ríos en la granja de buena parte del mundo”<sup>42</sup>.

En esa reunión, el gobernador le acercó una demanda de la FAA (la iniciativa surgió después de la reunión que mantuvo FAA con el gobierno el 22/1/2008) que apuntaba a las deudas con el Banco Nación por parte de un grupo de productores entrerrianos, y le presentó una alternativa de solución tomando un caso similar de la provincia de Chaco. Dichas deudas, que no superaban los 17 millones de pesos y afectaban a 100 productores se remontaban a la crisis de 2001-2002, cuando productores no pudieron hacer frente a créditos otorgados por la entidad. Alfredo Bel, delegado titular de la FAA regional Paraná dijo que la deuda “no es significativa en términos económicos para la entidad, pero sí para los productores con dificultades... De ese grupo hay gente que puede refinanciar sus deudas y otros que pueden pagar pero no lo hacen”<sup>43</sup>.

De estos hechos se desprenden dos situaciones: una es la línea trazada por el gobierno provincial en cuanto al modelo productivo agroindustrial, tratando de expandir las producciones que implicaban la generación de valor agregado, como la producción porcina, citrícola, de la miel, entre otras. Por otro lado la capacidad de recoger las

---

<sup>42</sup> Sánchez Romero, Gustavo “El gobierno pide 400 millones para triplicar producción” (19/2/2008). *El Diario de Paraná*, p. 3.

<sup>43</sup> “La deuda de los productores “no es significativa” para el BNA” (20/2/2008). *El Diario de Paraná*.

demandas del sector agropecuario y gestionar soluciones, lo que da cuenta de una relación cordial entre gobierno provincial y productores.

El primer antecedente registrado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos sobre la problemática de las retenciones es el ingreso el día 21 de febrero de 2008 del Proyecto de Resolución No 16.530 presentado por el diputado radical de Gualeguaychú Jaime Benedetti, que fue tratado en la sesión del día 28 de febrero de 2008 por la Cámara, pero no fue aprobado sino que fue enviado a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. A través de ese proyecto de Resolución según lo establecía su artículo 1º se instaba a los legisladores nacionales para que a la brevedad propiciaran en el Congreso una reparación integral para la provincia por los derechos de exportación que gravan a la producción agropecuaria de Entre Ríos.

En la Resolución, el diputado Jaime Benedetti fundamentaba acerca de las ventajas y desventajas que se señalaban sobre las retenciones a las exportaciones y mostraba antecedentes de proyectos de diputados provinciales de años anteriores en los que se solicitaban “compensaciones extraordinarias” para Entre Ríos en virtud de los aportes que realizaba esta provincia a la Nación en ese aspecto. En los fundamentos el diputado explicaba que:

Si proyectamos el monto de las retenciones que el Estado provincial transferirá a la Nación este año la suma es asombrosa. Tomando sólo la producción de soja de la cosecha 2006/2007 que se situó en tres millones trescientas dieciséis mil setecientas noventa y dos toneladas (3.316.792 ton.) según datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, y el valor FOB actual del grano de U\$S 521, equivalentes a \$ 1.635,94, según datos proporcionados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con el actual porcentual del 35%, las retenciones crecerán a la friolera de mil ochocientos noventa y nueve millones ciento veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos (\$ 1.899.125.446)... y una recaudación impositiva de \$ 814.720.000 según datos de la Ley de Presupuesto, las retenciones equivalen hoy a un 133% más que la recaudación impositiva de la provincia. Es por lo dicho que entendemos que, sin distinción de banderías políticas, en nuestro carácter de legisladores de nuestra provincia, honrando el sistema federal de gobierno consagrado en el Art. 1 de la Constitución nacional, no debemos escapar a la obligación de exigir una reparación por el aprovechamiento de nuestros preciados recursos naturales y humanos.<sup>44</sup>

Los números mostrados por el diputado Jaime Benedetti son impactantes en lo que hace a aportes de dinero que se originaban en la provincia y tenían como destino las

---

<sup>44</sup> Cámara de Diputados de Entre Ríos, Proyecto de Resolución No 16.530 ingresado el 21 de febrero de 2008. Disponible en: <https://www.hcder.gov.ar/>

arcas de Nación. Pero consideramos que para tener una real dimensión del tema, si la intención del diputado era comparar montos que salían o ingresaban a la provincia faltaba información, por lo que este proyecto no mencionaba datos sobre la coparticipación federal de impuestos y de programas de desarrollo, sociales y de viviendas financiados con fondos nacionales y que se destinaban a Entre Ríos. Sin estos números se hacía difícil establecer una comparación eficaz. De todas maneras, la preocupación expuesta por Jaime Benedetti se realizó antes del estallido del conflicto<sup>45</sup> que ocuparía importantes espacios en los periódicos relevados en los meses siguientes, por lo cual no se lo puede catalogar como oportunista, sino como un planteo genuino desde el espacio político por él representado.

En el siguiente capítulo se analiza el comportamiento político de las entidades agropecuarias y de autoconvocados de Entre Ríos en las movilizaciones del primer mes de conflicto. Se registraron principalmente los hechos a partir de lo que aportaron medios periodísticos locales, como también de las referencias a Entre Ríos en las fuentes bibliográficas consultadas (en particular Barsky y Dávila: 2009, Comelli y otros: 2010).

---

<sup>45</sup> “Demandan una reparación por los derechos de exportación” (23/2/2008). *El Diario de Paraná*, 2da Sección *El Diario Rural*, p. 1.

## Capítulo 4

### El impacto de la Resolución No 125/08 en Entre Ríos: las movilizaciones

En este capítulo se construye una periodización del conflicto a partir de la dinámica nacional entre los meses de marzo a julio de 2008. Luego se analiza el posicionamiento de las entidades agropecuarias de Entre Ríos frente a la Resolución No 125/08 del Ministerio de Economía en el intento por imponer en todo el país las “retenciones móviles”.

Asimismo se indaga en la conformación de los productores/autoconvocados y se registran las acciones de protesta durante el mes de marzo en dicha provincia. También se registra el comportamiento de las principales fuerzas políticas provinciales, PJ y UCR, ante los hechos.

El conflicto “campo-gobierno” tuvo un carácter nacional durante todo su desarrollo, sólo que recortamos el territorio de Entre Ríos para describir los principales hechos, analizar el comportamiento de los actores locales y comprender su especificidad. Por ello, los criterios de conflicto-tregua que otros autores (Giarraca, 2010; Sartelli, 2008 y Pucciarelli, 2017) han utilizado para los abordajes cronológicos se mantienen en este trabajo. De este modo en este estudio sólo se abordará la primera etapa del conflicto, dejando las siguientes para un futuro desarrollo.

#### 4.1 Primera etapa del Conflicto (11 de marzo – 2 de abril)

Los días anteriores al 11 de marzo de 2008 fueron de relativa calma en la provincia de Entre Ríos. En una nota de un medio local se informaba sobre la suba en pocos días del precio de la papa, la lechuga y la carne, y se mencionaba que para la ciudad de Paraná una familia tipo necesitó ganar \$1195 para no caer bajo la línea de pobreza durante el mes de enero, según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, cuando en enero del año anterior fue de \$906,58 y en junio de 2007 de \$1003,62<sup>46</sup>.

Además de la preocupación por la inflación, en lo que respecta al sector agropecuario entrerriano, la FETAC decidió aplicar la actualización tarifaria de 23% “con o sin el acuerdo de los acopiadores”, luego de una serie de reuniones entre el gobierno, las entidades agrarias y ese sector. Por las restricciones a las exportaciones de carnes se mantuvo paralizada la producción y se otorgó licencia a los trabajadores en un

---

<sup>46</sup> “En sólo un año, la canasta básica de alimentos aumentó más del 30%” (6/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 9.

frigorífico de exportación, el frigorífico Alberdi de la localidad de Oro Verde, a 10 kilómetros de Paraná, llegando el reclamo a la Dirección de Trabajo. No se evidenciaron otros hechos públicos en el territorio entrerriano referentes a la situación del agro o a las entidades, que hicieran presumir un conflicto.

La llegada de la presidenta Cristina Fernández a Larroque, departamento Gualeguaychú a la inauguración del ciclo lectivo el día 10 de marzo, donde dejó inaugurada la escuela secundaria “José Virué” (parte del Programa “700 escuelas”) transcurrió en un clima de normalidad (De Ángeli con un grupo de productores de la FAA le alcanzaron un petitorio).

La Resolución No 125/08 ME, anunciada el día 10, pero publicada en el Boletín Oficial el día 11, comenzó a ser resistida ese mismo día por los productores de la zona núcleo pampeana. Mediante declaraciones, los productores entrerrianos, repudiaron enérgicamente la medida.

Las primeras repercusiones de la Resolución No 125/08 fueron unas declaraciones de firme rechazo a la medida por parte de tres dirigentes agrarios a un medio periodístico local. Para Gonzalo Álvarez Maldonado (FEDECO):

Estamos viendo la situación con bastante angustia y preocupación. Lo llamativo es que desde el sector hemos elevado propuestas concretas tanto en carne o maíz, manteniendo la oportunidad que nos dio de recuperación el mercado externo y cuidando el interno, con la comercialización y la posibilidad de mantener 12 cortes populares... Como entidad siempre decimos que somos de propuestas y no de protestas. Hemos propuesto soluciones concretas, pero no se descarta que si siguen apretando sobre el sector de la producción agropecuaria, insistiremos con la propuesta, pero junto con las otras entidades podemos llegar a convenir en un paro.<sup>47</sup>

Para Abel Sabotigh, presidente de la BOLSACER:

Se están burlando, no puede ser que un gobierno sea tan insensible e incapaz y no puede hacer semejante cosa en un mercado tan dinámico y transparente en todo lo referente a Bolsas y las cotizaciones, (otra vez) le meten la mano en el bolsillo, y apuntan a ser un socio de las ganancias del productor en un 50%”. “El productor no puede manejarse en un escenario lleno de incertidumbre. En cualquier momento se puede tomar cualquier medida y el productor queda sin resguardo, sin ningún tipo de respaldo. Estamos muy enojados, es una cosa fuera de toda lógica, es una falta de respeto al productor agropecuario.<sup>48</sup>

Para Alfredo Bel (FAA delegación Paraná):

Cuando nacieron en 2002 (las retenciones) tenían un objetivo social, pero estas medidas sólo muestran que el gobierno sostiene un superávit fiscal en el campo. Nosotros la rechazamos de plano, porque además indica a esto favorece (...) la concentración en detrimento de los

---

<sup>47</sup> Sánchez Romero, Gustavo “Malestar de dirigentes entrerrianos” (12/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 10.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

productores del interior del país... Es posible que esto acelere el tema del paro. La gente está con ánimo de un paro, tenemos que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.<sup>49</sup>

La respuesta inmediata de los dirigentes agrarios fue la de un enérgico repudio a la medida, considerándola una afrenta o agresión, “una falta de respeto” e identificaban como objetivo de la misma el carácter “fiscalista”, “recaudatorio”, a diferencia del contexto de crisis de 2002 donde tuvieron un carácter “social”. Por otro lado, se señala la “incertidumbre” que generaba a los productores lo señalado más arriba respecto al cambio de las reglas de juego, al modificar dos veces en la misma campaña agrícola las alícuotas de retenciones. Luego, es coincidente en sus declaraciones la necesidad de adoptar una metodología de protesta porque “la gente está con ánimo de paro”, refiriéndose a las bases rurales, a los productores, en un marco de unidad “junto con las otras entidades podemos llegar a convenir en un paro”.

El día 12 de marzo las cuatro entidades nacionales más representativas del agro (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) anunciaron la conformación de la MEA en forma conjunta, decidiendo un paro de 48 horas a nivel nacional contra el gobierno de Cristina Fernández, planteando que con la medida le quitarían al campo 2.400 millones de dólares<sup>50</sup>.

La descripción que hace un medio sobre las implicancias del paro agropecuario en Entre Ríos muestra que:

El paro del campo en reclamo de una desaceleración de la presión fiscal se sintió con fuerza en todo el país y Entre Ríos no fue la excepción. Salvo el remate programado en la localidad de General Ramírez... el resto de las actividades comerciales fueron de poca cuantía. Según Alfredo Bel, dirigente de FAA, el remate previsto para hoy en la cooperativa El Pronunciamiento de Basavilbaso no se realizará. El campo está movilizándose y esta convocatoria recogió adhesiones... una delegación de productores entrerrianos evaluará la continuidad de la medida con pares del conjunto de las regiones argentinas en un encuentro para hoy en Villa Constitución. Por el andarivel de las operaciones granarias los negocios se postergaron sobre suelo entrerriano.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> En el estudio sobre la participación de FAA en la MEA, Lissin (2010) se pregunta cómo entidades tan divergentes en sus intereses logran unificar sus demandas y cohesionarse en una protesta común, y plantea que éstas se han caracterizado por “cerrar filas” frente a una situación externa que impactara en el sector, así como la tendencia a presentarse en oposición a otros actores, por ejemplo, reclamos históricos sobre cómo el agro financia con sus divisas al resto de los sectores productivos o a diversos proyectos estatales, o el desentendimiento del Estado hacia las producciones agropecuarias. Estos elementos han permitido amalgamarlas y construir una imagen del “campo” como un bloque monolítico, permitiéndoles en determinadas coyunturas la realización de acciones conjuntas, como fue el caso del rechazo a la Resolución 125/08 sobre retenciones móviles.

<sup>51</sup> “Es alto el acatamiento de los productores a la huelga rural” (14/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 17.

En Entre Ríos se había seguido la medida propuesta por las cuatro principales entidades del agro de no comercializar granos ni carnes, pero no se convocaba a cortes de rutas. El día 14 se observó el corte de la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución, donde hubo un encuentro de unos 1000 productores y una manifestación en la que estuvieron algunos productores entrerrianos<sup>52</sup>. Mientras, hubo un tractorazo masivo en Córdoba ese mismo día y las entidades nacionales del agro resolvieron extender el paro hasta el día 19.

Los principales dirigentes entrerrianos de la Sociedad Rural Distrito Entre Ríos (Luis Miguel Etchevehere), de FAA (Juan Echeverría), FARER (Jorge Chemes) y FEDECO (Gonzalo Álvarez Maldonado), se reunieron el día 14 en la sede de FEDECO en Paraná y debatieron sobre el nuevo esquema de retenciones, conformando de hecho una suerte de “Mesa de Enlace Provincial”, a tono con la decisión tomada por las entidades a nivel nacional<sup>53</sup>. En la misma decidieron impulsar una movilización para el 19 de marzo en Ceibas, en las rutas 12 y 14, en la que convocaban a todos los productores sin distinción de organizaciones, en coincidencia con el último día de paro previsto, sin prever un corte pero con entrega de volantes, en un acto “exclusivo de productores de Entre Ríos”. Las entidades reunidas hicieron un pedido al gobernador Urribarri en busca de una toma de posición ante el conflicto:

Esperamos que el gobierno provincial acompañe el reclamo de los productores y analice sin compromisos políticos la tremenda transferencia de recursos de la Provincia a la Nación, sin recibir compensación ninguna además del empobrecimiento de nuestros pueblos y del desarraigo de la población rural (consignó en un comunicado la FEDECO).<sup>54</sup>

El día 15 hubo movilizaciones de productores en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta. En Pergamino, hubo una concentración en el predio de la Sociedad Rural local de 500 productores convocados por las cuatro entidades y luego de los discursos de los dirigentes, los productores cortaron por un lapso de dos horas la ruta 8 y se trasladaron en caravana de camionetas y tractores a la plaza de la Merced. En la localidad de 25 de Mayo hubo una concentración de 200 productores, que cortaron por unas horas la ruta provincial 51, con la presencia de dirigentes rurales. En Córdoba, productores se movilizaron sobre la ruta nacional 36 y obligaron a detenerse a algunos

---

<sup>52</sup> El aumento de las retenciones: presión para extender la protesta. Alto acatamiento al paro agropecuario (14/3/2008). *La Nación*. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/alto-acatamiento-al-paro-agropecuario-nid995505/>

<sup>53</sup> Esta unidad de intereses entre las cuatro entidades agropecuarias entrerrianas en rechazo a aumentos de retenciones a la soja es una expresión, en parte, de los cambios en la estructura económica y social del agro entrerriano de las últimas décadas, analizadas en el capítulo 3.

<sup>54</sup> “Productores entrerrianos se movilizan el 19 en Ceibas” (15/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 3.

camiones que transportaban cargas agropecuarias. En Salta, productores autoconvocados de Anta, Metán y Rosario de la Frontera, por lo decidido en asamblea el día 14 cortaron ayer el cruce de las rutas nacionales 34 y 16 con camionetas y tractores, a unos 120 kilómetros al sur de la capital salteña<sup>55</sup>. Hasta el momento no se registraban cortes de rutas en Entre Ríos<sup>56</sup>.

Las repercusiones políticas se evidenciaron rápidamente. El Comité Provincial de la UCR emitió un comunicado donde consideró como “sumiso” al gobierno provincial al momento de “plantear a la Nación el reclamo de fondos producidos por el campo para la realización de obras necesarias en la provincia” y criticaba duramente al gobierno nacional por el aumento de las retenciones porque “es una de las tantas arbitrariedades en que incurre en detrimento del federalismo”, y fustigaba nuevamente al gobierno provincial por la “muestra de ineficacia del partido de gobierno para defender los intereses de los entrerrianos y procurar mejorar las condiciones en salud, educación y servicios”<sup>57</sup>.

Ese mismo día 15 había ingresado a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución del diputado radical Marcelo López para promover una jornada de debate por las retenciones que se aplicaban al agro para el día 10 de abril en Villaguay, convocando al Ejecutivo, a los legisladores y a entidades del campo. En consonancia con el análisis del radicalismo entrerriano, este diputado decía:

Esta nueva disposición sobre las retenciones móviles al agro implica una nueva transferencia de recursos a la Nación, sin condicionamientos. Sólo el aumento de los volúmenes de producción actual, implicarían que Entre Ríos transfiera 500 millones de pesos más, estos recursos nos pertenecen, irán a la Nación que los manejará discrecionalmente, creemos que es necesario que el poder político, el legislativo y las entidades interesadas, realicemos una jornada de debate para ver qué posiciones tenemos que tomar, si esta aplicación nos limita, porque si es tan elevado el monto pasa a ser una expropiación, mientras la Nación decida mantener las retenciones, tenemos que instalar una lucha sobre cómo esa suma vuelve a la provincia y qué mecanismos podemos exigir al gobierno nacional para que retornen, pueden ser partidas específicas destinadas a beneficiar a la producción, o también a áreas sociales. Debemos poner el tema en el centro de la agenda política.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> “El paro del campo | Tercera jornada del plan de lucha. Más protestas y cortes de rutas” (16/03/2008). *La Nación*. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/mas-protestas-y-cortes-de-rutas-nid996127/>

<sup>56</sup> “Piquetes imprevistos en distintos puntos del país” (16/03/2008). *El Diario de Paraná*, p. 12.

<sup>57</sup> “Promueven jornada de debate por las retenciones que se aplican al agro” (16/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*.

<sup>58</sup> “Convocan a una jornada de debate sobre la política de retenciones” (16/3/1008). *El Diario de Paraná*, p. 3.

Tenemos así, por un lado, el reclamo de las entidades agropecuarias entrerrianas al gobierno provincial, enmarcando al conflicto como un perjuicio ocasionado por la política agropecuaria del gobierno nacional hacia los productores entrerrianos, y específicamente al territorio entrerriano por la “transferencia de recursos a Nación”, el “empobrecimiento de nuestros pueblos” y el “desarraigo rural”, solicitando que el gobierno provincial se posicione en favor suyo acompañando el reclamo. Para el principal partido político de oposición provincial, la UCR, que acompañaba el reclamo ruralista, éste se expresaba en clave política, dado que tanto el gobierno nacional como el provincial eran de signo peronista, aunque también era interpretado en clave territorial, dirigiendo una crítica al gobierno nacional y poniendo en duda el destino que éste le daba a los recursos de las retenciones. A su vez, la crítica al gobierno provincial era “por no defender los intereses provinciales”.

En una solicitada del Comité Provincial de la UCR aparecida en un periódico local el 19 de marzo, pero elaborada en función del Plenario realizado el día 15 el partido planteaba:

Lamentablemente cuando no hay una política agropecuaria, no se está en condiciones de dar las respuestas que las circunstancias exigen, y esto se agrava cuando el origen del gobierno nacional es justicialista, que por otra parte no puede disimular su desprecio histórico por los productores rurales... Desde el Comité de la UCR se insta al Gobierno Provincial a que se plante y exija al Gobierno Nacional el respeto por el Federalismo, y esencialmente que se coparticipe a la Provincia.<sup>59</sup>

Aquí los dirigentes radicales sumaban un elemento, el “desprecio histórico” del justicialismo hacia el sector agropecuario, sin especificar a qué hechos históricos concretos hacían referencia.

#### **4.2 Las primeras acciones de protesta**

En el cuadro 9 se puede observar la extensión nacional del conflicto, ya que en quince provincias hubo piquetes desde el inicio, aunque su concentración se dio en las provincias que componen la región pampeana. Entre Ríos mantuvo un total de 13 cortes, todos totales, es decir con obstrucción del tránsito durante varias horas en algunos días durante el mes de marzo. Fue quinto en cuanto a cantidad de piquetes en el mes de marzo (detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa), pero cuarto en relación a que los 13 piquetes se constituyeron como cortes totales, detrás de las tres

---

<sup>59</sup> “Solicitada: El Radicalismo de Entre Ríos repudia el nuevo impuestazo del gobierno nacional” (19/3/2008) *El Diario de Paraná*.

primeras provincias ya mencionadas. Mientras que la provincia fue cuarta en cantidad de piquetes entre abril y junio con 46 cortes de rutas, detrás de Santa Fe (133), Buenos Aires (118) y Córdoba (88).

Cuadro 9: Piquetes y cortes totales por provincia.

	<b>mar-08</b>		<b>abril-junio 08</b>
<b>Provincia</b>	<b>Piquetes</b>	<b>Cortes totales</b>	<b>Piquetes</b>
<b>Buenos Aires</b>	101	18	118
<b>Santa Fe</b>	64	33	133
<b>Córdoba</b>	38	14	88
<b>Entre Ríos</b>	13	13	46
<b>Chaco</b>	10	1	5
<b>La Pampa</b>	21	5	15
<b>Sgo del Estero</b>	9	3	8
<b>Salta</b>	7	0	8
<b>Corrientes</b>	8	1	6
<b>Tucumán</b>	5	9	10
<b>Río Negro</b>	2	0	1
<b>Mendoza</b>	5	1	5
<b>San Luis</b>	2	1	6
<b>Jujuy</b>	1	1	2
<b>Formosa</b>	2	2	2
<b>Neuquén</b>			2
<b>San Juan</b>			1
<b>Catamarca</b>			2
<b>Total</b>	288	102	458

Fuente: Sartelli (2008).

Los dirigentes de las entidades agrarias se encontraban abocados al paro agropecuario y a la organización del acto en Ceibas para el 19 de marzo. Las entidades agropecuarias nacionales, con una crisis de representatividad hacia el sector, reformulación de estilos de liderazgo y caída en los niveles de afiliación (Lattuada, 2006), no estuvieron en condiciones organizativas para formular y conducir un plan nacional de cortes de rutas en varias provincias con activa participación de miles de productores, por lo que las acciones de productores/autoconvocados tomaron por sorpresa a los propios dirigentes rurales. Al respecto, afirma Hora (2010):

Más que obra de la dirigencia sectorial (que, haya o no visto disminuida su capacidad de liderazgo en las décadas previas, carecía de los recursos organizativos necesarios para poner en marcha una protesta de esta envergadura), la expansión de los piquetes dependió de la

movilización de activistas independientes pronto bautizados con el nombre de “productores autoconvocados”. Gracias a la acción del heterogéneo conjunto de manifestantes que se reconocían en este nombre, la movilización agraria desbordó el reducido universo encuadrado por la dirigencia gremial, y encontró apoyos considerables en los pueblos y ciudades de la región sojera. La difusión masiva de la telefonía inalámbrica –una novedad de la década previa–, por su parte, facilitó las tareas de organización y coordinación de estos recién llegados al mundo de la protesta, sobre todo allí donde las estructuras organizativas del ruralismo eran débiles o inexistentes (p. 87).

Salvo el ya mencionado corte de ruta en Pergamino, apoyado por dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias nacionales integradas en la MEA, se estaban produciendo movilizaciones “espontáneas” de productores que se autoconvocaban a las rutas. Las corporaciones agropecuarias entrerrianas, con escaso poder de organización y movilización, también se vieron sorprendidas con los cuatro primeros cortes en las rutas entrerrianas: el del arroyo Salto en Aldea Brasilera, departamento Diamante, en el cruce de las rutas 39 y 20 en Basavilbaso, departamento Concepción del Uruguay, en la ruta 127 a la altura de la localidad de El Pingo y en la rotonda de acceso a Crespo (ver cuadro 10).

Cuadro 10: Acciones ruralistas en el mes de marzo 2008 en Entre Ríos

<b>Día</b>	<b>Cortes de ruta/asambleas</b>	<b>Movilizaciones en general</b>	<b>Movilizaciones a instit. Políticas/dirigentes</b>
17	Corte en ruta 11, puente del arroyo Salto a la altura de Aldea Brasilera, que se trasladó al puente sobre el arroyo La Ensenada (acceso a Diamante). Corte en el cruce de las rutas 39 y 20, al oeste de Basavilbaso (alrededor de 100 productores). Corte en la ruta 127 a la altura de la localidad de El Pingo Corte en la rotonda de acceso a Crespo.		
18	Cortes en Ceibas, el Túnel subfluvial y el puente Victoria-Rosario cierran los accesos a la provincia. Cortes en La Ensenada, Strobel, Aldea Brasilera,		

	Crespo, Cerrito, Alcaraz, Basavilbaso, Tabossi, Viale, Urdinarraín, Villaguay, Gualeguay. Asambleas en: Concordia y Federal.		
19	Cortes en el Túnel subfluvial (más de 200 productores), en Ceibas sobre las rutas 12 y 14 (casi 2000 personas), en ruta 11 sobre el acceso al puente Victoria-Rosario, en Federal sobre ruta 127.		
20	3 cortes permanentes en: Ceibas, el Túnel y Victoria. Cortes en otros 10 puntos de la provincia: en La Ensenada, en Strobel sobre ruta 11, en proximidades a Libertador Gral. San Martín y Seguí, en la ruta 12 en San Benito, en Sauce Pinto, en María Luisa, en Crespo, cerca de Viale, en ruta 32 en el acceso a San Cristóbal y en Basavilbaso.		
21	Cortes en Ceibas (2000 productores), el Túnel y Victoria.		
22	Cortes en Túnel, Ceibas y Victoria.		
23	Cortes en Túnel, Ceibas y Victoria.		
24	Cortes en Túnel (hubo presencia de 400 gendarmes), Ceibas (contrapiquete de camioneros 40 km antes del de ruralistas), Victoria y Gualeguay.		
25	Corte del Túnel (1000 personas). Corte en Ceibas con contrapiquete de camioneros. Corte en Victoria.	Cacerolazos en Lucas González y Gualeguay. Caravana de autos recorrió la ciudad de Diamante. Congregación en Villa Elisa (entre 500 y	Protesta frente a la casa del intendente Juan Carlos Darrichón (PJ) de Diamante.

		600 personas), en Tabossi, Crespo y otras localidades.	
26	Cortes en Túnel, Ceibas y Victoria. Corte de la Fetac en la ruta 127 en Federal. Corte en ruta 26 que la une con Nogoyá, en C. del Uruguay sobre ruta 14, en Chajarí, en Crespo, en Lucas González y en Rosario del Tala.	Acto sobre la banquina de la ruta 14 en Ceibas. Cacerolazo en Concordia. Congregación de personas en la plaza de Victoria.	Movilización a Casa de Gobierno provincial en Paraná (6000 personas según Diario Uno, más de 10000 según El Diario).
27	Cortes en Túnel, Ceibas y Victoria.	Caravana de varias decenas de vehículos recorrió la ciudad de Diamante, con el apoyo del Sindicato de Camioneros de esa ciudad, se detuvo frente a la casa del intendente Juan Carlos Darrichón.	
28	Cortes en Túnel, Ceibas, Victoria y Gualeguay.		
29	Cortes en Túnel, Ceibas y Victoria.		
30	Cortes en Túnel (por cuatro horas), Ceibas y Victoria. Más otros 10 cortes (según Policía de Entre Ríos): Crespo, Diamante, Nogoyá, Victoria (2), Gualeguay, Villaguay, Concordia, Federal, Federación.	Convocatoria a mateada en el corte del Túnel (15000 personas). Congregación en la ciudad de La Paz de cientos de personas que se manifestaron por las calles (presencia de la Sociedad Rural de La Paz y Cooperativas Agropecuarias Federadas de E.R. (CAFER).	
31	Cortes en Túnel, Ceibas y Victoria.		Caravana de un centenar de camiones Transportistas federados (Fetac) y autoconvocados partió de Viale y se concentró frente a Casa de Gobierno, entregaron petitorio al vicegobernador, luego marchó al corte de ruta del Túnel para manifestar apoyo al sector agropecuario.

Fuente: elaboración propia en base a *El Diario de Paraná* y *Diario Uno de Entre Ríos*.

Los primeros piquetes en Entre Ríos ocurrieron el lunes 17, cuando un numeroso grupo de productores del departamento Diamante, de comunidades alemanas aledañas, cortó el tránsito por la ruta 11 y se instaló en el puente sobre el arroyo Salto, cerca de la entrada a Aldea Brasileira. Fueron con pancartas y algunos tractores. Pretendían que el gobierno provincial respaldase su pedido. El ministro de gobierno Adán Bahl llegó hasta el lugar para pedir que se levantara el piquete y los manifestantes muy ofuscados exigieron a los funcionarios provinciales que se expidan acerca de su postura: “están con nosotros o contra nosotros”. Adán Bahl acordó que los productores se reunirían al día siguiente a las 8 con el secretario de la Producción Héctor Motta y con legisladores nacionales y provinciales. En horas de la tarde se mudaron al arroyo La Ensenada, en donde permanecieron hasta la noche, porque a diferencia de Aldea Brasileira no había alternativas de paso.

En ese piquete anunciaron que para el día siguiente tenían previsto concentrarse a las 9 en el túnel Uranga-Sylvestre Begnis y también en la zona del enlace vial que une Victoria con Rosario. Alfredo Bel de FAA aclaró que los manifestantes son “productores autoconvocados” que realizan esas acciones en el marco del paro nacional agropecuario y dijo:

Demandamos que el gobierno entrerriano se manifieste en contra de este saqueo que está realizando el gobierno nacional con las retenciones, con la política fiscal y sobre todo con la concentración de los recursos en el gobierno central, el pedido concreto es retrotraer las retenciones al período anterior, y además la discusión de un plan integral para el sector agropecuario, le metieron la mano en el bolsillo varias veces al productor, y hoy, cuando ya está jugada toda la cosecha, el gobierno nacional da una nueva vuelta de tuerca y se va a quedar con la mitad de la producción bruta solamente en retenciones.<sup>60</sup>

Por otro lado, el ministro de gobierno Adán Bahl aclaró que la política de retenciones escapaba al gobierno provincial y que siempre acompañaron a los productores mediante financiamiento, subsidios o abriendo mercados. El gobernador Sergio Urribarri se encontraba por esos días en España teniendo reuniones, visitando exposiciones, intentado lograr inversiones y buscando colocar producción entrerriana en nuevos mercados; se pronunció a favor del diálogo permanente y recordó el encuentro que días atrás mantuvo con las entidades, “un sector que ha tenido oportunidad de

---

<sup>60</sup> “Productores agropecuarios exigen definiciones al gobierno provincial” (18/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 3.

dialogar con el gobierno y la va a seguir teniendo” y que “el corte es una medida equivocada (en tanto) no es solución a nada”<sup>61</sup>.

Las crónicas periodísticas afirman que también ese día 17 se produjeron cortes de productores en la ruta 127 a la altura de la localidad de El Pingo y en la rotonda de acceso a Crespo. También ese día en la provincia, más de un centenar de pequeños productores agropecuarios bloquearon el cruce de las rutas 39 y 20, al oeste de Basavilbaso. En el corte se presentó Alfredo De Ángeli, quien señaló al gobierno de Cristina Kirchner como

Único responsable de lo que está pasando, se burlaron de nosotros y ahora el gobierno de Cristina va a pagar las consecuencias. Vino a Larroque, no dijo nada, y resulta que tenía todo listo y preparado... acá nadie lleva la cara tapada y nadie está pago. Vienen en defensa de sus propias condiciones y en defensa del productor agropecuario.<sup>62</sup>

Estos cortes “sorpresivos” para la ciudadanía, medios de comunicación, funcionarios políticos e “incluso para dirigentes del sector” como lo señala la crónica periodística, expresa la aparición de un actor novedoso: los productores autoconvocados, quienes organizaron estos piquetes empujando a los dirigentes del sector a “ponerse al frente”. Esta situación iba en consonancia con otras decenas de cortes de ruta que se estaban produciendo ese día en algunas partes del país. La paradójica figura de Alfredo De Ángeli como representante de FAA y de los autoconvocados expresa estos límites difusos, poco claros, entre organización gremial y autorrepresentación, quien se ocupaba en reforzar las diferencias entre “piqueteros” de organizaciones políticas y sociales “con la cara tapada y pagos”, con respecto a estos “genuinos” productores que cortaban las rutas y que tal vez no pertenecían a ninguna organización, incluso rural.

El día 18 hubo protestas en una decena de localidades (cortes en: Ceibas, Victoria, el Túnel, Strobel, Aldea Brasileira, Crespo, Cerrito, Alcaraz, Basavilbaso, Tabossi, Viale; asambleas en Concordia y Federal) contra la política fiscal nacional. De todos estos cortes, los de Ceibas (que después se trasladaría al km 53 de la ruta 14 en el acceso a Gualeguaychú), el acceso al puente Victoria-Rosario y el Túnel Paraná-Santa Fe cortaban los principales accesos a la provincia (y se convertirían a lo largo del conflicto en las principales asambleas de productores).

En el corte de La Ensenada estuvo el secretario de la Producción Héctor Motta, acompañado de otros funcionarios -quienes fueron abucheados-, se solidarizó con los

---

<sup>61</sup> “Crece la protesta del campo” (18/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 1.

<sup>62</sup> “Chacareros bloquearon el cruce de las rutas 39 y 20” (18/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 4.

productores diciendo que “a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo”, pidió que liberen las rutas y ofreció su renuncia si la pedía el gobernador. Algunos manifestantes acusaron al funcionario de ser “uno de los principales beneficiados” por la política económica del gobierno, ya que en su rol de empresario industrial avícola tendría “grano barato para alimentar sus pollos”. Mientras, en el corte del Túnel, Juan Echeverría (vicepresidente de Entre Ríos de la FAA y quien se convertiría en el principal referente y líder de ese corte durante todo el conflicto) dijo respecto a la movilización que se realizaría en Ceibas: “las medidas de mañana (por hoy) las planteamos a matar o morir. Van a ser contundentes, fuertes y probablemente prolongadas hasta que el gobierno retrotraiga la situación hasta antes del aumento a las retenciones”<sup>63</sup>.

Si bien en esa semana hubo declaraciones de funcionarios nacionales que descalificaron las acciones de protesta y no hubo ninguna convocatoria al diálogo por parte del gobierno nacional, los productores movilizados no sabían cuán prolongado podría llegar a ser el conflicto, pero lo que sí se desprende de sus acciones y declaraciones es la férrea postura de rechazar las retenciones móviles. La frase “a matar o morir” significaba ir hasta las últimas consecuencias para que el gobierno retrotrajera las retenciones al 10 de marzo.

El 19 fue el día de las protestas rurales más importantes en Entre Ríos en los últimos años, recibiendo atención por parte de los medios de comunicación nacionales. Las crónicas relatan que muchos de los protagonistas no pertenecían a entidad gremial o partido político alguno. Los tres cortes más importantes de la provincia, casi totales, mantuvieron por varias horas aislada a la provincia.

En Ceibas, en el piquete sobre las rutas 12 y 14 se movilizaron casi 2000 personas en uno de los principales accesos, impidieron el paso de camiones y vehículos, excepto ambulancias o autos que transportaban personas con problemas de salud. Participaron delegaciones de localidades como Gualaguay, Villaguay, Tala, Urdinarrain, Basavilbaso, Concepción del Uruguay y Gualaguaychú, entre otras. También en Victoria, sobre la ruta 11, los manifestantes inhabilitaron el acceso y el egreso al puente con Rosario. En el corte de Ceibas llegó a formarse una fila de vehículos de 35 km hacia el lado de Concordia y de 28 km hacia Bs. As., lo que generó molestias a automovilistas

---

<sup>63</sup> “Los productores advierten que los cortes son ‘a matar o morir’” (19/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 3.

y transportistas perjudicados por la modalidad de la medida. Un medio periodístico entrerriano relataba que:

Gendarmería frenó a los autos que venían desde Bs. As. En el acceso a Paranacito a unos 10 km del corte, hombres y mujeres reclamaban la acción de la fuerza para desalojar a los manifestantes, se reclamaba la intervención de la Justicia y se recriminaba la inacción ante la situación, algunos decidieron avanzar hasta llegar al corte. Una vez en el lugar del piquete, los viajeros intentaban pasar y reclamaban al ver que sobre las banquetas los manifestantes compartían asados al tiempo que ellos esperaban con sus familias.<sup>64</sup>

En el corte de Ceibas, el momento de mayor tensión fue al promediar la tarde cuando los productores difundieron la noticia de que el jefe de Gabinete Alberto Fernández había dicho que “si se quiere llevar adelante esta pelea, pues entonces llevaremos adelante esta pelea”. Estuvieron allí los máximos dirigentes de las entidades rurales (y algunos dirigentes políticos entrerrianos como Gustavo Cusinato de UCR y Esteban Vitor de Recrear<sup>65</sup>) y pronunciaron discursos. No hay registro periodístico de los discursos de Alfredo De Ángeli ni de Jorge Chemes, pero sí de los dirigentes de FEDECO y SRA:

(Edelmiro) Oertlin (de FEDECO) instó a mantener la “unidad” de los pequeños y medianos productores ante el “avasallamiento” del Gobierno nacional y los exhortó a “mantener” la lucha, mientras que (Luis M.) Etchevehere, director por Entre Ríos de la SRA, destacó el hecho “histórico” de que las cuatro entidades estén unidas (y) consideró “nefastas” las medidas del gobierno, tan malas que “tienen la virtud de perjudicar a todo el espectro (de) productores”. La gente, según el ruralista “se está dando cuenta de que el gobierno no quiere dialogar con el campo y sólo quiere quitarle los recursos”... e instó a los productores “a no dejarse doblegar” y calificó la política hacia el sector como “lo peor que le han hecho al campo en cien años”<sup>66</sup>.

Mientras que en Paraná más de 200 productores cortaron el túnel subfluvial durante nueve horas de forma total, lo que obligó a que muchas personas se desplacen cruzando a pie a Santa Fe, una situación inédita. Los manifestantes eran de los departamentos Paraná, La Paz, Feliciano, Nogoyá y Diamante, junto a dirigentes de las organizaciones rurales, fueron custodiados por 250 efectivos dispuestos por Gendarmería Nacional, pero se desarrolló en un clima de tranquilidad.

---

<sup>64</sup> “Máxima tensión y caos en Ceibas, en el piquete sobre las rutas 12 y 14” (20/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 6.

<sup>65</sup> Recrear para el Crecimiento fue un partido político conformado en 2002 por miembros del sector de centroderecha de la Unión Cívica Radical, encabezados por Ricardo López Murphy, quien en 2008 perdió la interna frente a Esteban Bullrich, perteneciente al macrismo. Finalmente en 2009 se disolvió dicho partido, siendo absorbido por el PRO.

<sup>66</sup> Pautaso, Marcela y Lima, Danilo. “Fue masiva la movilización del campo en Entre Ríos” (20/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 4.

Señala la crónica periodística que “por tratarse de una movilización espontánea, se sucedían las lógicas disputas entre el grupo acerca de las acciones a seguir y sobre la necesidad de elegir delegados que los representen”<sup>67</sup>. Un medio de comunicación local entrevistó a productores y dirigentes, quienes justificaron la medida de protesta, con los argumentos que estuvimos analizando anteriormente: la agresión hacia el productor pequeño, la política agropecuaria nacional que genera consecuencias como la desaparición de los productores y, a la vez, de la vida económica de los pueblos del interior, el centralismo en la obtención y utilización de los recursos y el rol que para los productores debería asumir el gobernador.

El gerente de la Cooperativa de Aranguren, Alberto Frangi, dijo:

Al productor ya no se le puede sacar más plata, (pero esta vez) fue la máxima, al gobierno se le fue la mano del todo, (el productor) es tranquilo, paciente, pero esto que se le ha hecho es una barbaridad, la medida es totalmente justificable y hay que seguirla hasta las últimas consecuencias, para una localidad pequeña como Aranguren de continuar esta política significará la desaparición del pueblo, si nos matan la producción agropecuaria, los pueblos chicos desaparecerán porque se acaba todo: las cooperativas, el acopio, el panadero... todo. Esto lo sabe perfectamente la gente de los pueblos chicos, por eso nos acompañan, no sé si en las grandes ciudades entienden cuál es la magnitud del problema.<sup>68</sup>

Mientras que para Juan Echeverría (FAA) el aumento de retenciones significó: “concentrar la riqueza unitariamente en el gobierno central” para disciplinar a los gobernadores y los intendentes, poniendo en cuestionamiento que sirviesen para la redistribución de la riqueza. Criticó al gobernador Sergio Urribarri por su apoyo a las medidas porque:

Le quitan autonomía a él como gobernador para decidir, a través del pueblo entrerriano, en qué gastamos nuestros recursos, sin tener que rendirle pleitesías a la presidenta Kirchner (que) estuvo en Larroque para inaugurar una escuela que costó 3 millones de pesos, cuando Entre Ríos con este último aumento de retenciones le transfiere a la Nación 300 millones de dólares que no son coparticipables. Con esa plata, Entre Ríos podría resolver los problemas en educación, salud, caminos, seguridad, y evitar que los pueblos del interior desaparezcan... ¿Para qué, entonces, votamos a un gobernador? ¿Para que administre los recursos de los entrerrianos o para que se le regale al Gobierno central?<sup>69</sup>

El carácter “espontáneo” de las movilizaciones estuvo dado por el gran número de productores no afiliados a las entidades rurales, o con escasa o nula participación en

---

<sup>67</sup> Girard, Valeria. “Más de 200 productores cortaron el túnel subfluvial durante nueve horas” (20/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 4.

<sup>68</sup> Leguizamón, Ricardo “Fuentes cuestionamientos a la política económica oficial” (20/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 5.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

organizaciones sociales o políticas. Pero los manifestantes eran convocados a través de cadenas de mails y por mensajes de texto de celular, lo que evidencia un grado de organización importante y matiza la condición de espontaneidad.

Tanto la MEA nacional como las entidades del agro entrerriano se beneficiaban con la mayor presencia de productores en las asambleas de las rutas, ya que le daba mayor legitimidad al reclamo, pero se convertía en un problema complejo en los momentos durante el conflicto en que los autoconvocados, aquellos que no respondían a ninguna entidad rural no acataban las decisiones de la MEA o radicalizaban la postura pretendiendo que ésta adoptase alguna de las medidas tomadas en asamblea.

Frente al problema de “las lógicas disputas” y la elección de “delegados que los representen”, los dirigentes de entidades “se vieron obligados a ponerse al frente” (según expresó Alfredo De Ángeli) y liderar el reclamo, como los casos de Juan Echeverría y Alfredo Bel (FAA), y en otros casos surgieron nuevos liderazgos, como el caso del autoconvocado Julián Girard, un productor autoconvocado de Cerrito. Respecto del tema de los autoconvocados se les originó un problema a los históricos dirigentes rurales, como el propio De Ángeli reconoció sobre los cortes de ruta que se estaban realizando en la provincia:

Tuve que poner paños fríos porque nos estábamos peleando entre nosotros, ya se había anarquizado. Hay gente que no pertenece a ningún gremio, si están en algún gremio se puede hablar, de lo contrario no, porque hay gente que no reconoce a los gremialistas y tenemos que estar al frente nosotros.<sup>70</sup>

Para los días siguientes la MEA dispuso continuar con el paro agropecuario nacional volviendo a las rutas el día 24, sólo dejando guardias mínimas, en virtud de la Semana Santa. Igual resolución tomaron los dirigentes rurales en Ceibas. No se descartaba que productores autoconvocados, independientemente de esto, decidiesen efectuar cortes.

El día 20 hubo piquetes “espontáneos” que bloquearon las rutas en diez puntos de la provincia: en La Ensenada, en Strobel sobre ruta 11, en proximidades a Libertador General San Martín y Seguí, en la ruta 12 en San Benito, Sauce Pinto, María Luisa y Crespo, otra cerca de Viale, en ruta 32 en el acceso a San Cristóbal, y en Basavilbaso. Los manifestantes decían no pertenecer a entidades rurales.

---

<sup>70</sup> “La mediación de la Iglesia no pudo frenar la protesta” (23/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 4.

Productores de la zona de Basavilbaso protestaron en las rutas 39 y 20, unas 50 personas se mantuvieron luego de ir rotando y estuvo De Ángeli en el cierre a las 19 horas. Allí, la crónica periodística remarcaba que:

Además de escucharse fuertes críticas al gobierno nacional se apreciaba un alto grado de disconformidad para con la dirigencia del sector agropecuario, no descartándose que de la movida surja un nuevo nucleamiento de origen gremial que pueda defender a los productores ante situaciones parecidas a las que les toca afrontar, y algunos manifestantes planteaban que “desde el gobierno pretenden que nos enfrentemos con la gente que vive en la ciudad”, “la gente de la zona nos conoce, no tenemos la cara tapada y no portamos palo. No somos los piqueteros que fogonea el gobierno, somos gente de trabajo que observamos que con las medidas que se aplican nos expulsan del sistema y muchos pasaremos a formar parte de las colas donde se requiere ayuda social, esto es lo que se tiene que entender.”<sup>71</sup>

Con reminiscencias de finales de los '90 y la crisis de 2001-2002, contextos sociales en los que surgieron movimientos sociales de desocupados y tuvo mucha fuerza la idea de política asociada a corrupción y clientelismo y el “que se vayan todos”, a lo largo del conflicto fue característica la diferenciación para los ruralistas movilizados entre un nosotros: “somos gente de trabajo”, “la gente de la zona nos conoce”, “no tenemos la cara tapada y no portamos palo”, que servía para distanciarse de los otros, “los piqueteros que fogonea el gobierno”.

### **4.3 Enfrentamientos en las rutas y nueva estrategia de la MEA en el conflicto**

El día 23 de marzo unos 500 integrantes del gremio de camioneros se movilizaron a Ceibas para impedir el corte de las rutas 12 y 14. Esta situación tuvo gran repercusión nacional. La FAA, en un comunicado, responsabilizó a la presidenta y al gobernador por eventuales hechos de violencia. Alfredo De Ángeli calificó a Hugo Moyano, el secretario de la CGT y líder de Camioneros como “el López Rega del kirchnerismo”, la “fuerza de choque del gobierno nacional”, y dijo: “nosotros seguimos firmes en nuestra posición... vamos a estar en las rutas pese a los 500 monos de Moyano. Si ellos nos vienen a buscar nos van a encontrar. En Entre Ríos van a encontrar la horma del zapato”<sup>72</sup>.

El día 24 de marzo hubo incidentes en el Túnel cuando los productores y dirigentes rurales intentaron ocupar la calzada para impedir el paso de camiones cargados con granos, hacienda, productos lácteos y alimentos. Allí estaba la presencia

---

<sup>71</sup> Bianchi, Pablo “Productores de la zona de Basavilbaso protestaron en las rutas 39 y 20” (21/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 4.

<sup>72</sup> “Ceibas: crece la tensión por la presencia de 500 camioneros” (24/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 1.

de 400 gendarmes, quienes, según calificaron los medios periodísticos locales, reprimieron a los manifestantes y hubo dos personas hospitalizadas. Luego, a partir de una negociación se acordó que sólo se dejaría pasar a autos, ómnibus y camiones con carga general. Juan Echeverría (FAA) dijo:

En el día de la Memoria, los grandes progres k, que siguen aplicando el mismo programa de Martínez de Hoz reprimen a los productores. Quieren hacer desaparecer no sólo a los productores -como ha pasado en décadas anteriores- sino también a los acopiadores, a los proveedores de insumos y a los pueblos del interior... los agrarios nos quedamos en las rutas hasta que el gobierno dé marcha atrás con el último aumento de retenciones.<sup>73</sup>

El 25 de marzo hubo un discurso de la presidenta Cristina Fernández en un acto en Casa de Gobierno, acompañada de Urribarri. Luego de conocerse la resolución de la Mesa de Enlace de continuar con el paro agropecuario, calificó a los cortes de ruta ruralistas como “los piquetes de la abundancia”, comparando con “los piquetes de la miseria” de 2001 realizados por parte de la sociedad que “no tenía trabajo ni casa”, y señaló que aquéllos son “mucho más violentos” porque “amenazan no sólo al gobierno, sino a la sociedad toda con el desabastecimiento”<sup>74</sup>. Luego del discurso hubo cacerolazos en barrios de la zona norte porteña y se movilizaron hacia la plaza de Mayo en repudio a los dichos de la presidenta, luego hubo incidentes cuando Luis D’Elía, acompañado de militantes, avanzaron hacia la misma para ocupar ese espacio.

En Entre Ríos, el discurso de la presidenta tuvo enorme repercusión. Hubo cacerolazos en Lucas González, en Gualeguay sólo participaron mujeres porque los hombres estaban en la ruta, en Diamante una caravana de autos recorrió la ciudad y protestó con bocinazos frente a la casa del intendente Juan Carlos Darrichón (PJ), en Villa Elisa participaron entre 500 y 600 personas espontáneamente luego de escuchar el discurso (entre ellas autoridades municipales), hubo movilizaciones en Tabossi, Crespo y otras localidades más<sup>75</sup>.

En el Túnel se congregaron alrededor de 1000 personas. Escucharon por altoparlante la transmisión radial y abuchearon numerosos pasajes del discurso, decidieron seguir el paro por tiempo indeterminado, no dejar pasar ningún camión y concentrar al día siguiente a las 18 para una marcha a Casa de Gobierno provincial. Echeverría (FAA) planteó:

---

<sup>73</sup> “Pese a la represión, el campo sigue firme con su protesta” (25/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 4

<sup>74</sup> “La presidenta fustigó ‘los piquetes de la abundancia’” (26/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 3

<sup>75</sup> “Cacerolazos en Entre Ríos” (26/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 8.

“en este momento estoy, como debemos estar todos, con una bronca que hay que frenarse para no salir a quemar la Argentina... el emblema de la concentración de la economía en Argentina son los Kirchner... esta atorranta habla de redistribución, de derechos humanos”<sup>76</sup>.

Comenzaba así una nueva estrategia en este conflicto económico y político, en el que los ruralistas movilizados, en consonancia con la MEA, buscaban apoyos políticos en los sectores urbanos. Por ello al día siguiente, 26 de marzo, se concretó la movilización a Casa de Gobierno provincial. Según un medio periodístico, productores que respondían a entidades del campo, autoconvocados, miembros de organizaciones sociales y gremiales, dirigentes del radicalismo, centros de estudiantes y vecinos con sus cacerolas participaron del acto que dio fin a la marcha iniciada a las 18 en el túnel subfluvial. Según uno de los medios (*Diario Uno de Entre Ríos*) basado en fuentes policiales, hubo 6.000 personas, mientras que otro medio (*El Diario de Paraná*) tituló que hubo más de 10.000 personas<sup>77</sup>. La marcha comenzó en el túnel encabezada por tractores embanderados. Alfredo Bel (FAA) lanzaba consignas de las pancartas desde el móvil de sonido, coreaban cánticos contra Cristina Fernández (la “soberbia de la presidenta”), hubo mujeres de todas las edades y de diferentes condiciones sociales. Los manifestantes “ubicaron tractores a centímetros de la puerta de casa de gobierno, hombres y mujeres exaltados manifestaron su apoyo a las protestas de los agropecuarios e incluso pidieron la renuncia de la presidenta Kirchner”. Estaban sorprendidos por el apoyo de la gente de la ciudad: “no encontramos a nadie que nos manifieste algo en contra”. Acompañaron militantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), identificados con chalecos rojos (se refería a la Agrupación Rojo y Negro que conducía la seccional Paraná de AGMER) y se observó a ex funcionarios de la administración de Sergio Montiel.

Al cerrar el acto, Juan Echeverría (FAA) aseguró que con la masividad de la movilización, el reclamo de las retenciones había pasado “a un segundo plano” y que ahora era “la pelea de los pueblos del interior contra el unicato de la billetera presidencial”.<sup>78</sup> El dirigente de FAA dijo:

Miente esta nueva oligarquía argentina representada por los Kirchner que concentran la riqueza en los Grobocopatel, en los fideicomisos que extraen la riqueza de nuestras tierras pero que no la producen como nosotros para cuidarla para las generaciones futuras... queremos un gobernador

---

<sup>76</sup> “Más de 1000 personas manifestaban su bronca “a medianoche en el Túnel” (26/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 4

<sup>77</sup> “La bronca del campo se hizo fuerte en Casa de Gobierno” (27/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 1.

<sup>78</sup> “Los tractores llegaron hasta la puerta de la Casa de Gobierno” (27/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 3.

que recupere la coparticipación de nuestros recursos... No puede ser que usted aplauda a rabiari a la que nos roba nuestros recursos, la que le roba los sueldos dignos a los docentes y los trabajadores, la que nos priva de salud, de seguridad, de caminos, la que entrega nuestro patrimonio pagando deuda externa... No sé si hay helipuerto acá arriba, pero que se acuerden Cristina y el Pato (por Sergio Urribarri) que en 2001 en una pueblada como ésta alguien tuvo que salir en helicóptero... El “que se vayan, que se vayan” aprobó sus palabras.<sup>79</sup>

Luego, cinco productores fueron recibidos por el vicegobernador Eduardo Lauritto y por el ministro de gobierno Adán Bahl, quienes escucharon planteos mientras el gobernador continuaba en Buenos Aires.

Hemos puntualizado que el conflicto tuvo un eje en torno a un reclamo corporativo, sectorial, con amplio apoyo social y que estuvo lejos de pretender un desplazamiento de las autoridades. Pero en este caso se observa que la movilización de los ruralistas tuvo un apoyo social importante que legitimaba su reclamo, a la vez que se incorporaban reclamos hacia la figura de la presidenta, a la que un grupo solicitaba la renuncia, hecho que el propio dirigente rural Echeverría estimulaba al hacer referencia en su discurso al 2001 y a la salida en helicóptero del presidente De la Rúa. Este tipo de hechos alimentaba la idea de “golpismo” que parte del oficialismo apuntaba cuando los cacerolazos del día 25 habían congregado a actores vinculados a la última dictadura militar o de reconocida militancia contra la política de derechos humanos del gobierno.

El gobernador Sergio Urribarri mostraba su apoyo al modelo económico conducido por el gobierno nacional y rechazaba las expresiones de dirigentes ruralistas entrerrianos respecto del mismo. Afirmaba:

La política del gobierno nacional y las medidas que toma en consecuencia, porque estoy de acuerdo con el modelo de país con desarrollo equilibrado y justo que subyace en ellas. No tengo posturas intermedias al respecto. La inversión del Estado nacional en Entre Ríos es histórica: 3000 millones de pesos en la autovía de la ruta 14, viviendas, inversiones en saneamiento, planes sociales, de salud entre otros muchos conceptos son la vuelta de las retenciones a la provincia y representan la reversión total de las políticas de aislamiento a la que fue sometida sistemáticamente la provincia a lo largo de toda la vida institucional del país hasta el año 2003.<sup>80</sup>

Jorge Busti, como máximo dirigente del PJ entrerriano y presidente de la Cámara de Diputados, evaluando la dirección que iban tomando los sucesos y los movimientos de las distintas fuerzas sociales y políticas, evitó tomar un posicionamiento definitivo sobre el conflicto, sea en favor o en contra, tanto del

---

<sup>79</sup> Lima, Danilo. “El campo fustigó a Urribarri por aplaudir ‘a la que nos roba nuestros recursos’” (27/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 3.

<sup>80</sup> “Urribarri desmintió haber mediado y respaldó a la Presidenta de la Nación” (26/03/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 5.

“campo”, como del gobierno nacional o de la postura del gobernador Sergio Urribarri. A fines de marzo comenzó a iniciar una serie de acciones tendientes al diálogo con algunos ruralistas e instituciones vinculadas al agro. El día 26, dicha Cámara, a iniciativa del dirigente, aprobó un proyecto de Resolución<sup>81</sup> a través del cual se implementaba una convocatoria al diálogo a distintos sectores agropecuarios, que contó con el apoyo de la oposición. Planteaba estar “atento al momento que vive el país y en la necesidad de lograr la paz social en base a un único instrumento que reconocemos como válido en la democracia que es el diálogo”<sup>82</sup>.

Por medio de la Resolución No16.589 se convocó a la Cámara de Diputados el día 27 a FAA, FEDECO y FARER, a la BOLSACER, al Centro de Acopiadores y a la Cámara Arbitral de Cereales, así como también a Productores Autoconvocados de las siguientes localidades: Diamante, Viale y Tabossi, Hasenkamp, Basavilbaso, Victoria, Crespo y del Túnel Subfluvial, Villaguay y Arroyo del Sauce (Gualeguaychú) y Gualeguay.

Finalmente sólo asistieron directivos de la Bolsa de Cereales, de la Cámara Arbitral y del Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, además de los productores autoconvocados de la localidad de Tabossi, que expusieron sus puntos de vista frente a legisladores oficialistas y opositores. Las cuatro entidades no participaron porque entendían que sólo debían dialogar con el Ejecutivo provincial. A su término, Jorge Busti manifestó:

A la producción entrerriana no se la puede medir de la misma manera que a la producción de la Pampa Húmeda, dadas las características de nuestra provincia, en la que cuesta mucho más producir, hay muchos pequeños y medianos productores y eso debe ser tomado en cuenta... es nuestro interés, desde la Cámara, tanto del bloque nuestro como el de la oposición, atender y escuchar a nuestra gente, al margen de las cuestiones electorales, ya que esas instancias se afrontarán a su debido tiempo. Hoy nuestra preocupación es aportar algo para resolver esta situación... aquí el problema central no es dar marcha atrás, sino suspender para negociar... el concepto del esquema de retenciones permite que en la Argentina se puedan comprar alimentos a precios razonables... debemos discutir hasta dónde se cobran esas retenciones y cuál es el destino de los montos recaudados.<sup>83</sup>

El mismo día 27, la presidenta Cristina Fernández dio un discurso en Parque Norte donde convocaba a la dirigencia agropecuaria a un diálogo amplio, previa condición del levantamiento del paro porque “no se puede negociar con una pistola en la

---

<sup>81</sup> Expediente No 16.589. Disponible en: <https://www.hcder.gov.ar/>

<sup>82</sup> “Diputados hablarán con productores” (27/03/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 5.

<sup>83</sup> “Busti y Diputados iniciaron su propia ronda de diálogo” (28/03/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 8.

cabeza”. Los ruralistas valoraron “el tono” de su discurso y los titulares de SRA, FAA, CRA y CONINAGRO analizarían si el paro sería levantado en las respectivas asambleas. Aunque, “el piquete de Gualeguaychú, encabezado por (Alfredo) De Ángeli fue el más duro de todos y anoche ratificó de inmediato la continuidad de la medida”<sup>84</sup>. Mientras que en la asamblea del Túnel los productores “se sintieron muy molestos por muchos de los conceptos vertidos por la presidenta -hubo silbidos e insultos durante su mensaje- y la indignación aumentó más”<sup>85</sup>.

En Diamante, luego del discurso de la presidenta una caravana de varias decenas de vehículos recorrió la ciudad, con el apoyo del Sindicato de Camioneros de Diamante, se detuvo frente a la casa del intendente Juan Carlos Darrichón (quien había ido a la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires donde estuvieron reunidos el gobernador con intendentes entrerrianos y al acto donde habló Cristina Fernández). En Federal seguía el corte y se había hecho una cola de 15 km de camiones que venían con mercadería de Corrientes<sup>86</sup>.

En el encuentro entre el gobierno y la MEA del viernes 28 de marzo se le propuso a la dirigencia agropecuaria medidas destinadas a paliar en forma parcial el alza de retenciones con un plan integral para los pequeños productores. Éste consistía en un subsidio a los pequeños y medianos productores que reduciría hasta 8 puntos el reciente aumento de retenciones, eliminar el precio de referencia para el trigo en el mercado interno, anulando los precios máximos y mínimos y ampliar el cupo para las exportaciones de carne. Pero después de casi seis horas de negociación no se pudo llegar a un acuerdo y quedaron en continuar el lunes. La FAA de Entre Ríos, liderada por Alfredo De Ángeli decidió votar la reanudación del corte de ruta para impedir que pasaran camiones, en medio de la negociación. En el corte del Túnel se resolvió un paro por tiempo indeterminado.

Mientras el paro agropecuario se extendía hasta el miércoles 2 de abril, el domingo 30 de marzo los productores del Túnel organizaron una “mateada”, logrando congregarse aproximadamente a 15.000 personas, generando un corte total que duró casi cuatro horas, donde participaron familiares, amigos, conocidos, estudiantes, entre otros de la ciudad que se acercaron, además de familias completas de Viale, Bovril, Federal,

---

<sup>84</sup> “Tras el pedido de la Presidenta, el campo analiza levantar la huelga” (28/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 1.

<sup>85</sup> Lima, Danilo. “A los productores entrerrianos no les cayó bien el discurso de la Presidenta” (28/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 12.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

Hasenkamp y Villa Fontana, largas filas de vehículos se apostaron en las cercanías, del lado de Paraná y hubo festival folclórico y baile. En el discurso pronunciado, Juan Echeverría (FAA) afirmaba:

Hemos logrado instalar el hecho de que el problema no es del campo, sino que el problema es de la subsistencia del interior, de los pueblos que producen la riqueza, que está siendo saqueada por la voracidad de pequeños grupos, los pooles de siembra, que nos desplazan... el 80% de todo lo que producimos se concentra absolutamente en el gobierno central, para después enviarlo a los delegados presidenciales, que son los gobernadores. Y cada uno recibe en función de cuanta pleitesía se le rinda al gobernante de turno, en este caso Cristina... el pueblo entrerriano marcó la cancha, a nuestros gobernantes, tienen que responder a nuestros reclamos, independientemente que los hayamos votado o no. La lucha agraria dejó de ser agraria, para ser del pueblo por sus recursos... Señor Urribarri... tiene que dejar de ser delegado presidencial para pasar a ser el gobernador de los entrerrianos.<sup>87</sup>

Por esos días había trece puntos de corte donde no pasaban camiones con carga agropecuaria: Paraná, Crespo, Diamante, Nogoyá, tres en Victoria, Gualaguay, Gualaguaychú, Villaguay, Concordia, Federal y Federación. Mientras tanto camioneros entrerrianos transportistas de granos evaluaban sumarse al corte para agregar presión para que el gobierno nacional dé una respuesta definitiva. La Mesa de Enlace evaluaba una tregua con el gobierno nacional y organizaba una Marcha Federal del campo que se realizaría el miércoles 2 de abril sobre la ruta 14. El desabastecimiento sobre las ciudades y la paralización de algunas actividades económicas, evaluaban las entidades, les restaba apoyo por aquellos días.

Juan Ferrari, dirigente de la FAA (Gualaguaychú) planteó que accedieron a dejar pasar camiones con lácteos porque les habían dicho que eran “inhumanos” y los dejaron para que puedan llegar a los comedores escolares. La situación era muy complicada para las empresas avícolas que dependían de los granos para alimentar a las aves, así es que luego de un encuentro en Colón entre empresarios, intendentes de la costa del Uruguay y legisladores, las principales industrias avícolas emitieron un comunicado donde planteaban que la avicultura se realizaba en 2.200 granjas y ocupaba a 25.000 empleados, de forma directa e indirecta, “consume gran parte del maíz y la soja que se comercializa en el mercado interno, siendo un cliente importante de los productores que cortan las rutas”<sup>88</sup>. Uno de los empresarios señaló que irían dirigentes

---

<sup>87</sup> Leguizamón, Ricardo. “Unas quince mil personas se convocaron en el Túnel” (31/3/2008). *El Diario de Paraná*, p. 5.

<sup>88</sup> “Las empresas avícolas advirtieron que peligra el trabajo de 25000 obreros” (31/3/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 4

gremiales a los cortes para explicar la situación del sector y pedir que los levanten. Otros sectores como el cárnico “Rural” y lácteo “Cotagú” de Gualeguaychú tenían problemas y la empresa “RPB Baggio” analizaba suspender empleados.

También se manifestaban problemas con la provisión de verduras, frutas, carnes y lácteos en las ciudades, ya que la gran mayoría de la producción hortícola ingresa a Entre Ríos a través del túnel porque es cosechada en Santa Fe, Mendoza, San Juan o el sur del país.

Un nuevo actor se sumó al escenario conflictivo cuando el día 31 de marzo un centenar de camiones (de transporte de cargas, la mayoría de cereales) se congregó a las 5.30 en Viale y marchó en caravana, recorrió el Centro Cívico de Paraná y se concentró antes de las 7 frente a Casa de Gobierno. El objetivo era manifestar su apoyo al reclamo que realiza el sector agropecuario y para solicitar una definición al gobernador sobre el conflicto. Algunos de los manifestantes hicieron notar que Entre Ríos “vive del campo”, que se cortó la cadena de pagos y que estaban imposibilitados de hacer frente a sus compromisos y no podían cumplir la tarea diaria, entregaron un petitorio al vicegobernador y luego se sumaron al corte de ruta del túnel subfluvial<sup>89</sup>.

El 31 de marzo la presidenta anunció un plan de reintegro de las retenciones para 62.500 productores de soja y girasol, que según el gobierno volverían a tener la misma rentabilidad anterior a la Resolución No 125/08 ME. Las medidas comprendían estos puntos principales: 1) Reintegros a los pequeños productores (que producen menos de 500 toneladas o 150 ha en zona pampeana) que retrotrae al 35% anterior a la suba, lo reciben los que trabajan la tierra a través de transferencia bancaria; 2) Compensación por costo diferencial del flete para productores de zonas alejadas de los puertos, a más de 400 km; 3) Impulso a la producción de trigo; 4) Creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar; 5) Créditos a tasa subsidiada para productores tamberos y avícolas.

Para los cuatro jefes del agro la medida había “llegado tarde”, la agradecieron pero confirmaron la huelga hasta el 2 de abril. Las medidas eran parte de la estrategia del gobierno por despegar a la FAA, tradicional defensora de los “pequeños y medianos productores”, respecto de la MEA. La FAA tenía una alianza en la MEA forjada sobre el acuerdo en “retrotraer las retenciones al 10 de marzo” y, en las rutas, estaba la base

---

<sup>89</sup> “Camioneros críticos en el Centro Cívico” (1/4/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 7.

social rural de productores/autoconvocados, ese sector heterogéneo al que aspiraban representar y que estaba endureciendo sus posturas.

Desde el túnel llamaron a una “noche del aguante” y resolverían en la Asamblea Federal de Gualeguaychú el futuro de la huelga. Para Juan Echeverría, se sentarían a discutir las propuestas siempre y cuando se suspendiera “por 90 días la medida anunciada el 11 de marzo. De esta manera nos iríamos de las rutas y discutiríamos si la soja es yuyo y demás, pero sobre la base que suspenda la aplicación de esta medida”<sup>90</sup>.

En un comunicado conjunto entre el PJ y el gobierno provincial se solicitó al gobierno nacional la federalización de la instrumentación de las medidas anunciadas para “evitar la burocratización” de que los productores tengan que realizar un trámite en Buenos Aires. Para Jorge Busti:

Indudablemente han mejorado en lo que hace a la propuesta para pequeños productores... las organizaciones del campo deben sentarse a dialogar, porque estas propuestas significan un gran punto de avance, que cubren un amplio espectro de pequeños productores.<sup>91</sup>

Las entidades agropecuarias que conformaban la MEA seguían firmes en mantener la unidad, y este tipo de iniciativas por parte del gobierno nacional eran interpretadas como estrategias para quebrarla, particularmente para el caso de la FAA significaba “cooptarla”. Además, el cuestionamiento acerca de que “los reintegros no terminan llegando a los productores”, o que “las compensaciones no sirven, por lo tanto para qué cobrar entonces las retenciones”, eran argumentos que pesaron en la evaluación de la nueva medida.

Las cuatro entidades de la MEA, reunidas en una “Asamblea Federal” de miles de manifestantes el 2 de abril en Gualeguaychú, decidió levantar el paro agropecuario y buscar un camino de diálogo con el gobierno nacional. Las mismas leyeron y difundieron una proclama en la que reconocían la extensión nacional de la protesta, la cual “comprende a todos los rubros de la producción rural, aunque el disparador ocasional haya sido la soja”, su intervención fue fundamental para evitar los desbordes y la violencia, planteaban que el poder legislativo sea el que establezca los impuestos y, con sospecha sobre la utilización de los recursos aportados por el agro al fisco, planteaban la necesidad de “control parlamentario, administrativo y judicial del destino

---

<sup>90</sup> “Productores de Entre Ríos convocan a la asamblea federal agraria de mañana” (1/4/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 5.

<sup>91</sup> “El PJ y el gobierno quieren federalizar la instrumentación de las medidas” (1/4/2008). *Diario Uno de Entre Ríos*, p. 6.

de las imposiciones” para “recuperar el federalismo perdido y el protagonismo de los pueblos”, porque “cuando esos fundamentos institucionales tuvieron vigencia, la Argentina fue uno de los países más respetados del mundo y allí queremos volver”<sup>92</sup>.

Sin hacer alusión directa, tal vez temporal y espacialmente la Argentina a la que las entidades querían volver era la del modelo agroexportador, donde según su percepción imperaba el federalismo y el protagonismo de los pueblos y las instituciones, fundamentalmente la institución del mercado, la que había colocado al país en el lugar de “granero del mundo”.

Con la decisión de la MEA anunciada en Gualeguaychú el 2 de abril de levantar los cortes de ruta para esperar por la convocatoria del gobierno nacional al diálogo, se cierra la primera etapa del conflicto, pero la tensión continuaría.

---

<sup>92</sup> Archivo web de la SRA (3/4/2008) Disponible en: <http://www.ruralarg.org.ar/web/notas.php?id=2720>

## **Conclusiones**

Este estudio tuvo como tema principal analizar el conflicto agrario de 2008 en la provincia de Entre Ríos, en sus inicios. Se buscó comprender las particularidades que asumió en la misma este conflicto de alcance nacional. Se formularon preguntas para aproximarnos al conocimiento de las transformaciones estructurales en el agro entrerriano y la conformación de los actores ruralistas movilizados. Asimismo se indagó en el comportamiento de los actores políticos más representativos, UCR y PJ.

Primeramente se realizó un estado del arte que intentó dar cuenta de las diferentes dimensiones de análisis que abordaron el conflicto. Los trabajos académicos de las ciencias sociales y humanidades se enfocaron en las transformaciones estructurales del agro pampeano, en las características políticas del mismo y en los análisis discursivos y culturales. Se notó la escasez de trabajos específicos para el caso entrerriano.

Luego se abordó, a partir de bibliografía específica, la historia de los derechos de exportación en Argentina y el proceso de cambios iniciados en la década de 1970 en el sector agropecuario nacional, que modificaron la estructura económica y social. Asimismo se analizó, mediante trabajos académicos y fuentes periodísticas, la relación de las entidades agropecuarias más representativas del sector agropecuario nacional con las gestiones gubernamentales desde 2002, particularmente en torno a la política de retenciones a las exportaciones.

Posteriormente se analizó la estructura económica provincial y la historia de la agricultura entrerriana, a partir de trabajos académicos, censos agropecuarios nacionales e informes específicos sobre el sector, las transformaciones en el agro entrerriano desde la década de 1970 hasta la primera década de 2000, en la que se consolidaron, tanto la expansión del cultivo de la soja como los cambios operados en el agro pampeano, siendo Entre Ríos una de las provincias en las que se manifestaron estas tendencias con mayor fuerza. Con el apoyo de los estudios sobre los nuevos actores del agro entrerriano se pudo visualizar la estructura social que fue la base social y territorial de los ruralistas movilizados durante el conflicto.

Se destaca para Entre Ríos la multiplicidad de los actores productivos agrícolas en las últimas décadas, conformados por actores tradicionales y nuevos, debido a un proceso de concentración de la propiedad con una fuerte subdivisión del suelo, lo que conllevó una fuerte heterogeneidad de actores con diferentes niveles de propiedad y capitalización. Este proceso generó un aumento del promedio del tamaño de la

propiedad y de los contratos de arrendamiento a partir de la necesidad creciente del incremento de escalas para la obtención de rentabilidad.

Los cambios en la estructura económica modificaron la estructura social en el agro nacional y entrerriano. A los productores familiares tradicionales se sumaron nuevos actores productivos que, en el caso del agro entrerriano se manifestaron como pooles de siembra locales y extra-locales, grandes terratenientes, productores extra-provinciales, proveedores de servicios e insumos, productores familiares capitalizados (expandidos), profesionales del sector y cooperativas. Junto a otros actores como contratistas de maquinaria agrícola, transportistas de cereales, acopiadores y trabajadores rurales conformaron la trama social vinculada territorialmente a la cadena agrícola-sojera. Los propietarios rentistas conformaron un grupo importante, anteriores productores tradicionales que conservaron la propiedad de sus tierras pero no pudieron capitalizarse y acomodarse a los cambios que el contexto del nuevo agro les exigía.

Se observó una presencia importante de los productores expandidos y de los tradicionales en la estructura social agropecuaria entrerriana, y una significativamente menor relevancia de otros actores como pooles de siembra y de productores extra-provinciales, lo que hace suponer una autonomía relativa de aquellos actores locales que contribuyeron a territorializar la renta agrícola y sojera en la provincia. Estos, más otros nuevos actores productivos locales, junto a otros actores vinculados al complejo sojero de manera indirecta, constituyeron la base social de los movilizados en Entre Ríos durante el desarrollo del conflicto, conformando una red territorial y social de las ciudades y pueblos.

Se realizó una caracterización del sistema político y las fuerzas políticas entrerrianas presentes hacia el año 2008 con el abordaje de las estadísticas electorales y las fuentes periodísticas. El gobierno provincial de Sergio Urribarri (PJ), asumido en diciembre de 2007, mostró un alineamiento con el gobierno nacional basado en intereses mutuos: en la estrategia del gobernador el apoyo de Nación contribuiría a apuntalar el perfil productivo de aquella con énfasis en el sector agroindustrial, potenciando las cadenas de valor, además de la obtención de financiamiento de obras de infraestructura necesarias para superar el “atraso histórico”; mientras que para la gestión de Cristina Fernández esta provincia servía como ejemplo de modelo productivo, basado en el trabajo local.

Las percepciones de empresarios y dirigentes agropecuarios entrerrianos sobre la política agropecuaria nacional, las gestiones provinciales hacia el sector y las

retenciones, fueron abordadas a partir de las declaraciones de los propios actores en contexto, a través del análisis de artículos de medios gráficos locales. No se consideró realizar entrevistas, ya que en ellos se contó con la información necesaria.

Los empresarios y dirigentes del sector agropecuario entrerriano valoraban negativamente las retenciones en los meses anteriores a marzo de 2008. Podemos sintetizar así sus argumentos: a) es un impuesto arbitrario para que el Estado nacional financie su “caja” y “la política”; b) las provincias y pueblos del interior producen la renta agraria, generando dinamismo económico, pero no se redistribuye volviendo los recursos en la forma de obras de infraestructura; c) producen un desaliento a la producción, sin poder los productores tecnificarse para aumentar los rendimientos; d) este sector, que genera el superávit fiscal, termina subsidiando al sector industrial, siendo responsable de ello el modelo económico nacional impuesto por la gestión gubernamental; e) en un contexto internacional favorable a la exportación de granos por los altos precios, la intervención del Estado produce una distorsión de los mercados; y f) las retenciones en el 2002 tenían un objetivo “social” y veían con preocupación su permanencia en el tiempo y su “institucionalización”.

Este rechazo hacia las retenciones tenía un anclaje en diferentes perspectivas ideológico-políticas, como el liberalismo económico (la intervención estatal que genera “la distorsión de los mercados”), la defensa del “federalismo” frente al “centralismo” (porteño) propia de las luchas civiles del siglo XIX. Por otro lado, una reactivación de la histórica unidad de intereses como sector agropecuario en oposición a los proyectos económicos que favorecieron modelos industrialistas de la Argentina, como sucedió entre 1930-1976.

Por último, hacían mención a su capacidad corporativa, ya que, consultadas las corporaciones agrarias en el momento de restablecimiento de las retenciones en 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde, su apoyo quedó ligado a su contribución frente a la crisis social, pero mostraban reparos si éstas quedaban ligadas a un modelo económico que protegiera el mercado interno (de hecho los gobiernos kirchneristas, ante las subas de precios internacionales de los granos, plantearon la redistribución de los recursos generados por la renta extraordinaria).

Para el análisis de las movilizaciones en el escenario provincial, se construyó una periodización a partir del desenvolvimiento de los hechos nacionales del conflicto. Se abordó con tres fuentes periodísticas nacionales, con la bibliografía específica y, fundamentalmente, con los periódicos locales la primera etapa desde el 11 de marzo

hasta el 2 de abril, es decir, a partir del impacto de la Resolución No 125/2008 ME en la provincia de Entre Ríos hasta el inicio de la tregua, para tratar de comprender y explicar los posicionamientos y acciones de los empresarios rurales y dirigentes de las principales entidades del agro entrerriano y de las fuerzas políticas.

Dicha Resolución gubernamental no diferenció pequeños, medianos y grandes productores, así como tampoco aquellos de la zona núcleo pampeana ni extrapampeana, cercanía o lejanía a los puertos, por lo que, a semejanza con la MEA nacional, las entidades entrerrianas conformaron la Mesa de Enlace provincial con FAA Entre Ríos, FEDECO, FARER y SRA distrito Entre Ríos el 14 de marzo, unificando a estas distintas corporaciones representativas de diferentes tipos de productores en su rechazo. Exigían acompañamiento del gobierno provincial en el reclamo por la transferencia de recursos producidos en suelo provincial, retenidos por las retenciones de Nación.

Las entidades carecían de recursos organizativos, por lo que los piquetes dependieron de activistas independientes, quienes se apoyaban a su vez en los pueblos y ciudades entrerrianas donde se había producido la expansión sojera. El síndrome de marginalidad y de dispersión que sufrían las corporaciones agropecuarias nacionales desde la década del '90 generó una relativa pérdida de representatividad de éstas manifiesta en la caída de afiliados y de capacidad de liderazgo de sus dirigentes, aunque la tendencia hacia la concentración de intereses se evidenció en la conformación de la MEA a raíz del rechazo a las retenciones móviles, con lo cual las cuatro entidades unificaron sus intereses y diagramaron estrategias y acciones.

Los sujetos agrarios movilizados durante el conflicto de 2008 en la provincia contra las retenciones móviles se alinearon de forma homogénea en torno a la categoría productores/autoconvocados, independientemente de la capacidad productiva, tamaño de la propiedad y nivel de capitalización, agrupando así tanto a los afiliados a entidades agropecuarias como a productores no afiliados a ninguna entidad.

Las primeras acciones de protesta mediante cortes de rutas en Entre Ríos fueron el día 17 de marzo, de manera sorpresiva en cuatro puntos geográficos, incluso para los dirigentes agropecuarios, los cuales se vieron obligados a “ponerse al frente” y organizar la metodología de la protesta, para “evitar que se anarquice”, como planteaba Alfredo de Ángeli.

La MEA se valía de las movilizaciones ruralistas para presionar al gobierno nacional en su objetivo de dejar sin efecto la Resolución No 125/08, pero las posturas de las asambleas de los tres puntos de protesta más importantes en la provincia se

mostraron como aquellas que mostraban posturas más endurecidas, en momentos de negociaciones entre la MEA con el gobierno nacional. El intento de parte de éste por quebrar la unidad, otorgando beneficios a pequeños productores, históricamente vinculados a la FAA, no fue aceptado, ya que la alianza fue forjada sobre la base de impedir la efectivización de las retenciones móviles.

Por otro lado, la “lectura” del conflicto por parte de los ruralistas movilizados en Entre Ríos imprimió a éste de algunas particularidades locales. El empobrecimiento de los pueblos del interior y la transferencia de recursos producidos en el territorio provincial centralizados en el Estado nacional, indujo a aquéllos a plantear una lucha en términos de federalismo vs centralismo, que servía políticamente a la estrategia de la MEA, pero que pronto vio sus límites, ya que el objetivo principal de ésta fue la derogación de “la 125” y no un planteo sobre la coparticipación federal de impuestos. Los medios de comunicación hegemónicos, concentrados en Buenos Aires y algunos de ellos parte de los agronegocios, otorgaron amplia repercusión a los hechos en esta provincia, como factor de legitimidad de un reclamo justo del interior campesino.

El comportamiento de las fuerzas políticas más representativas de Entre Ríos mostró que dirigentes de la UCR provincial, principal fuerza política opositora, manifestaron un apoyo explícito a los reclamos ruralistas por tratarse las retenciones de un impuesto confiscatorio que extraía recursos del territorio para ser concentrados discrecionalmente por el Estado nacional, por lo que exigían al gobierno provincial colocarse al frente de las protestas.

Por su parte, el gobernador Sergio Urribarri, alineado políticamente con el gobierno nacional, se manifestaba a favor del modelo económico nacional, planteando que el origen y resolución del conflicto estaba en poder de la Nación y que la Provincia había acompañado con medidas favorables al sector.

En tanto el PJ provincial, conducido por Jorge Busti, en esta primera etapa del conflicto, evitó tomar una postura definitiva sobre el mismo, aunque manifestaba preocupación por la paz social y por la situación diferencial de los pequeños y medianos productores entrerrianos dentro de la región pampeana, y comenzaba una estrategia de diálogo convocando a ruralistas e instituciones vinculadas al agro, evaluando la dirección que iban tomando los sucesos y los movimientos de las distintas fuerzas sociales y políticas.

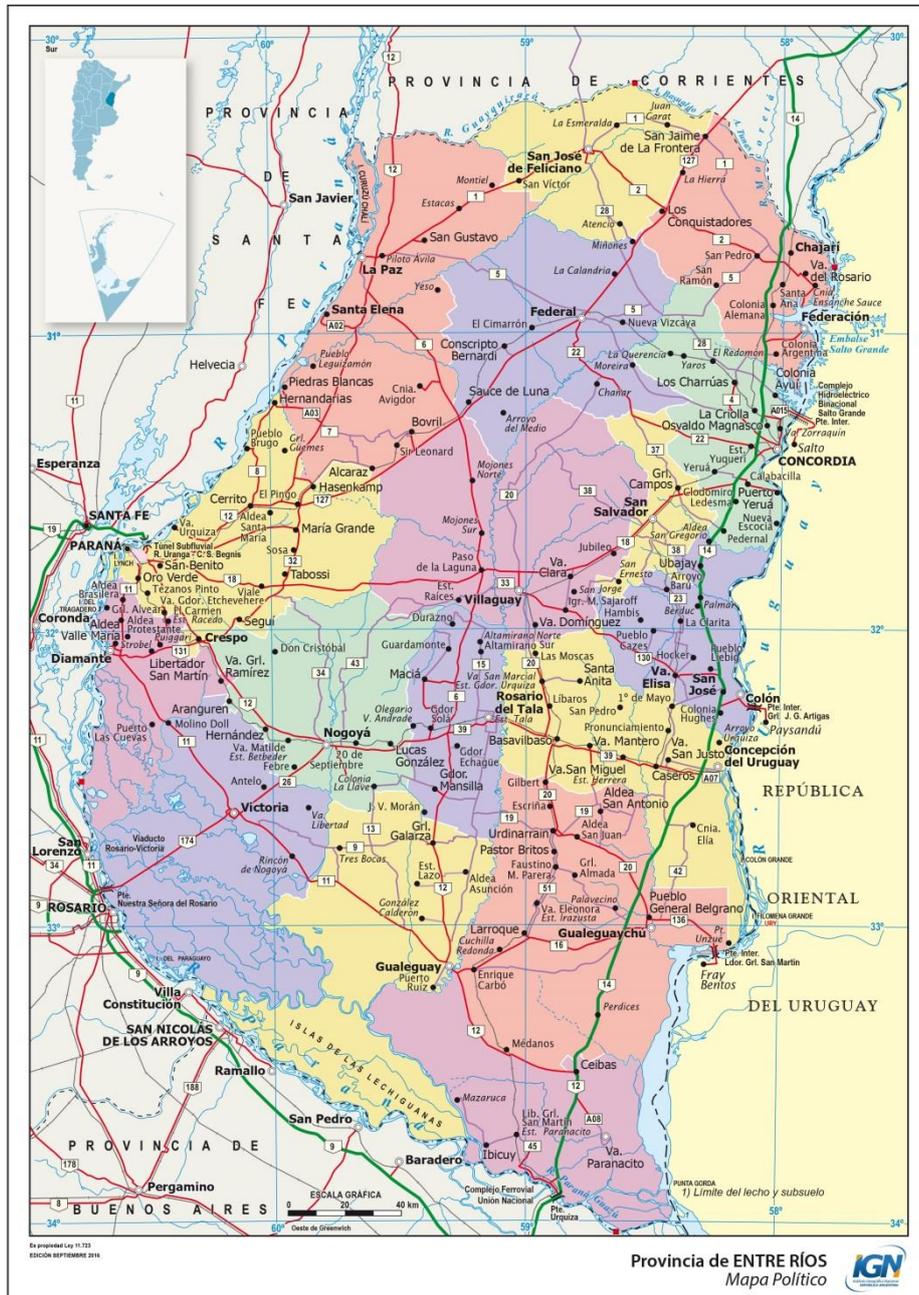
Ante los reclamos de amplios sectores sociales por las consecuencias del desabastecimiento de productos esenciales y por los cortes de rutas que impedían la

circulación de los ciudadanos, en la Asamblea Federal de Gualeguaychú el 2 de abril se decidió una tregua en el conflicto, pero las tensiones continuarían.

En una futura investigación se indagará en las siguientes etapas del conflicto agrario de 2008, desde las particularidades que asumió el mismo en la provincia de Entre Ríos. Se continuarán relevando las acciones y declaraciones de los actores económicos y políticos registradas en los medios periodísticos locales y en los trabajos académicos y no académicos realizados, así como también se profundizará en la temática con entrevistas a algunos de los protagonistas.

# Anexos

## Mapa Político de Entre Ríos

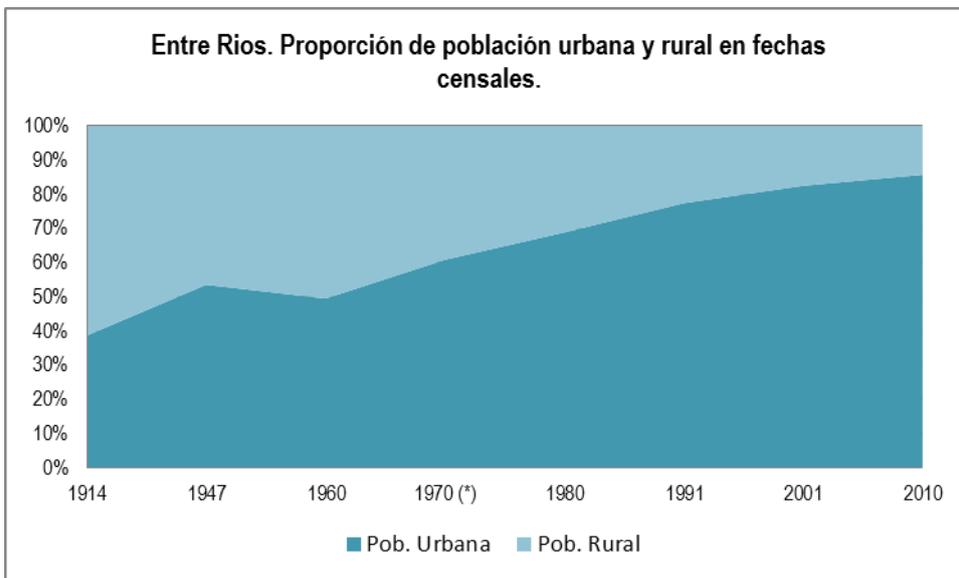


Fuente: Instituto Geográfico Nacional



Población de Entre Ríos respecto a Argentina y Población Rural de Entre Ríos									
Censos	1895	1914	1947	1960	1970	1980	1991	2001	2010
<b>Total país</b>	4044911	7903662	15893811	20013793	23364431	27949480	32615528	36260130	40117096
<b>Entre Ríos</b>	292019	425373	787362	805357	811691	908313	1020257	1158147	1235994
<b>Partic en %</b>	7,22	5,38	4,95	4,02	3,47	3,25	3,13	3,19	3,08
<b>Pob. Rural</b>	194347	265994	366048	407043	318093	283009	228572	205003	176457
<b>Partic en %</b>	66,55	62,53	46,49	50,54	39,19	31,16	22,4	17,72	14,27

Fuente: INDEC y Gobierno de Entre Ríos



Fuente: [www.entrierios.gov.ar](http://www.entrierios.gov.ar)

Caracterización por Zonas delimitadas por INTA CRER y departamentos que las conforman



Fuente: Villanueva: 2014.

## **Bibliografía**

- Arceo, N. y Basualdo, E. (2009). *Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles*. En: Arceo, E, Basualdo, E. y Arceo, N. La Crisis Mundial y el Conflicto del Agro. Bs. As.: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, UNQ.
- Aronskind, R. (2010). *Cambio estructural y conflicto distributivo: el caso del agro argentino*. En: Aronskind, R. y Vommaro, G. “*Campos De Batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*”. Bs. As.: Prometeo.
- Arredondo, F. et. al. (2009). *Competitividad y desempeño macroeconómico de Entre Ríos*. Paraná: Dictum Ediciones.
- Artese, M., Cresto, J., Gielis, L. y Barrera, M. (2013). *Cuando la protesta fue legítima. Un estudio de las representaciones del conflicto agrario de 2008 a través del diario La Nación*. Documentos de Trabajo, No 67. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Asiaín, A. (2008). *Re-tensiones a la exportación, una mirada más allá de la cuestión fiscal*. Revista Realidad Económica. No 236, mayo, Bs. As., p. 8-30.
- Azcuay Ameghino, E. (2016). *El sector agropecuario pampeano después de la convertibilidad*. Documentos del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios Nro. 11, p. 81-102.
- Balsa, J. y López Castro, N. (2011). *Transformaciones socioproductivas, actores sociales y modelos de desarrollo rural en disputa*. En: Muzlera, J., Poggi, M. y Carreras Doalla, X. comp. *Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-2010)*. Ciccus, Bs. As., p. 141-162.
- Barsky, O. y Dávila, M. (2009). *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*. Sudamericana, Bs. As.
- Barsky, O. y Gelman, J. (2009). *Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI*. Sudamericana, Bs. As.
- Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Bs. As.: Siglo XXI.

(2011). Sistema político y modelo de acumulación. Ensayos sobre la Argentina actual. Bs. As.: Caraoceca.

-Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*. Bogotá: Pearson Educación.

-Castellani, A. y Pucciarelli, A. coord. (2017). *Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal*. Bs. As.: Siglo XXI.

-Centro Regional INTA Entre Ríos – Université Toulouse Le Mirail (Dynamiques rurales). *Cambios productivos y organizacionales en el sector agropecuario e implicancias socio-territoriales. La experiencia de la Provincia de Entre Ríos*. Informe final Programa de investigación. Noviembre de 2012.

-Comelli, M., Castro García, C., Godfrid, J., Schwartz, A., Ciccolella, M. y Negro, M. (2010). *La Trama de un conflicto extendido. El conflicto agrario marzo – julio de 2008*. En: Giarracca, N. y Teubal, M. coord. *Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates*. Bs As., Antropofagia.

-De Anchorena, B. (2017). *La autonomía en disputa: capacidades estatales y poder empresario en el conflicto agropecuario argentino de 2008*. Tesis: Master of Arts and Sciences, Georgetown University.

-Domínguez, N. y Orsini G. (2007). *Reflexiones sobre el impacto de la agricultura permanente en base a la monoproducción de soja en las economías regionales: el caso de Entre Ríos*. Revista Gestando, 2.

(2009). *El conflicto rural, su relación con el modelo hegemónico sojero y la estructura agraria vigente*. Pampa, Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, año 5, n° 5, Santa Fe, Argentina, UNL (pp. 219-237).

-Engler, P., Vicente, G. y Cancio, R. (2007). *Evolución de la agricultura y la sustentabilidad a lo largo de un siglo en Entre Ríos*. (pp 19-31). En: Caviglia, O.P., Paparotti, O.F., Sasal, M.C. (Eds) 2007. *Agricultura Sustentable en Entre Ríos*. Bs. As. Ediciones INTA.

-Engler, P. y Vicente, G. (2009). *Caracterización y localización de las formas de organización social predominantes de las unidades agropecuarias de Entre Ríos*. X

Congreso Argentino de Ingeniería Rural y II del MERCOSUR. Rosario, Argentina 1-4/9.

-Fernández, S. (2015). *La perspectiva regional/local en La historiografía social argentina*. Folia Histórica del Nordeste, N° 24, Resistencia, Chaco, Diciembre. IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 189-202.

-Flores, N. (2018). *Caracterización y evolución de la estructura productiva de Entre Ríos. Período 2003-2015*. Tesis de grado. Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Noviembre.

-Giberti, H. (1985). *Historia económica de la ganadería argentina*. Hyspamérica, Bs. As.

-Giarracca, N. y Palmisano, T. (2010). *Expansión sojera y paro agrario. Reflexiones para comprender el 2008 y 2009 en la Argentina*. En: Giarracca, N. y Teubal, M. coord. *Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates*. Bs As.: Antropofagia.

-Giarracca, N., Teubal, M. y Palmisano, T. (2010). *Paro agrario: crónica de un conflicto alargado*. En: Giarracca, N. y Teubal, M. coord. *Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates*. Bs As., Antropofagia.

-Gras, C. (2010). *Actores agrarios y formas de acción política en la Argentina contemporánea. Un análisis a partir de los grupos de "autoconvocados" en la región pampeana*. En: Aronskind, R. y Vommaro, G. "Campos De Batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario". Prometeo, Bs. As.

(2011) *Conflicto agrario, actores sociales y la construcción política del campo*. En: Muzlera, J., Poggi, M. y Carreras Doalla, X. comp. *Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-2010)*. Ciccus, Bs. As., p. 39-64.

-Gras, C. y Bidaseca, K. (directoras) (2010). *El mundo chacarero en tiempos de cambio. Historia, territorio e identidad en los pueblos sojeros*. Ciccus ediciones, Bs. As.

-Hora, Roy (2010). *La crisis del campo del otoño de 2008*. Desarrollo Económico, vol. 50, No 197 (abril-junio).

-Jafelle Fraga, A. y Baistrocchi, G. (2011). *Campo de batalla. Crónica de la resolución 125*. Ediciones B, Bs. As.

-Kejsefman, I. (2016). *Evolución de la industria manufacturera en la postconvertibilidad y su impacto en el conflicto distributivo: una aproximación al llamado "conflicto del campo"*. En: <http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/xxv-jornadas-de-historia-economica> Salta, 21 al 23 de Septiembre de 2016.

-Lattuada, M. y Neiman, G. (2005). *El Campo Argentino. Crecimiento con Exclusión*. Bs. As.: Capital Intelectual.

Lattuada, Mario (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina: transformaciones institucionales a fines del siglo XX*. Universidad Nacional de Quilmes, Bs. As.

-Lissin, L. (2010); *Consecuencias no deseadas de la acción colectiva empresaria: la Federación Agraria Argentina en la Mesa de Enlace. Un abordaje a partir de la sociología económica. Papeles de trabajo*. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Año 3, n° 6, Buenos Aires, agosto de 2010.

-Montero, Oscar (2006). *Pasado, presente y futuro de la agricultura entrerriana*. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Paraná.

-Motura, Nicolás (2017). *La constitución de redes de poder en la Costa del Paraná. El caso de la familia Etchevehere (1860-1914)*. Tesis de Licenciatura en Historia, FHAyCS, UADER. Marzo.

-O'Donnell, G. (1977). *Estado y alianzas en la Argentina, 1955-1976*. Revista Desarrollo Económico, Vol. 16, No. 64 (Ene. - Mar.).

(1978). *Apuntes para una teoría del Estado*. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, No. 4, Estado y Clases Sociales en América Latina, Oct. - Dic.

-Orsini, G. (2019). *Capitalismo, agro y explotaciones familiares. El caso de Entre Ríos*. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, UNER.

- Osorio, J. (1998). *Estructuras, sujetos y coyuntura: desequilibrios y arritmias en la historia*. Iztapalapa 44, julio-diciembre pp.13-28.
- Panero, M. (2017). *La representación de intereses de la cúpula del sector agropecuario. La Sociedad Rural Argentina. ¿Declive o permanencia?* Tesis de Doctorado en Ciencia Política, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.
- Peixoto, J. y Loza, J. (2006). *La relación Argentina-Brasil: entre la administración de conflictos y las políticas de cooperación*. Universidad Nacional de Córdoba-Centro de Estudios Avanzados (CEA). ESTUDIOS No 18 (Otoño).
- Poulantzas, N. (1986). *Estado, poder y socialismo*. Mexico, D.F.: Siglo veintiuno.
- Pucciarelli, A. (2017). *El conflicto por “la 125” y la configuración de dos proyectos prehegemónicos*. En: Castellani, A. y Pucciarelli, A. coord. *Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal*. Bs. As.: Siglo XXI.
- Rapoport, M. (2010). *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*. Booket: Bs. As.
- (2011). *Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas*. En: Vázquez Blanco, J. y S. Frascina “*Aportes de la Economía Política en el Bicentenario*”. (comp.). Prometeo, Bs. As.
- Rigotti, S. (2014). *El Conflicto del Campo. Matrices culturales e identificaciones políticas*. Mundo Agrario, vol.15, n° 29, agosto.
- Sáenz, Roberto. *La rebelión de las 4x4. La revuelta de los patrones rurales y la izquierda argentina*. Editorial Antídoto, Bs. As.
- Sartelli, Eduardo (Dir.) (2008). *Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo-julio de 2008*. RyR, Bs. As.
- Sautu, R. (et. Al.) (2005). *Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. CLACSO, Bs. As.
- Schunk, R. y Rodríguez, L. (2011). *2003-2010: La reconstrucción de un país. Economía política del peronismo kirchnerista*. Paraná: Fundación La Hendija.

- Serrano, W. (2013). *“Juntémonos y Vamos”*: La organización asamblearia en el Túnel Subfluvial en el conflicto agropecuario de 2008. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social.
- Sili, Marcelo. *La Argentina rural. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo de los territorios rurales*. Ediciones Inta, Bs. As., 2005.
- Solanas, R. (2009). *El conflicto por la renta extraordinaria de la soja. Una mirada entrerriana*. Bs. As., Dunken.
- Teubal y Palmisano, T. (2010). *El conflicto agrario: características y proyecciones*. En: Giarracca, N. y Teubal, M. coord. *Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates*. Bs As.: Antropofagia.
- Thwaites Rey, M. (1999). *El Estado: notas sobre su(s) significado(s)*. Publicación de la FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Van Dijk, T. (2005). *Ideología y análisis del discurso*. En: Revista Internacional de Filosofía y Teoría Social n°29, Maracaibo, abril/junio.
- Varesi, G. (2011). *Modelo de acumulación y dinámica política. Argentina 2002-2011: Neodesarrollismo y radicalización progresista*. Realidad Económica No 264, nov-dic.
- (2014). *El “conflicto del campo” de 2008 en Argentina: Hegemonía, acumulación y territorios*. Geograficando. Disponible en: <http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/>
- Villanueva, D. (2014). *Expansión productiva y transformaciones de los productores agropecuarios familiares capitalizados en la provincia de Entre Ríos. Período 2001-2012*. Tesis de Maestría en Estudios Sociales Agrarios, FLACSO, Bs. As.
- Villulla, J. (2009). *Apuntes críticos para el debate sobre el conflicto agrario de 2008*. VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Buenos Aires 11, 12 y 13 de Noviembre, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

-Villulla, J. y Amarilla, C. (2011). *Los contratistas de maquinaria en la agricultura pampeana: ¿una clase social en sí misma?* Documentos del CIEA; Lugar: Buenos Aires; Año, p. 73 – 94.

-Vommaro, G. (2010). *Acá el choripán se paga: movilización política y grupos sociales en el reciente conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos*. En: Aronskind, R. y Vommaro, G. *Campos De Batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*. Prometeo, Bs. As.

-Yabkowski, N. (2010). *Nosotros, ellos...Todos. Los sentidos de la representación política y los recursos discursivos utilizados para ganar legitimidad en el conflicto*. En: Aronskind, R. y Vommaro, G. *Campos De Batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*. Prometeo, Bs. As., 2010.

- Ybran, R y Lacelli, G. (2016). Informe estadístico mercado de la soja. Recuperado de: [https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta\\_informe\\_estadistico\\_del\\_mercado\\_de\\_soja.pdf](https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_estadistico_del_mercado_de_soja.pdf) el 3/9/2020.